



## **Caso**

**«Cien años de injerencia acordada entre Colombia y Estados Unidos. Una mirada desde la asistencia militar y policial»**

**Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No**

**Repetición**

**Capítulo Narrativa Histórica**

**2022**



## Índice

<b>SIGLAS</b>	<b>3</b>
<b>1. INJERENCIA DE EE. UU: 50-70</b>	<b>6</b>
1.1. Inmaterialidad de la guerra: la construcción del enemigo interno.....	17
1.2. Materialidad de la guerra: prácticas de contrainsurgencia .....	20
1.3. Plan Lazo .....	29
<b>2. INJERENCIA DE EE. UU.: 90 – 2009</b>	<b>38</b>
2.1. Plan Colombia .....	63
2.2. Inmaterialidad de la guerra: contrainsurgencia bajo el discurso de la guerra contra las drogas <sup>72</sup>	
2.3. Contrainsurgencia en el marco de Plan Colombia: la materialidad de la guerra.....	78
2.4. Materialización de la política contraterrorista y antinarcoáticos: Plan Patriota.....	89
2.5. Privatización de la seguridad: otra estrategia de la lucha contrainsurgente. Mercenarios y contratistas .....	96
<b>3. DE RECEPTOR A DONANTE, ¿UNA NUEVA FORMA DE LA INJERENCIA ACORDADA?</b>	<b>126</b>
<b>REFERENCIAS</b>	<b>132</b>



## **Siglas**

Acción Social - Acción Social y la Cooperación Internacional

AFEUR - Batallones de Alta Montaña, Unidades Antiterroristas

AGLAN - Agrupación de Lanceros

ANUC - Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

APC - Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia

AUC – Autodefensas Unidas de Colombia

BACOA - Batallón de Comandos

BIM - Brigada de Institutos Militares

BINCI - Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia

BP - British Petroleum

BRCNA - Brigada Contra el Narcotráfico

BRIM – Brigadas Móviles

CBP - United States Customs and Border Protection

CCAI - Centro de Coordinación de Acción Integral

CCOES - Comando Conjunto de Operaciones Especiales

CEAS - Centro de Estudios y Acción Social

CIA - Agencia Central de Inteligencia / Central Intelligence Agency

CIP - Centro de Política Internacional

CMSP - Compañías Militares de Seguridad Privadas

COESE - Comando de Operaciones Especiales del Ejército

COMINT - Comunicaciones de Inteligencia

COPES - Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo

CSDI - Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia

DAS - Departamento Administrativo de Seguridad

DEA – Administración de Control de Drogas / Drug Enforcement Administration

DIA Defense Intelligence Agency

DIH – Derecho Internacional Humanitario



DSC - Defense Systems Colombia  
DSL - Defense Systems Limited  
EE.UU - Estados Unidos  
EFDDS - Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social  
ELN – Ejército de Liberación Nacional  
EPL – Ejército Popular de Liberación  
ESLAN - Escuela de Lanceros  
EUM - End-use monitoring  
Europol - European Union Agency for Law Enforcement Cooperation  
FARC – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  
FBI - Federal Bureau of Investigation  
FBN - Oficina Federal de Narcóticos / Federal Bureau of Narcotics  
FF. AA – Fuerzas Armadas  
FFA - Foreign Assistance Act  
FMF - Financiamiento Militar Externo / Foreign Military Financing  
FUTCO – Fuerza de Tarea Conjunta Omega  
GAULA - Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal  
HLSSD - Diálogos de Alto Nivel en Seguridad Estratégica / High-Level Security Dialogue  
HVT - Objetivos de Alto Valor / High Value Targets  
ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement's  
IGRP - Programa Inicial de Respuesta a la Gobernanza  
IMET - International Military Education and Training  
IMINT - Recolección de Imágenes de Inteligencia  
INC - International Narcotics Control  
INCORA - Instituto Colombiano de la Reforma Agraria  
INL - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs  
INPEC - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.  
Interpol - International Criminal Police Organization,  
IPA - Interamerican Police Academy  
IRA – Irish Republican Army  
JAC - Juntas de Acción Comunal  
JTF-S - Joint Task Force South



M19 – Movimiento 19 de abril

MAAG - Grupo de Asistencia y Asesoría Militar

MAP Programa de Asistencia Militar / Military Assistance Program

MGP – Municiones Guiadas de Precisión / Precision-Guided Munitions

MPRI - Military Professional Resources Inc

NCIS - National Criminal Intelligence Service

NSA - National Security Archive

OPSCO - coordinador de operaciones militares

OTI - Oficina de Incentivos de Transición

OXY - Occidental Petroleum

PCIM - Plan Integral de Consolidación de la Macarena

PMC - Programa de Mantenimiento Civil

PNC - Plan Nacional de Consolidación

PNC - Policía Nacional de Colombia

PSD - Política de Seguridad Democrática

RMB - Red de Mutuo Beneficio

SAS - Servicio Especial Aéreo británico / Special Air Service

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

SIC - Servicio de Inteligencia Colombiano

SICA - Sistema de Integración Centroamericano

SOAR - Special Operations Air Regiment

SOAW - Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas/ School of the Americas Watch

SOLIC - Operaciones Especiales Conflictos de Baja Intensidad

SOUTHCOM – Comando Sur de Estados Unidos / U.S. Southern Command

TIAR - Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca

UFCO - United Fruit Company

UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero

USAID - United States Agency for International Development

USIS - United States Investigative Services

USMILGROUP - US Military Group

## 1. Injerencia de EE. UU: 50-70

A mediados de 1800 comenzaron a evidenciarse los intereses geoestratégicos de Washington sobre Panamá, la bisagra entre el Caribe y el Pacífico. Esto desencadenó, finalizada la guerra de los Mil días, en 1902, la separación del istmo (1903), auspiciada y respaldada por los EE.UU. La independencia panameña marcó un punto de quiebre en Colombia. Al perder Panamá, las élites colombianas experimentaron una especie de derrotismo frente a EE.UU. que no se manifestó en sentimientos nacionalistas ni antiamericanos, sino que, por el contrario, significó la aceptación del predominio la potencia regional en la relación bilateral<sup>1</sup>. Bajo la denominada Doctrina Suarez -*Respice Polum*-que consistió en mirar al Polo, mirar al Norte y sacar los mayores provechos de dicha relación, se normalizó la situación con EE.UU., lo que marcó la ruta de la política exterior colombiana hacia Washington y, en consecuencia, el alineamiento de Colombia durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.<sup>2</sup>

La razón de la aceptación de esta relación profundamente asimétrica obedeció a que Colombia vio en Estados Unidos una salida para obtener un anhelado desarrollo económico. Colombia dependía económicamente del comercio exterior y de la inversión extranjera. Las exportaciones de café, petróleo, banano y oro fueron representativas entre 1925 y 1949 y, en su mayoría, iban hacia EE.UU. Adicionalmente, las compañías que explotaban el petróleo, el oro e incluso el banano eran extranjeras, de hecho, en buena medida eran estadounidenses.

En este escenario, las élites colombianas igualaban la protección de los intereses económicos de las empresas extranjeras a la protección misma del interés nacional colombiano, lo que llevó a los gobiernos a ser condescendientes y permisivos con estas corporaciones. El ejemplo más extremo fue el caso de la Masacre de las Bananeras en 1928,

---

<sup>1</sup> Drekonja, Gerard. Formulando la política exterior colombiana. En *Retos de la política exterior colombiana*. Fondo Editorial Cerec. 1983. Pp. 97; Pardo, Rodrigo y Juan Gabriel Tokatlian. Segundo centenario de política exterior: una reflexión en torno a Colombia. En Calderón, María Teresa y Restrepo Isabela (eds). *Colombia 1910-2010*. Taurus. 2010. Pp. 353.

<sup>2</sup> Lynn Coleman, Bradley. Colombia and the United States: The Making of an Inter-American Alliance, 1939-1960. The Kent State University Press. 2008. Pp. 328.



donde la fuerza pública, por orden del gobierno nacional, exterminó la protesta social de los trabajadores de la empresa United Fruit Company (UFCo)<sup>3</sup>, tildándolos de comunistas y subversivos.

A medida que se iba estrechando la relación comercial y política, Estados Unidos brindaba ayuda para el desarrollo. Ejemplo de esto fueron las dos misiones Kemmerer que, sin lugar a duda, fueron importantes para la estructuración institucional del Estado colombiano. Con los años, la cooperación también transitaría hacia los asuntos de seguridad.

En 1938 llegaron tres bombarderos estadounidenses a Colombia durante la administración de Eduardo Santos (1938-1942), lo que marcó el inicio de la cooperación en seguridad que se desarrollará en adelante entre ambos países. Santos solicitó el envío de asesores militares que ayudarían a mejorar las capacidades de Colombia en función de la defensa hemisférica frente al nazismo. Esto dio lugar a un programa de cooperación que incluía medidas tradicionales de seguridad y actividades de contraespionaje. Colombia se convirtió, durante la Segunda Guerra, en un importante aliado de EE.UU. en el propósito de mantener la estabilidad y seguridad del canal de Panamá. De este modo, con la presidencia de Eduardo Santos se inauguró formalmente la cooperación militar entre ambos países.

En 1939 llegó a Colombia una misión militar estadounidense encargada de entrenar a la Fuerza Aérea y así reemplazar la misión naval. Poco tiempo después, pilotos, oficiales de marina, unidades de artillería e infantería, comenzarían a viajar a EE. UU. a recibir un entrenamiento más formal.<sup>4</sup> Posteriormente, en 1942, se firmó un nuevo tratado militar con el cual se prorrogaba la presencia de misiones del Ejército y la Fuerza Aérea de EE.UU. en Colombia, en aras de preservar la seguridad en las zonas del Caribe y Pacífico<sup>5</sup>.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la cercanía en materia de seguridad entre ambos países continuó, ya no sólo en términos de la relación bilateral, sino que también se reflejó en escenarios multilaterales. Así, Alberto Lleras Camargo, el entonces embajador

---

<sup>3</sup> Para ampliar este tema se recomienda revisar discurso de Gaitán en el congreso de la república sobre la Masacre de las Bananeras.

<sup>4</sup> Randall, Stephen. Aliados y Distantes. Historia de las Relaciones entre Colombia y EE. UU. desde la independencia hasta la guerra contra las drogas. Tercer Mundo, CEI-Uniandes. 1992. Pp. 327 (p.5)

<sup>5</sup> Ibid. p. 12-13.



colombiano en Estados Unidos, bajo la segunda presidencia de Alfonso López Pumarejo (1942-1945), participó tanto en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, como en la del Acta de Chapultepec; esta última, fue un esfuerzo de los países americanos por asistirse mutuamente en el caso de una agresión externa a la región. En esta misma acta quedó consignada la obligación de redactar un acuerdo que dictara las medidas a llevar a cabo ante una situación de guerra, lo cual se cumplió con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en septiembre de 1947, en Río de Janeiro. Así comenzaría a configurarse el sistema interamericano, con tinte marcadamente anticomunista, dadas las condiciones del escenario internacional que se comenzaban a establecer.

Este tratado identificó que la defensa y ayuda mutua se daba en virtud de los “ideales democráticos”<sup>6</sup> que compartían los países americanos, atando, así, la seguridad y paz del hemisferio a la condición democrática de sus Estados, convirtiendo cualquier cambio a esta situación como una amenaza. De esta forma, la naciente Organización de Estados Americanos, como foro de las naciones del hemisferio occidental, se alineó con la defensa del modelo político defendido por Estados Unidos que, además de reformar su organización militar, crearía entidades dedicadas a la protección de la seguridad nacional (incluyendo, por supuesto, la Agencia Central de Inteligencia -CIA) por medio de la Ley de Seguridad Nacional de 1947 para la “defensa futura” de los intereses nacionales.

La Guerra Fría, que comenzaría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se centró en dos escenarios de confrontación: uno tecnológico, en una competencia por superarse armamentísticamente y, otro, que toma forma de guerras no convencionales o de baja intensidad, ubicadas en los países que hacían parte de las zonas de influencia de las potencias, buscando reducir la presencia e intervención de la contraparte sobre otros países. La primera de estas confrontaciones se daría en Corea entre 1950 y 1954, a la cual Colombia envió un batallón militar, demostrando su alineación al bloque occidental y, particularmente, a EE.UU. La participación de Colombia en la Guerra de Corea con el Batallón Colombia se convirtió en un hito para el Ejército colombiano. A partir de ese momento comenzaría a estructurarse

---

<sup>6</sup> Estos ideales democráticos obedecían más a la garantías de un modelo económico capitalista que permitiera la inversión extranjera



una doctrina de corte contrainsurgente que tendría profundos impactos en el desarrollo del conflicto interno.

La revolución cubana de 1959 hizo que la cooperación estadounidense se modificara, ampliando la visión eminentemente militar de su ayuda. Con el diseño de Alianza para el Progreso, Estados Unidos también dirigió un componente social para el desarrollo económico de los países latinoamericanos bajo la teoría de la modernización, que dictaba un cambio social a partir de la industrialización, lo que reduciría el riesgo de movilizaciones sociales y brotes comunistas. Entre 1960 y 1964, Colombia pasó de estar en el puesto cincuenta y uno al noveno con respecto a los países con mayor cantidad de asistencia estadounidense en el mundo<sup>7</sup>. Finalmente, la ayuda ascendió a los 885 millones de dólares, sólo por detrás de Brasil en la región y correspondientes al 12% del total de aportes dados a América Latina.

Por supuesto, esta fórmula del anticomunismo se complementarían con la profundización de la asistencia militar. Los nexos entre Estados Unidos y Colombia se fortalecerían en esta materia con la aprobación de la Ley de Seguridad Mutua, en 1958, por parte del Congreso de Estados Unidos. Se comenzó a hacer realidad el Programa de Asistencia Militar (PAM), con misiones militares y ayuda económica estadounidense a la Fuerza Pública colombiana. Esto se concretaría, no sólo por la iniciativa de EE.UU., sino, sobre todo, por la labor del presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien se encargó de encuadrar el conflicto naciente en la lógica de la Guerra Fría, enmarcando a las llamadas “repúblicas independientes” dentro del discurso anticomunista y avalando, por tanto, un tratamiento militar sobre estos territorios y poblaciones. A pesar de que la situación en Colombia no representaba una amenaza en la época, sí mantenía una posición geoestratégica, por lo que recibió una misión de la CIA, en 1959; la misión militar Yarborough, en 1962; y una misión para la policía en 1963.

---

<sup>7</sup> Rojas, Diana Marcela. La alianza para el progreso de Colombia. anal.polit. [online]. 2010, vol.23, n.70, pp.91-124. ISSN 0121-4705.



La primera misión estuvo conformada por militares<sup>8</sup> y civiles estadounidenses, y fue llevada a cabo por la CIA en 1959 con el acompañamiento de las secretarías de Estado y Defensa. Su propósito fue estudiar el problema de la violencia en el país y generar un informe con recomendaciones sobre tácticas de contrainsurgencia, acciones civiles, operaciones de inteligencia, guerra psicológica y misiones encubiertas. Se concluyó que las Fuerzas Militares no iban a ser suficientes para resolver el problema de violencia, por lo que se recomendaba la adopción de estrategias político-militar que incluyeran acciones para la construcción y el fortalecimiento de las instituciones estatales y la mejora de las condiciones sociales y económicas de la población.<sup>9</sup> Esto llevó a la transformación del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), y a la entrega de helicópteros, vehículos, equipo de comunicaciones y armas para lanceros.<sup>10</sup>

La segunda misión, enviada en 1962, estuvo conformada por militares de Fort Bragg, una base militar estadounidense especializada en guerras no convencionales, operaciones especiales y guerra psicológica. Al mando estuvo el brigadier general William P. Yarborough, quien le hizo seguimiento y amplió las recomendaciones entregadas en 1959 y, adicionalmente, acompañó el diseño llevado a cabo por el Ejército colombiano llamado Plan Lazo<sup>11</sup>. Dentro de las recomendaciones del informe se reforzó la necesidad de acciones cívico-militares dirigidas a la atención y asistencia de la población, un programa de propaganda en contra de los “bandidos”, el entrenamiento clandestino de civiles y personal militar en operaciones de resistencia para ejecutar actividades paramilitares y diseñar un plan de guerra psicológica y de adoctrinamiento de tropas. Estas fueron incorporadas en la lucha

---

<sup>8</sup> Como lo menciona Rempe (2002), varios de los miembros del equipo que llevan a cabo el estudio trabajaron previamente con el coronel Edward G. Landsdale en la represión de revolucionarios en Filipinas (1950-1953), siendo esta la primera transferencia de estrategias y tácticas de guerra del Sudeste Asiático a Colombia.

<sup>9</sup> Rempe, Dennis. *The Past as Prologue? A History of U.S. Counterinsurgency Policy in Colombia, 1958-66*. North-South Center and Strategic Studies Institute. 2002. Pp. 46.

<sup>10</sup> Formaban parte de dicha comisión seis personas: Hans V. Tofte con experiencia en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea; Col. Berkeley Lewis: con experiencia en armas no-convencionales; Lt. Col. Joseph J. Koontz que había servido con el Grupo de Asistencia y Asesoría Militar (MAAG) en Bogotá entre 1952-56; Major Charles T. R. Bohannon con experiencia en campañas contra insurgentes en las Filipinas entre otras; Col. Napoleón Valeriano: con experiencia en campañas contra insurgentes en las Filipinas, jefe de Policía de Manila; Bruce Walker: con experiencia en Corea, Ecuador y Honduras.

<sup>11</sup> Fuente de archivo externa. 18244-OE-227295. Ministerio de Defensa Nacional. “Plan de Operaciones Lazo”.



contrainsurgente y fueron incluidas en reglamentos y manuales de instrucciones para operaciones contraguerrillas del Ejército colombiano, estableciendo así prácticas de lucha contrainsurgente.<sup>12</sup>

En el marco de esas recomendaciones, también se sugirió el envío de oficiales colombianos a los cursos de contrainsurgencia de la Escuela Especial de Combate en Fort Bragg, Carolina del Norte, también conocida como la Escuela de las Américas, y en otras instituciones como Fort Holabird, sede de los servicios de inteligencia militar del Ejército estadounidense, donde oficiales superiores del Ejército, entre ellos el Teniente Coronel Ricardo Charry Solano –reivindicado por el Ejército como el “Artífice de la Inteligencia Operativa del Ejército Nacional”<sup>13</sup>–, realizaron cursos de Inteligencia.

Asimismo, a partir de la década de 1960, el Ejército colombiano empezó a adoptar manuales militares de lucha contrainsurgente del Ejército de los EE.UU.,<sup>14</sup> manuales de inteligencia militar<sup>15</sup> y a reproducir, como textos de formación, literatura militar sobre experiencias contrainsurgentes en varios países del mundo. En este último rubro, cabe destacar el texto *La Guerra Moderna* del coronel francés y veterano de la guerra de Argelia, Roger Trinquier, recomendando la práctica de la desaparición forzada, tortura y posterior ejecución de los enemigos detenidos<sup>16</sup>.

A partir de estas misiones y de la asistencia militar y económica estadounidense, el gobierno inició una transformación de las competencias y funciones de la fuerza pública colombiana aceptando el diagnóstico generado por los oficiales extranjeros y dando la puntada final para encuadrar el escenario nacional bajo la lógica de la amenaza comunista.

---

<sup>12</sup> Entrevista 290-VI-00001 hombre guerrillero, exilio, 2019.

<sup>13</sup> En 1963, bajo el impulso del Teniente Coronel Charry Solano, se llevó a cabo el primer Curso de Inteligencia y Contrainteligencia para oficiales de las FF.MM y, posteriormente el primer Curso de Inteligencia para Suboficiales. Ese mismo año, se crearon las primeras unidades de inteligencia militar en varias ciudades (como Bogotá, Barranquilla y Cúcuta), bajo la dirección de la Dirección del Departamento E-2 del Comando del Ejército.

<sup>14</sup> Así, por ejemplo, el manual “Operaciones contra las Fuerzas irregulares” de 1962 es una traducción del manual FM-31-15 del Ejército de los EE.UU. Otros ejemplos con el *Reglamento de combate de contraguerrillas*, EJC J-10, aprobado por la Disposición 005 del Comando General de las Fuerzas Militares de 9 de abril de 1969; y el “S.O.P. operacional en la lucha contra guerrillas” de la VIII Brigada del Ejército, que retoman numerosos apartes del FM-31-15.

<sup>15</sup> En la década de 1960 se adoptan sucesivamente 3 manuales.

<sup>16</sup> Trinquier, Rogier, *La Guerra Moderna*. Ejército de Colombia, Biblioteca del Ejército, Volumen No. 12, enero de 1963, págs. 28 y 29.

Esto se materializaría en el Estatuto Orgánico de la Defensa Nacional. De este modo, a partir del Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965, se establecieron las obligaciones de civiles y militares en la defensa de la nación. Estos cambios dieron lugar a una reestructuración de la fuerza pública que se fundamentó en el adoctrinamiento<sup>17</sup> y entrenamiento<sup>18</sup> militar en la Escuela de las Américas y bases militares estadounidenses; en el ajuste a los manuales y reglamentos para enfrentar a las insurgencias; en el desarrollo y la modernización de la inteligencia contrainsurgente; y en la construcción de un enemigo interno, a partir de la estigmatización de distintos sectores sociales opositores, que comenzaron a ser empaquetados como comunistas y guerrilleros. Adicionalmente, las Fuerzas Militares del período estuvieron lideradas por veteranos de la Guerra de Corea, quienes, al socializarse en las prácticas de guerra estadounidenses, regresaron al país con el objetivo de reformar las fuerzas y preparar la ofensiva en la lucha contrainsurgente.

Aún hoy, los uniformados del Ejército Nacional se refieren a este momento como uno de los referentes más importantes en materia de transformación temporal, espacial y doctrinal de la Fuerza Pública.<sup>19</sup> Lo aprendido en Corea terminó siendo definitivo en el empleo de tácticas y estrategias para el desarrollo de operaciones militares que tendrían como componente relevante el empleo de la inteligencia y contrainteligencia en la guerra irregular<sup>20</sup>. La participación en Corea, además de comenzar a socializar a los militares colombianos en las técnicas de combate contrainsurgente, también fue determinante de

---

<sup>17</sup> Este adoctrinamiento se ha centrado en la construcción de un enemigo interno, inicialmente los comunistas, al cual se le resignifica como una amenaza recurrente para la vida de los soldados y para la estabilidad del país, por lo que se insta a solucionarlo de raíz mediante su exterminio (Entrevista 112-AA-00001, Campesinos, Cali, 2020; Entrevista 142-PR-00654, Fuerza Pública, Bogotá, 2020).

<sup>18</sup> Esta formación se ha dado a 10.445 uniformados colombianos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la Escuela de las Américas y otro número de uniformados ha sido entrenado en bases estadounidenses como Fort Bragg y Fort Benning (Entrevista 189-VI-00189 Guerrilla, Tunja, 2019; Entrevista 189-VI-00190 Guerrilla, Caquetá, 2019; Entrevista 237-AA-00004 Excombatiente, Valledupar, 2019; Entrevista 112-AA-00001 Fuerza Pública, Cali, 2019).

<sup>19</sup> Entrevista 429-PR-00391, Defensor de DDHH, Bogotá, 2020

<sup>20</sup> En Colombia la llamada guerra irregular, se constituyó en un complejo de estrategias y acciones desarrolladas por los diferentes actores en conflicto, en un tiempo y espacio definido, en donde los planes, intereses y blancos de ataque, se corresponden con un modelo particular de violencia, que a su vez, es influenciada tanto por situaciones endógenas (la transición del país rural al urbano e industrializado) como exógenas (clima internacional de Guerra Fría y la lucha anticomunista) de gran complejidad. Pecaute, Daniel. “Una lucha armada al servicio del statu quo social y político”. En: *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas*. Ediciones Desde Abajo, 2015, p. 639.

transformaciones institucionales, en especial contribuyó a la consolidación de nuevas unidades, como serían los Lanceros.

“Para mediados de la década de los cincuenta, la realidad de seguridad en el país era tan compleja que el Estado Mayor del Ejército de Colombia emprendió, ante la Misión Militar del Ejército norteamericano, gestiones que permitieran que oficiales colombianos viajaran a los Estados Unidos para recibir entrenamiento militar. Esta idea se concretó en 1955 cuando cinco oficiales fueron enviados a realizar curso de Ranger en dicho país”<sup>21</sup> .

“Esto es relevante porque demuestra esa primaria orientación de las Fuerzas Militares hacia la contrainsurgencia, es decir, hacia la guerra irregular. No tiene que ver con el surgimiento de las FARC o el ELN, sino que es una orientación temprana de estos militares que vienen de Corea, probablemente influenciados por lo que en ese momento era una prioridad de orden público en Colombia que era el bandolerismo, que había surgido como remanente de la desmovilización de las guerrillas liberales”.<sup>22</sup>

La creación de la Escuela de Lanceros en 1955, en Tolemaida, se convirtió, en este sentido, en uno de los cambios operacionales más importantes del ejército de la época, ya que significó la gestación de unidades especializadas de contrainsurgencia, en las que la presencia e influencia estadounidense fue fundamental. No solo los Lanceros serían una fuerza de élite que empleaba y adaptaba las técnicas de los Rangers norteamericanos, la US Army Special Force y las lecciones aprendidas en la lucha contrainsurgente en el marco de la guerra fría, sino que la presencia de instructores en la base de Tolemaida se convirtió en una constante<sup>23</sup>. “Los gringos siempre han mantenido gente acá, o sea en la Escuela de Lanceros siempre hay un oficial norteamericano y nosotros tenemos oficiales allá. Esa

---

<sup>21</sup> Informe 119-CI-00557 Ejército Nacional de Colombia. Centro Nacional de Entrenamiento CENAE del Ejército Nacional. 2020. P. 39.

<sup>22</sup> Entrevista 429-PR-00881 Experto, Políticas de seguridad y defensa, 2020.

<sup>23</sup> El oficial estadounidense Ralph Pucket Jr. asesoró la creación de la Escuela de Lanceros en 1955. Pucket Jr. ya conocía el escenario latinoamericano pues había sido asignado a Puerto Rico en tareas de instrucción. Su experiencia era suficiente ya que conocía de primera mano las capacidades del soldado colombiano pues durante el desarrollo de la guerra de Corea apoyó constantemente al Batallón Colombia apostado en la península Informe 119-CI-00557 Ejército Nacional de Colombia. Centro Nacional de Entrenamiento CENAE del Ejército Nacional. 2020. P. 39.



cooperación siempre ha existido”<sup>24</sup> “Para la década de los setenta se le designó a la Escuela de Lanceros (ESLAN) la tarea de desarrollar los cursos de Fuerzas Especiales de la nueva unidad con esa denominación. Para tal fin, se basó en el entrenamiento conjunto de las dos capacidades, Lanceros y Paracaidismo, ya existentes en ese momento histórico, a estas se les vinculó el uso del Reglamento de Combate de Contraguerrillas 3-10”<sup>25</sup>.

Las consecuencias de esta interacción no se limitaron a los niveles de mejoramiento técnico y material, sino que incluyeron transformaciones en los aspectos doctrinales como la conceptualización del rol social de las FF.AA. y al concepto mismo de la seguridad. Como queda evidenciado en los documentos biográficos de los generales Alberto Ruiz Novoa y Álvaro Valencia Tovar, los militares colombianos, además de comenzar a adoptar el discurso anticomunista de Estados Unidos, también comprendieron la importancia de involucrar otros componentes dentro de las estrategias de seguridad más allá de lo estrictamente militar, dentro de lo que se denominó como “desarrollismo” o “corriente sociológica”, que implicaba utilizar a las fuerzas de seguridad para solucionar las necesidades más apremiantes de la población civil, tanto en términos de salud como de educación e infraestructura básica<sup>26</sup>.

De manera similar a como el Ejército creó unidades élite de contraguerrilla, la Policía Nacional consolidó la Escuela de Carabineros de Suba, gracias a la inversión estadounidense, con el objetivo de formar policías especializados en el desarrollo de tareas de salvaguarda del orden público en las zonas rurales. De este modo, se les entrenó en aspectos como rastreo con unidades caninas, uso de caballería para el desplazamiento y, especialmente, diálogo y concertación con las comunidades<sup>27</sup>. Cabe resaltar que las unidades de carabineros y granaderos recibieron entrenamiento en tácticas *ranger* impartido por oficiales estadounidenses de USAID (posteriormente incorporadas en el plan de estudios básicos), de manera que los efectivos policiales se desenvolvían con suficiencia en las técnicas de contrainsurgencia, a grado tal que, en 1966, se crearon unidades mixtas en las zonas rurales

---

<sup>24</sup> Entrevista 311-PR-02117 Fuerza Pública, doctrina militar, 2020.

<sup>25</sup> Informe 119-CI-00557 Ejército Nacional de Colombia. Centro Nacional de Entrenamiento CENAE del Ejército Nacional. 2020. P. 77.

<sup>26</sup> Nieto, Andrés. *¿Subordinación o Autonomía? El Ejército Colombiano, Su Relación Política Con El Gobierno Civil y Su Configuración En La Violencia, 1953-1990*. CLACSO. 2004.

<sup>27</sup> Public Safety Advisor, “19621200-ReportCNP”. Cable. December 1962. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington.



del Tolima entre carabineros y equipos militares de la sexta brigada para cumplir con los objetivos de reconocimiento del terreno, rastreo de objetivos y patrullaje, de modo que apoyarán los esfuerzos emprendidos por el Ejército Nacional de encapsular a la insurgencia en un doble movimiento norte-sur y sur-norte.<sup>28</sup>

Esta paulatina militarización de la Policía, que ya había tenido su origen con el paso de la institución al Ministerio de Guerra, por medio del Decreto 1814 de 1953 durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), a raíz de la necesidad de despolitizar a la fuerza, dados los abusos cometidos durante el Bogotazo, adquiere un impulso mayor con las recomendaciones estadounidenses, especialmente la misión Yarborough, dada la necesidad de complementar el pie de fuerza militar e involucrar a todos los cuerpos de seguridad en el combate contrainsurgente.

Una de las áreas priorizadas por la inversión estadounidense fue la inteligencia, teniendo en cuenta las recomendaciones de las misiones estadounidenses y el grado de atraso de un componente crucial para la lucha contrainsurgente<sup>29</sup>. Una de las tareas más importantes de USAID fue aprovisionar a las fuerzas armadas colombianas con una red completa de telecomunicaciones basadas en radio<sup>30</sup>, las cuales requirieron de un considerable esfuerzo de entrenamiento técnico para su operación. Estos cursos de mantenimiento de equipos de radio se realizaron, inicialmente, en territorio estadounidense, posteriormente fueron impartidos cursos por los oficiales de USAID y, recaló para el año 1967, en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como parte de una estrategia de transferencia de labores desde la USAID hacia instituciones colombianas, en vías de reducir la inversión estadounidense en Colombia para finales de la década del sesenta<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Office of Public Safety, “19660900”. Monthly Report. September 1966. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington.

<sup>29</sup> Agency for International Development. “19630700-DAS plan in Spanish”. Report. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington; Agency for International Development. “19690805-AID-DAS-Proposal”. Report. August 5, 1969. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington.

<sup>30</sup> Office of Public Safety. “19660300”. Monthly Report. March 1966. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington.

<sup>31</sup> Department of State. “19630503-DASRprt”. Auditory. March 3 1963. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington.



Es importante subrayar que la entrega de armamento a las fuerzas latinoamericanas por parte de los Estados Unidos iba acompañada de un curso completo de instrucción para que este armamento se empleará adecuadamente, dicho entrenamiento se llevó a cabo, fundamentalmente, en la Interamerican Police Academy (IPA o IAPA) con sede principal en la zona del canal de Panamá<sup>32</sup>. Sin embargo, con el paso del tiempo, dicho entrenamiento básico se extendió a áreas que van desde la desactivación de explosivos, llevado a cabo en Fort Gulick, hasta cursos de seguridad interna, en Fort Davis y, posteriormente, cursos especializados en Estado Mayor para oficiales, realizados en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Estados Unidos<sup>33</sup>.

Si bien la cooperación militar predominante es estadounidense, no es la única fuente de ayuda a la transformación de la fuerza pública. De hecho, como indica el Ejército Nacional en los simposios adelantados por la Comisión, el Ejército en la época adoptó una doctrina ecléctica, considerando también influencias de Brasil, Chile, Francia y de manera especial del Reino Unido. Por su parte, la influencia de la doctrina contrarrevolucionaria francesa también estuvo presente en esta transformación desde dos vías: mediante la exposición y capacitación a las tropas norteamericanas en la Guerra de Vietnam (1955-1975) y el entrenamiento directo a miembros de la Policía Nacional<sup>34</sup>. Lo anterior no equivale a decir que el papel de Estados Unidos haya sido puramente complementario, pues su rol en el desarrollo de la postura contrainsurgente colombiana fue determinante. No sólo la mayor interacción entre oficiales de ambos países, a partir de la guerra de Corea, serviría para ir consolidando un espíritu de cuerpo entre las instituciones, que van desde la interoperabilidad hasta relaciones personales, sino que en el largo plazo permitiría la construcción de una alianza estratégica entre los dos países en materia de seguridad<sup>35</sup>.

---

32 Office of Public Safety. "19700500". Monthly Report. May 1970. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington.

33 Entrevista 311-PR-02545 Experto, Injerencia estadounidense en conflicto armado, 2020; Informe 748-CI-00658 Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch et al. Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. 2020. Pp. 9.

34 Entrevista 118-PR-00380, Defensor de DDHH, Tortura y otros tratos crueles, Bogotá, 2020.

35 Entrevista 311-PR-02545 Experto, Injerencia estadounidense en conflicto armado, 2020; Entrevista 655-PR-02491 Experto, Doctrina de seguridad nacional, Bogotá, 2020.

### **1.1. Inmaterialidad de la guerra: la construcción del enemigo interno**

La noción del enemigo interno es la piedra angular sobre la que se estructuraron diversas doctrinas contrainsurgentes en el marco de la guerra fría, teniendo en cuenta los intercambios, adaptaciones y reformulaciones que fue sufriendo la idea de la guerra revolucionaria entre los países de Occidente. Bajo la categoría de “enemigo interno” se entiende “todo actor político o social que se oponga al estado de cosas existentes” y su eliminación constituye el fin supremo del Estado y, por ende, el objetivo principal de las operaciones de las Fuerzas Militares<sup>36</sup>.

El enemigo interno en Colombia no fue una construcción del todo original, teniendo en cuenta que ya desde las primeras décadas del siglo XX existían discursos que señalaban como adversarios, tanto de las clases dirigentes como de los empresarios y gamonales, a sectores que reivindicaban derechos de participación política, lucha por la tierra y trabajo digno. Frente a estas reivindicaciones surgió una primera tendencia contrainsurgente (nativa) que no estuvo influenciada por fuerzas extranjeras y que no contó con una sistematización doctrinal<sup>37</sup>.

Hacia mediados de los años cuarenta, y ante la inminente victoria del liberalismo gaitanista, el discurso anticomunista arreció. Para este momento, a la categoría inicial de enemigo interno, se amplió e incluyó entonces a quienes encarnaban una potencial amenaza contra la institucionalidad, e igualmente, figuras como la de insurgente y subversivo<sup>38</sup> adquirieron mayor relevancia, lo que generó que bajo una sola etiqueta se encasillara a quienes se habían alzado en armas<sup>39</sup> y a las personas que desde la legalidad luchaban por sus

---

<sup>36</sup> Informe 119-CI-00232 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR, Comisión interclesial de Justicia y Paz, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. BINCI y Brigada XX: El rol de inteligencia militar en los crímenes de estado y la construcción del enemigo interno. P. 19.

<sup>37</sup> Vega, Renán. La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, Contrainsurgencia y Terrorismo de Estado. Espacio crítico. 2016. P. 6.

<sup>38</sup>La categoría se divide entre el “enemigo efectivo” y el “enemigo objetivo”, entendiéndolo el primero como aquel que ejerce la rebelión y está dispuesto a matar y morir por ella, mientras que el segundo, es aquel al que al aparato estatal y la sociedad le resultan útiles dentro del conflicto, por ser los portadores de tendencias. Informe 119-CI-00429 Instituto Popular de Capacitación - IPC, Vilma Liliana Franco Restrepo. Orden Contrainsurgente y dominación. 2020. P. 269.

<sup>39</sup> “El enemigo insurgente es concebido como un movimiento organizado en diversas formas y dispuesto a movilizar diferentes recursos para disputar el control del aparato estatal, para subvertir el orden existente y trastocar la estructura de poder; un movimiento que adelanta una lucha prolongada tanto militar como política

derechos<sup>40</sup>. Durante este periodo se da un primer alineamiento entre las élites colombianas y estadounidenses con respecto al enemigo interno, que ya adquiere un marcado tinte comunista teniendo en cuenta que tanto dirigentes colombianos como norteamericanos culparon de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán al comunismo internacional.<sup>41</sup>

Para las décadas del cincuenta y sesenta, el desarrollo de la política contrainsurgente consolidó la percepción del enemigo interno, lo que se expresó en el ámbito normativo (estado de sitio) y militar (desarrollo de operaciones bélicas), pilares que sostuvieron el modelo de guerra irregular contra los llamados subversivos y bandoleros quienes estaban ubicados en aquellos lugares declarados por el gobierno central como zonas de perturbación al orden público. De esta manera, la declaratoria de los estados de sitio empieza a cobrar un protagonismo especial como medio para controlar y reprimir a quienes eran encasillados como enemigos internos, señalando que esta misma figura era la encargada de señalar cuáles eran esas áreas de perturbación y qué medidas se debían adoptar. Posteriormente, mediante el estatuto de seguridad nacional (1978) se intensificó la victimización y estigmatización de estos grupos, incluyendo dentro del concepto del enemigo interno a los abogados defensores de presos políticos y de Derechos Humanos.

De manera similar, dicha estigmatización se enraizó en la fuerza pública. El “enemigo interno” no se limitó al que desarrollaba la “guerra militar”, es decir, la guerrilla, sino que, abarcó a todo aquel que estaba en oposición al gobierno y fue señalado como “brazo desarmado de la subversión”. La doctrina militar<sup>42</sup> y los manuales de subversión comenzaban

---

para debilitar el control y la legitimidad gubernamental. A este enemigo que disputa el poder político se le considera una ‘fuerza extremista’ y anti-institucional, se le reconoce una identidad ideológica y un conjunto de reivindicaciones que contrarían aquellos intereses dominantes simbolizados como interés general.” *Ibíd.*, p.271.

<sup>40</sup> A la población civil se le conceptualiza desde la idea de enemigo interno, como aquella compuesta “por una base social o grupo de seguidores que, en las áreas de influencia, provee inteligencia y suministros a aquéllos, y por un grupo de activistas y líderes políticos locales que canalizan los sentimientos de agravio y se encuentran entre sectores como organizaciones sindicales, estudiantes, campesinos y políticas.” *Ibíd.*, p.p. 271-272.

<sup>41</sup> Jordan Jiménez, Ricardo. *The Assassination of Gaitán*. WaybackMachine.Internet Archive. 2006.

<sup>42</sup> Al respecto ver: General Jaime Sarmiento Sarmiento, comandante de las Fuerzas Militares, “Editorial “, *Revista de las Fuerzas Armadas*, Volumen 32, No. 94, enero- marzo de 1980, pág. 7. General Jaime Guerrero Paz, *Colombia: objetivo estratégico y los conflictos de baja intensidad*, Imprenta de las Fuerzas Militares, enero de 1989; Coronel Orlando Zafrá Galvis, “Comentarios sobre inteligencia – la organización”, en *Revista de las Fuerzas Armadas*, octubre- noviembre- diciembre de 1985, páginas 148-149 y “conceptos sobre inteligencia en la Guerra subversiva”, en *Revista de las Fuerzas Armadas*, N°122, Bogotá, 1987; General Rafael Samudio Molina, Ministerio de Defensa, *Memoria al Congreso 1987- 1988*, Imprenta Nacional, Bogotá, 1988, págs. 14 y 15.

a plantear la existencia de una “guerra política” contra el Estado por parte de los partidos de oposición, los movimientos estudiantiles, las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, los sindicatos, los movimientos estudiantiles, las comunidades eclesiales de base y, en general, la población civil que estaba en oposición a las políticas estatales y que reivindicaban diferentes tipos de derechos. Fue así como la fuerza pública comenzó a hablar de (“población civil insurgente” o población de “listas negras o grises”). En este mismo sentido, las organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso aquellos funcionarios judiciales que investigan a los miembros de la fuerza pública fueron considerados el “brazo jurídico de la subversión” encargado de la “guerra jurídica” contra el Estado. Esta visión del “enemigo interno” quedó plasmada en numerosos manuales e instructivos militares.<sup>43</sup>

No solo los miembros de organizaciones políticas, sociales, sindicales, campesinas y de derechos humanos serían considerados “enemigos internos”. Los habitantes de las regiones o de zonas que fueron escenarios del conflicto armado interno –y que no tenían mayor afecto hacia las FF.MM o no colaboraban con estas– ingresaron a la categoría de “enemigos internos”. Esta realidad fue constatada en su informe relativo al año 1992 por el Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, cuando alertó “sobre el hecho de que todos los habitantes [de las zonas de conflicto armado] son considerados por el Ejército como colaboradores potenciales de los guerrilleros y por lo tanto sometidos a violaciones de los derechos humanos, incluida la ejecución”<sup>44</sup>. En su misión conjunta a Colombia, realizada en 1994, los Relatores Especiales encargados de la cuestión de la tortura y de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias constataron que “[e]n las zonas de conflicto armado [...], las fuerzas armadas continúan aplicando, al parecer, una estrategia antisubversiva basada en el concepto de la ‘seguridad

---

<sup>43</sup> Comando del Ejército, *Manual de operaciones contra las fuerzas irregulares*, 1962. Ayudantía General del Comando del Ejército, *Manual de instrucciones generales para operaciones contraguerrillas*, Bogotá, Imprenta de las Fuerzas Militares, 1979. *Manual de Guerrillas y Contraguerrillas Urbanas – EJC 3-18*, 1977. *Manual de Inteligencia de Combate (M.I.C.) – EJC 2-3*, 1978. *Manual de combate contra bandoleros o guerrilleros, ECJ-3-101*, 1982. *Reglamento de combate de contraguerrilla<sup>43</sup> de las FF.MM*, 1987. Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Oficina de Relaciones Públicas, *Conozcamos a nuestro enemigo*, Editorial Blanco, 1ª Edición, Bogotá, diciembre, 1985.

<sup>44</sup> *Informe del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de la resolución 1992/72 de la Comisión de Derechos Humanos*, Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1993/46, de 28 de diciembre de 1992, párrafo 189.

nacional’, en virtud del cual toda persona de la que se sabe o se sospecha que está vinculada a los guerrilleros es considerada como un enemigo interno. Según la información recibida, en las zonas calificadas de ‘zonas rojas’, donde actúan los insurgentes y tienen lugar enfrentamientos armados, las fuerzas de seguridad consideran que prácticamente todos los civiles son colaboradores de la subversión [...]”<sup>45</sup>.

Más allá de la clara presencia de una noción de enemigo interno al interior de la doctrina de la institución militar, lo cierto es que esta concepción se materializó en los entrenamientos y procesos de formación del personal militar, policial y de inteligencia.<sup>46</sup> Esto se evidencia en testimonios, sobre todo militares, que argumentan cómo en el proceso de formación castrense se planteaba una separación maniquea entre el bien y el mal, en el que el comunismo y todas las ideas disidentes, quedaban subsumidas bajo una lógica de antagonismo que debía ser eliminado dada la amenaza que planteaba al orden nacional. “A nosotros nos hicieron ver que el comunismo era malo y que el socialismo era malo, que eso era del demonio, que eso era satánico, que el que era comunista odiaba a Dios y amaba al diablo, que era adorador de satanás y por lo tanto era malo, ¿sí? Y usted es un chino y le meten ese cuento, y usted quiere formarse y quiere mostrarse, usted no se va en contravía”<sup>47</sup>

## 1.2. Materialidad de la guerra: prácticas de contrainsurgencia

Para hacer frente al enemigo interno, las fuerzas de seguridad adoptarían una serie de prácticas que, como ya se sugirió, se fueron afianzando a partir de las recomendaciones de las misiones estadounidenses, y de la capacitación recibida en las escuelas de entrenamiento norteamericanas. Entre estas estrategias se destacan, particularmente, la especial atención

---

<sup>45</sup> Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1993/82 de la Comisión de Derechos Humanos - Visita de los Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1995/111, de 16 de enero de 1995, párrafo 24.

<sup>46</sup> Entrevista 442-PR-01002 Conversatorio, Doctrina de Seguridad Nacional, Bogotá, 2020; Entrevista 429-PR-00391 Experto, Orígenes del conflicto armado, Bogotá, 2020; Entrevista 442-PR-02001 Testigo, anticomunismo, Bogotá, 2020; Entrevista colectiva 842-CO-00548 Seguridad y Defensa en Colombia, 2020.

<sup>47</sup> Entrevista 220-AA-00003 Fuerza Pública, Bucaramanga, 2019.



prestada al tema de la inteligencia y contrainteligencia; el papel de los civiles en el desarrollo de la contrainsurgencia; las acciones cívico-militares y operaciones psicológicas; y los interrogatorios y torturas.

Uno de los recursos más valiosos en la guerra moderna es la inteligencia, ya que la obtención de información privilegiada del adversario es una clara ventaja táctica sobre la que se pueden tomar decisiones que se anticipen a los movimientos del enemigo<sup>48</sup>. Una de las claves a la hora de comprender los primeros años del conflicto armado colombiano es entender los cambios en materia de inteligencia y estrategia militar acontecidos a la luz de la aplicación de un plan de modernización de las fuerzas armadas y de policía, liderado por los oficiales colombianos veteranos de la guerra de Corea. Estos altos mandos militares, habían observado en el desarrollo de las tareas bélicas del bando norteamericano la centralidad que se le otorgaba a la inteligencia, por lo que comprendieron la necesidad de un aparato de investigación colombiano lo suficientemente robusto como para afrontar las amenazas a la seguridad del nuevo escenario internacional bipolar.

La reestructuración del aparato de inteligencia en Colombia es resultado de la misión de encuesta de la CIA, en el año 1959, donde se evidenció el pobre desempeño de las Fuerzas Militares colombianas, ya que eran un ejército estático, sin un trabajo de información que obtuviera datos relevantes para el combate, además del pobre desarrollo de relaciones públicas y guerra psicológica, y un aparato institucional débil para la realización de las tareas de inteligencia militar<sup>49</sup>. El gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) aceptó las recomendaciones planteadas por los estadounidenses con total beneplácito, principalmente debido a que las tareas de equipamiento y entrenamiento corrían por cuenta de USAID y ya no del presupuesto nacional, al igual que estas medidas aumentaban la eficiencia del DAS a la hora de refinar información en inteligencia, con lo cual se aumenta la probabilidad de éxito de las operaciones contrainsurgentes<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Ariza, Jaime. "Intervención." Tercer Simposio El Papel de la Inteligencia del Estado en el Conflicto Armado Colombiano, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 14 August. 2020. Acceso el 15 Nov. 2020.

<sup>49</sup> Rempe, Dennis M. 2002. *The Past as Prologue? A History of U.S. Counterinsurgency Policy in Colombia, 1958-66*. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.

<sup>50</sup> Office of Public Safety. "19631119-ColGov-Accepts DAS Plan". December 1962. Colombia Documentation Project, The National Security Archive.



El fortalecimiento de entidades como el DAS y la creación de unidades como el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI), adscrito a la Brigada de Institutos Militares<sup>51</sup> (BIM), encuentra su correlato en los manuales No. 6 “Inteligencia de Combate” y el No. 1 “Manejo de fuentes” de la Escuela de las Américas, en los que, bajo la lógica del enemigo interno, se instaba a desarrollar entidades con capacidad de generar acciones de inteligencia no sólo contra los grupos armados insurgentes, sino contra la población civil, bajo el pretexto de que esta podría prestar apoyo a la insurgencia armada.

En ese sentido, se evidencian recomendaciones sobre la importancia de utilizar inteligencia humana, pagada o no pagada, “voluntaria y no voluntaria”; generar mapas que permitieran la ubicación de la población en un espectro que va desde “leal al gobierno”, “ambivalente”, “posiblemente leal a los insurgentes” y en “áreas controladas por los insurgentes”; desarrollar estrategias de contrainteligencia como las redes defensivas de informantes y la obstrucción de la fuente de información del enemigo a través del encubrimiento, códigos, claves, censura y otras medida para engañar al enemigo por medio de información errónea; y la infiltración en diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde grupos estudiantiles hasta partidos políticos y sindicatos<sup>52</sup>.

El empleo de civiles en las luchas de contrainsurgencia constituyó otra de las estrategias desarrolladas por parte de las fuerzas de seguridad colombianas a partir de las recomendaciones externas, principalmente de Estados Unidos. Como se evidenció, uno de los roles más importantes de la población civil era fungir como informantes al servicio de los propósitos contrainsurgentes del Estado. Estos esfuerzos de infiltración en las estructuras insurgentes no se limitaron a las zonas de combate activo en las regiones rurales, sino que se extendieron hasta las ciudades más importantes<sup>53</sup>.

Los servicios de inteligencia militar –en particular el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI) y, luego, la XX Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia (XX

---

<sup>51</sup> La BIM fue creada en enero 1962 y desactivada en 1983, cuando se convirtió en la XIII Brigada.

<sup>52</sup> Informe 748-CI-00658 Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch et al. Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. 2020. Pp. 26.

<sup>53</sup>Office of Public Safety. “19680117”. Cable. January 17, 1968. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington; Office of Public Safety. “19730611”. Cable. June 11, 1973. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington.

Brigada)– tenían un número considerable de civiles a su servicio. Sus actividades no solo estaban limitadas a la consecución de información y/o infiltración de los “blancos” (personas y organizaciones), sino que también participaban en acciones de “eliminación” o “neutralización” de los “blancos” (esto es ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y atentados con explosivos).

La XX Brigada creó o promovió la creación de varias organizaciones no gubernamentales, mediante las cuales hacía labores de inteligencia y reclutamiento de informantes. Un ejemplo lo constituye la “Red de Mutuo Beneficio” (RMB), con sede en Armenia (Quindío)<sup>54</sup>, mediante la cual la XX Brigada reclutaba miembros de la comunidad académica (profesores y estudiantes). Otro ejemplo es la “Asociación Nacional Jesús Antonio Castañón Castrillón” (Asocjesantca), integrada por Oficiales y suboficiales retirados y de la reserva, que ocupan cargos de interés para inteligencia militar, y que estaban en permanente contacto con la XX Brigada.

Uno de los hallazgos más interesantes en este aspecto tiene que ver con el del Centro de Estudios y Acción Social (CEAS); un grupo de distinguidas personas de diferentes sectores de la sociedad, quienes utilizando su amplia red de contactos y cuantiosos medios económicos buscaban fungir como un grupo civil de “contrapropaganda comunista”<sup>55</sup>. En otras palabras, importantes miembros de la vida social colombiana, quienes no aparecen listados por completo en los documentos evaluados, conformaron un grupo de presión que sirviera para “contrarrestar” lo que ellos denominaban los avances del “enemigo rojo” en las instituciones educativas, medios de comunicación e instituciones burocráticas del país.

La intención de crear estos grupos clandestinos de contrainsurgencia no surge, exclusivamente, de la iniciativa nacional, ya que redes secretas de información y acción en contra del comunismo similares son planteadas en misiones de consulta estadounidenses,

---

<sup>54</sup> Declaración de Juan Rodrigo García Fernández ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, de fechas 3 y 27 de enero de 2009 (Radicado No. 1942). Es importante señalar que el declarante fue “asesor” del líder paramilitar Carlos Castaño, y su hermano Carlos Mauricio García Fernández fue capitán del Ejército y posteriormente líder paramilitar, con el alias “Doble Cero”. Otro de sus hermanos, el abogado Antonio José García Fernández fue el coordinador de la defensa de varios jefes paramilitares ante la jurisdicción de Justicia y Paz”.

<sup>55</sup> AmEmbassy Bogotá. “19601019-CEAS-KEY”. Cable. October 21, 1960. Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington.

como la realizada por diversas organizaciones de los Estados Unidos, miembros de la CIA, el Departamento de Estado y de Defensa, al mando de Hans Tofte, en el año 1959<sup>56</sup>. En otras palabras, se debe destacar que más allá de que los funcionarios estadounidenses se rehusaran a apoyar directamente al CEAS, las organizaciones de esta naturaleza de trabajo clandestino contra la insurgencia, el bandidaje y el contrabando ya habían sido recomendadas por el gobierno de los Estados Unidos.

Un último papel desarrollado por los civiles tiene que ver con su participación en los grupos de autodefensa. Desde la década de 1960, las FF.MM fomentaron la creación y activación de grupos paramilitares, al amparo de la Ley No. 48 de 1968, considerada como la base jurídica del paramilitarismo en Colombia<sup>57</sup>, toda vez que su artículo 33 permitía armar a grupos de particulares. Este artículo estuvo vigente hasta 1989, cuando su aplicación fue suspendida por el Decreto No. 815 del 19 de abril de 1989. Las FF.MM expidieron numerosas disposiciones ordenando crear estructuras paramilitares o grupos armados de civiles, bajo distintas denominaciones, como elemento de la estrategia contrainsurgente del Estado<sup>58</sup>. Desde el Ministerio de Defensa y los altos mandos militares no solo se promovió la creación de los grupos paramilitares, sino que se buscó darles legitimidad<sup>59</sup>. Según los manuales de

---

<sup>56</sup>Rempe, Dennis M. 2002. *The Past as Prologue? A History of U.S. Counterinsurgency Policy in Colombia, 1958-66*. Google Books. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.

<sup>57</sup> Ver *Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*, E/CN.4/1998/16, 9 de marzo de 1998, párr.86; Asimismo ver el *Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia*, OEA/SER.L/V/II.120, 12 de diciembre de 2004, párr. 50 y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 5 de julio de 2004, *Caso “19 Comerciantes”*, Serie C N° 109.

<sup>58</sup> Ver, entre otros: el *Reglamento de combate de contraguerrillas - EJC 3-10*, de 1969, aprobado por Disposición No. 005 de 9 de abril de 1969 del Comando General de las Fuerzas Militares, que ordena crear “juntas de autodefensa”, como “organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenazan el área o para operar en coordinación con tropas de acciones de combate.”, dotadas de “armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares”; las *Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas* del Comando General del Ejército, de 1979, ordenando crear “Comités cívicos-militares” y “grupos de autodefensa” para que “los habitantes del área contribuyan en forma activa a la lucha”; el *Manual de combate contra bandoleros o guerrilleros - ECJ-3-101*, aprobado por Disposición No. 0014 de 25 de junio de 1982 del Comandante General del Ejército y del Director de Instrucción y Entrenamiento del Ejército, ordenando la creación de “juntas de autodefensa” con funciones de combate; y el *Reglamento de combate de contraguerrilla, EJC-3-10*, aprobado el 12 de noviembre de 1987 por el Comandante General de las Fuerzas Militares, ordenando la organización militar de la población civil.

<sup>59</sup> Ver, por ejemplo: Revista del Ejército, Volumen II, 1962, p. 41-44 C. Lerche y A. Said, “La guerra en el mundo moderno”, en *Revista de las Fuerzas Armadas*, No. 83, Volumen XXVIII, Bogotá, mayo-agosto 1976, página 202; apartes del discurso pronunciado en la segunda semana de abril de 1986, por el Comandante de la V Brigada del Ejército Nacional, el Brigadier General Daniel García Echeverry, reproducidos en *Revista*

las FF.MM, estos grupos y estructuras paramilitares tenían expresamente funciones de inteligencia<sup>60</sup>.

El fomento de estos grupos civiles de autodefensa quedó expreso desde épocas tempranas por medio de una de las recomendaciones de la Misión Yarborough de 1962, mediante la cual se instaba a generar un “esfuerzo concertado por todo el Equipo del País [Colombia] a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos. Los Estados Unidos deben apoyar esto”. Dentro de los manuales de la Escuela de las Américas se comenta que, como parte de la guerra psicológica, se justifica y se promueve el paramilitarismo como estrategia de respuesta y coacción. Igualmente, es diciente que dentro de las definiciones de contrainsurgencia contenidas en los manuales colombianos y estadounidenses se mencione explícitamente el uso y apoyo de grupos paramilitares<sup>61</sup>.

Las acciones cívico-militares, entendidas como “[el] uso de las Fuerzas Militares, especialmente, en proyectos de utilidad para la población a nivel local, incluye especialmente servicios médicos, básicos y especializados, asesorías, donaciones y otros servicios técnicos que contribuyen al desarrollo económico y social, e igualmente, sirven para mejorar el concepto que la población tiene de las Fuerzas”<sup>62</sup>, junto con la denominada guerra psicológica, orientada a ganarse el apoyo poblacional por medio de mensajes y propaganda a favor de las fuerzas del Estado y en contra de la insurgencia, se constituyeron en otras

---

*Semana*, No. 207, edición de abril 28 de 1986, página 22; intervención del Ministro de Defensa, General Rafael Samudio Molina ante la Cámara de Representantes en 1987, *El Mundo*, Medellín, 25 de julio de 1987, pág. 8; discurso pronunciado el 25 de febrero de 1992, en la población de San Vicente de Chucuri (Santander) por el mayor general Harold Bedoya, comandante de la II División del Ejército, apartes reproducidos en *El Espectador*, edición de 2 de febrero de 1992, página 11-A.”<sup>59</sup>; declaraciones del mayor general Harold Bedoya Pizarro en *Vanguardia Liberal*, Bucaramanga, edición de 1 de septiembre de 1992, página 8-A.

<sup>60</sup> Ver, por ejemplo, el *Manual de combate contra bandoleros o guerrilleros - ECJ-3-101* de 1982, que le asigna funciones de inteligencia y contrainteligencia a las “juntas de autodefensa”.

<sup>61</sup> “COIN involves all political, economic, military, paramilitary, psychological, and civic actions that can be taken by a government to defeat an insurgency (JP 1-02). COIN operations include supporting a Host Nation’s military, paramilitary, political, economic, psychological, and civic actions taken to defeat an insurgency.” US Army Training and Doctrine Command. *Tactics in Counterinsurgency FMI 3-24.2*. Headquarters Department of the Army. 2009.

<sup>62</sup> FAC-S-2020-000051-CEDIG Fuerza Aérea Colombiana. Respuesta requerimiento Plan Lazo. 2020. Fuerza Aérea Colombiana. “Glosario de Atención al Ciudadano - Acción Cívico-Militar.” *FAC*, 2020, [www.fac.mil.co/acción-cívico-militar](http://www.fac.mil.co/acción-cívico-militar)



estrategias adoptadas en el marco de la lucha contrainsurgente por parte de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

Esta estrategia, heredera del programa de “Aldeas seguras” desarrollada por los ingleses en el conflicto de Malasia, también partió de la concepción estadounidense de los años sesenta sobre la necesidad de complementar el componente militar con acciones preventivas de carácter cívico. El pilar cívico- militar se basaba en la idea de “quitarle el agua al pez”<sup>63</sup>, con lo que se hacía referencia a la necesidad de ganarse el apoyo de la población restándoselo a la insurgencia, para lo cual se hacía indispensable fomentar el desarrollo nacional, sobre todo de aquellos territorios donde la presencia estatal era nula. Esta estrategia de corte desarrollista, cuyo máximo exponente fue el General, y en ese entonces ministro de Guerra, Alberto Ruiz Novoa, pretendió utilizar las fuerzas de seguridad para solventar las necesidades más apremiantes de la población como la construcción de vías, jornadas de salud y educación, entre otras, atacando el “germen” de la insurgencia<sup>64</sup>.

Las acciones psicológicas, por su parte, recogidas y desarrolladas por los estadounidenses a partir de la experiencia francesa en Argelia, estaban orientadas a fortalecer el espíritu de combate sobre las Fuerzas Militares propias y la población aliada, al tiempo que se recomendaba un conjunto de acciones de “guerra psicológica” para debilitar la moral de las tropas enemigas y sus aliados. Al igual que las acciones cívico-militares, las acciones psicológicas pretendían ganarse la “mente y los corazones” de las poblaciones por medio de la transmisión de información a audiencias específicas para influir en sus emociones, motivos, razonamiento objetivo y, en última instancia, en su comportamiento<sup>65</sup>.

Ambas estrategias se adoptaron en Colombia como resultado de las recomendaciones hechas por la misión de la CIA en 1959, donde se indicaba la necesidad de:

---

<sup>63</sup> Nieto, Andrés. *¿Subordinación o Autonomía? El Ejército Colombiano, Su Relación Política Con El Gobierno Civil y Su Configuración En La Violencia, 1953-1990*. CLACSO. 2004. P. 191.

<sup>64</sup> Nieto, Andrés. *¿Subordinación o autonomía? El ejército colombiano, su relación política con el gobierno civil y su configuración en la violencia, 1953-1965*. Universidad Nacional de Colombia. 2010; Leal Buitrago, Francisco. *La Seguridad Nacional a la Deriva: del Frente Nacional a la Posguerra Fría*. Alfaomega. 2002.

<sup>65</sup> US Army Training and Doctrine Command. *Tactics in Counterinsurgency FMI 3-24.2*. Headquarters Department of the Army. 2009; US Marine Corps. *Counterinsurgency. FM 3-24*. Headquarters Department of the Army. 2006. Special Operations Research Office. *U.S. Army Handbook of Counterinsurgency Guidelines for Area Commanders*. Headquarters Department of the Army. 1966.



“asesorar para organizar, entrenar, equipar y establecer un sistema efectivo de información pública, de guerra psicológica encubierta y de suministro de información para la tropa. Asesorar para organizar, entrenar e iniciar, por medio de la sección de Asuntos Civiles (G-5) de las Fuerzas Armadas, programas de acción cívica y de atracción para las Fuerzas Militares. Reorganizar, entrenar, equipar y desplegar la Policía Nacional y rehabilitar su imagen pública. Enfatizar el desarrollo nacional y establecer programas de rehabilitación, particularmente en las zonas de colonización de tierras y en proyectos para mejorar el bienestar de la comunidad”<sup>66</sup>.

Es importante la precisión de que este componente desarrollista no es antitético del anticomunismo, teniendo en cuenta que “la influencia comunista era posible por causa del atraso de la sociedad y los problemas que conllevaba. Por eso la reforma de las estructuras era requisito para erradicar la subversión”<sup>67</sup>. Las estrategias psicológicas y de acción cívico militar buscaron generar un efectivo control de las poblaciones, evitando que estas ayudaran a los insurgentes.

Diferentes fuentes testimoniales<sup>68</sup> han evidenciado la existencia de otra práctica muy recurrente en el marco de la contrainsurgencia: la tortura. A diferencia de las demás, frente a esta la ubicación de fuentes escritas es mucho más compleja, precisamente por las implicaciones que tendría la divulgación de un material de entrenamiento donde se avalaran este tipo de prácticas.

Las torturas desarrolladas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado se desarrollaron con la complicidad de la clase gobernante mediante las constantes declaratorias de estado de sitio ya que “tenían la posibilidad de hacer los consejos de guerra verbales o verbales de guerra. En esos consejos verbales de guerra ellos eran juez y parte, porque ellos capturaban, torturaban las 72 horas y luego si llevaban al juicio”. La fórmula estados de excepción-tortura se encuentra en uno de los manuales militares estadounidenses de 1966,

---

<sup>66</sup> Informe 119-CI-00232 Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR, Comisión intercesarial de Justicia y Paz, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. BINCI y Brigada XX: El rol de inteligencia militar en los crímenes de estado y la construcción del enemigo interno. P. 16.

<sup>67</sup> Leal Buitrago, Francisco. *La Seguridad Nacional a la Deriva: del Frente Nacional a la Posguerra Fría*. Alfaomega. 2002. P. 22.

<sup>68</sup> Entrevista 131-VI-00030 Campesinos, Sucre, 2019; Entrevista 001-VI-00012 Líder UP, Ginebra, 2019; Entrevista 118-PR-00380, Defensor de DDHH, Tortura y otros tratos crueles, Bogotá, 2020.

junto con otras “técnicas” que permiten aniquilar la amenaza insurgente<sup>69</sup>. De manera general, el estado de sitio contenía unas medidas variadas que le permitían al gobierno, encabezado por el presidente, a los gobernadores y a los alcaldes, apoyados en la policía y en el ejército, para capturar personas sin orden judicial, privarlas de libertad, prohibir la circulación, prohibir la protesta, declarar la ilegalidad de huelgas, y adoptar medidas relacionadas con problemas específicos que eran invocados con los relacionados con el motivo de la declaratoria de estado de sitio.<sup>70</sup>

Según el informe del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas/ School of the Americas Watch (SOAW), sin embargo, es posible argumentar que oficiales colombianos (y otros militares latinoamericanos) hubieran aprendido técnicas de tortura durante sus visitas a los cursos de la Escuela de las Américas, pues por cierto tiempo se utilizaron manuales norteamericanos que tenían enseñanzas explícitas en este tipo de prácticas. Según la revisión de los manuales de la Escuela (No. 3; No. 5) se evidencia que, en algunos casos, por medio de la utilización de eufemismos como “persuasión” e “interrogatorios” se aludía a dinámicas de tortura para poder extraer información valiosa tanto por parte de la población civil como de los insurgentes capturados. En otros casos, de manera más explícita, se explicaba la eficacia de estas prácticas, bajo el entendido que “cuando se amenaza con violencia, la fuente tiene que escoger entre cooperar con la autoridad o temer la fuerza (inclusive la muerte o el desmembramiento) aplicados a la fuente o su familia. Sin embargo, para que la amenaza de violencia se efectúe, la autoridad debe aplicar la violencia para justificar sus amenazas”<sup>71</sup>.

De manera paralela a los manuales de enseñanza de la Escuela de las Américas, se comprobó la existencia del Manual Kubark (Interrogación de Contrainteligencia) de 1963, que la CIA había desarrollado para ser utilizado por agentes de EE.UU (Kubark era el nombre en clave de la CIA). Aunque no estaba destinado a entrenar a los servicios militares extranjeros, su sucesor, el Manual de Entrenamiento para la Explotación de Recursos

---

<sup>69</sup> U.S. Army Handbook of Counterinsurgency Guidelines for Area Commanders. Headquarters Department of the Army. 1966.

<sup>70</sup> Entrevista 429-PR-00391 Experto, Orígenes del conflicto armado, Bogotá, 2020.

<sup>71</sup> Informe 748-CI-00658 Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch et al. Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. 2020. Pp. 31-32.



Humanos de 1983, que se basaba en gran medida en el material de original de la Agencia, se utilizó en al menos siete cursos de entrenamiento de EE.UU. realizados en países de América Latina entre 1982 y 1987. Estos dos libros de texto de la CIA tratan exclusivamente de interrogatorios y dedican un capítulo entero cada uno a “técnicas coercitivas”<sup>72</sup>.

Vemos, pues, un desarrollo muy claro de la estrategia estadounidense que afianzó una relación militarizada entre los militares latinoamericanos y sus propias poblaciones. Como parte de esta reorientación, la ayuda y el entrenamiento militar de EE.UU. abogaron abiertamente por el uso del terrorismo y la violencia como parte legítima del esfuerzo general de la contrainsurgencia. Cuando se combinan estas técnicas de coerción estatal con la designación inherente de fuerzas sociales progresistas como los sindicatos, las organizaciones de profesores y las protestas estudiantiles como “subversivas”, el resultado final es mortal. El comunismo se convirtió en el principal referente de la subversión, con el comunismo supuestamente manifestado a través de cualquier desafío a lo que eran sociedades altamente estratificadas en toda América Latina. Además, los militares conservadores pro-estadounidenses se convirtieron en el árbitro definitivo de lo que constituía subversión.

### **1.3. Plan Lazo**

Una primera manifestación de los aprendizajes y recomendaciones estadounidenses en el marco de la lógica de la guerra fría, el anticomunismo y el enemigo interno se daría con el Plan de Operaciones Lazo durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-1966). Siguiendo la estrategia de pacificación y de restauración del orden público, especialmente dirigidas hacia las nacientes e incipientes guerrillas comunistas que existían en los departamentos del Tolima, Huila y Cauca, tomaría forma el Plan Lazo que orientaría a las fuerzas de seguridad y de inteligencia hacia la contrainsurgencia propiamente dicha.

El objetivo central del Plan Lazo era, primordialmente, eliminar las llamadas “repúblicas independientes” y controlar la situación de orden público que se vivía en el país por cuenta

---

<sup>72</sup> National Security Archive. Prisoner Abuse: Patterns from the Past. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 122. 2014.

de los grupos de autodefensa que aun existían. Desde la estrategia nacional de contrainsurgencia y bajo las premisas del Plan se plantearon diversos procesos y acciones ligados a las políticas de pacificación, que, bajo decretos expedidos en el marco de los estados de sitio, permitieron una fuerte presencia militar, que incluía además de las acciones militares, un importante componente de acción cívico-militar<sup>73</sup> encaminado a mejorar la infraestructura y fomentar el apoyo gubernamental a sectores como el de los ganaderos<sup>74</sup> y el agro. La filosofía detrás de la estrategia consistía en ganarse a la población civil, quitándole el apoyo a las cuadrillas de bandoleros, que en palabras de una de las cabezas del Plan, el General Ruiz Novoa, sería un tanto como “quitarle el agua para el pez”.

La estrategia militar contó con cinco fases. La primera, establecía acciones preparatorias que incluían la realización de operaciones de rastreo, localización y hostigamiento de las “cuadrillas de bandoleros”; la creación y el establecimiento de Comités de Coordinación Militar-Civil en zonas regionales y locales; la selección, organización y adoctrinamiento de unidades civiles de autodefensa, privilegiando la incorporación de militares y policías retirados y “personas sobresalientes” de la sociedad. Un segundo momento ejecutaba campañas de inteligencia militar, la realización de operaciones psicológicas, de información y entrenamiento de unidades de autodefensa. La tercera y cuarta fase del plan contenían un componente bélico y de destrucción de las cuadrillas de bandoleros respectivamente. Por último, una fase de reconstrucción que consistía en emplear en la mayor medida posible el componente social en favor de la población civil<sup>75</sup>.

En esta manifestación de la doctrina contrainsurgente los componentes cívico y desarrollista estarían muy presentes, lo que se concretó en la creación de un plan integrado para la acción cívico-militar en 1962, y en el Comité Nacional de Acción Cívico Militar,

---

<sup>73</sup> En el marco del “Comité Nacional de Acción Cívico – Militar” establecido mediante el Decreto 1381 de 1963. (República de Colombia. Diario Oficial. Decreto 1381 de junio 24 de 1963. Bogotá: Imprenta Nacional, julio 9 de 1963, Año C- Número 31126).

<sup>74</sup> Entre ellos, el *Decreto Legislativo 327 de 1958*, por el cual se da autorización al Gobierno Nacional para garantizar obligaciones que contraigan los Fondos Ganaderos Departamentales, y se dictas otras disposiciones. Decreto Legislativo 331 de 1958, por el cual se adiciona el *Decreto legislativo 327 de 1958*. Conceder préstamos a los Fondos Ganaderos de los Departamentos del Valle, del Cauca, del Tolima, del Huila, de Caldas y Cauca. *Decreto Legislativo 5 de 1959*, por el cual se autorización a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (préstamos personales con fines de rehabilitación económica a los agricultores y ganaderos de los departamentos de Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca).

<sup>75</sup> FAC-S-2020-000051-CEDIG Fuerza Aérea Colombiana. Respuesta requerimiento Plan Lazo. 2020



creado en 1963. Las acciones cívicas, como eran comprendidas, constituían un elemento fundamental para la “pacificación del país”<sup>76</sup>, por ello, era necesario generar un organismo que coordinara la realización de dichas labores. En este sentido, se ordenó que el Comité fuera integrado por los ministros de gobierno, guerra, agricultura, salud pública, educación, obras públicas y demás entidades oficiales y particulares que desearan participar<sup>77</sup>. En palabras de un general de la época:

“La práctica de la acción cívica militar se ajusta al nuevo concepto del papel que pueden desempeñar las Fuerzas Militares en los países subdesarrollados. En efecto, las instituciones militares poseen una organización nacional que cubre todo el país, una fuerza de trabajo representada por sus efectivos, una élite intelectual y física por cuadros profesionales, disciplinados y un equipo militar que puede aplicarse en usos civiles en muchos casos”<sup>78</sup>.

El énfasis en lo cívico-militar se derivaba, por una parte, del hecho de que el Plan fue concebido e implementado por militares que participaron en la guerra de Corea como el General Alberto Ruiz Novoa y todo su equipo dentro del cual estaba Valencia Tovar, Matallana y Landazabal. Para este grupo de militares la lógica de la contrainsurgencia no consistía exclusivamente en el aniquilamiento militar de los bandoleros, sino que requería un despliegue más integral por parte de los militares y del Estado colombiano. En segunda medida, el Plan surgió cobijado por la Alianza para el Progreso<sup>79</sup>, la cual era una manifestación de esa doble lógica contrainsurgente de la administración Kennedy de llevar desarrollo y presencia estatal a las zonas desprotegidas de los países de la región y, a la vez, complementarla con el entrenamiento militar a los aparatos de seguridad de los estados latinoamericanos. Finalmente, en las Conferencias de Ejércitos Americanos, en las que

---

<sup>76</sup> Decreto 1381 de 1963 “*Por el cual se crea el Comité Nacional de Acción Cívico-Militar*”

<sup>77</sup> Decreto 1381 de 1963 “*Por el cual se crea el Comité Nacional de Acción Cívico-Militar*”

<sup>78</sup> Escuela Superior de Guerra. “General Rafael Reyes Prieto”. En *Revista de las Fuerzas Armadas*, N° 239 (2017).

<sup>79</sup> Programa de asistencia económica y social estadounidense fue presentado por el presidente Kennedy en una reunión de embajadores latinoamericanos, el 13 de marzo de 1961, en la cual precisó que la tarea del hemisferio occidental era “demostrar a todo el mundo que la aspiración insatisfecha del hombre, de progreso económico y justicia social, puede ser lograda mejor por hombres libres trabajando dentro del marco de instituciones democráticas” En: Kennedy, John. *Discurso pronunciado por John F. Kennedy ante el cuerpo diplomático latinoamericano, altos funcionarios y miembros del Congreso de los Estados Unidos*. 13 de marzo de 1961. <https://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1964-ALPRO-JFK.html>

Colombia participaba, el componente desarrollista era una constante, entendido como la forma integral de alcanzar la seguridad continental.

Pese al componente desarrollista del Plan, de manera paralela se desarrollaron todas las otras estrategias de contrainsurgencia, empezando, por supuesto, con las operaciones militares contra los “bandoleros” que se dieron en forma de combates y bombardeos; la conformación de grupos de autodefensa campesina, que pasarían por medio de un “adoctrinamiento psicológico”, y cuya función era servir como “Fuerzas de seguridad y para el control de áreas”<sup>80</sup>; el despliegue de operaciones de inteligencia, con fuentes humanas y no humanas, que serían determinantes para el desarrollo de las operaciones de localización y “envolvimiento” de las cuadrillas; y campañas de guerra psicológica destinadas a restarle apoyo a los grupos insurgentes y disminuir la moral de combate<sup>81</sup>.

A todo esto, se le sumó el apoyo y presencia directa de Estados Unidos. Por una parte, la ayuda económica estadounidense fue fundamental para llevar a cabo ciertas acciones del componente cívico-militar del Plan. La construcción de carreteras y centros de salud se lograron, en gran medida, gracias a los fondos provenientes del MAP y de USAID. Del mismo modo, los recursos de la Alianza para el Progreso, aunque no estaban bajo el directo control de los militares, se utilizaron para crear programas de seguridad pública, componente esencial de la estrategia desarrollista<sup>82</sup>. Por otra parte, la reestructuración de la inteligencia colombiana, que fue central para la ejecución del Plan, obedeció, como ya se analizó, a las recomendaciones hechas por las misiones observadoras estadounidenses. Asimismo, las capacidades en guerra psicológica fueron aprendidas por los soldados colombianos con el entrenamiento recibido en la Escuela de Guerra de Fort Bragg, y con un grupo móvil de Entrenamiento en Guerra Psicológica de Estados Unidos en territorio colombiano. La

---

<sup>80</sup>Fuente de archivo externa. 18244-OE-227295. Ministerio de Defensa Nacional. “Plan de Operaciones Lazo”. 2020. Anexo M. “Las unidades de autodefensa civil estarán organizadas con personal escogido en el que se pueda confiar en caso de emergencia para reaccionar positiva y favorablemente. Como guía general para la selección de personal los candidatos serán escogidos por entre exmiembros de las Fuerzas Militares o de la policía nacional, e individuos sobresalientes de algunos negocios y otras figuras importantes de la sociedad que satisfagan la condición básica de confianza. No se deben entregar armas inicialmente sin antes llevar a cabo un adoctrinamiento psicológico completo a los miembros de dichas fuerzas.”

<sup>81</sup> Fuente de archivo externa. 18244-OE-227295. Ministerio de Defensa Nacional. “Plan de Operaciones Lazo”. 2020. P. 198.

<sup>82</sup> Rempe, Dennis. *The Past as Prologue?: A History of US Counterinsurgency Policy in Colombia, 1958- 66*. Strategic Studies Institute, 2002: 22.

creación de unidades como los grupos móviles de inteligencia y los localizadores, utilizados ampliamente durante el Plan, fueron también entrenados por un segundo Equipo de Entrenamiento de Inteligencia del ejército de Estados Unidos en territorio colombiano.<sup>83</sup>

La operación Soberanía sobre la república independiente de Marquetalia, que se constituiría como el mito fundacional de las FARC, se daría precisamente bajo la sombrilla de Plan Lazo. En 1962, el ejército atacó Marquetalia argumentando que ese era el principal centro del movimiento de autodefensa campesina, pero también por influencia directa de latifundistas que, como el gobierno de turno, no veían con buenos ojos la existencia de las repúblicas independientes ubicadas en la región.

El coronel Carlos Pedraza Toro de la Sexta brigada del ejército, en declaraciones para el periódico *El Tiempo*, manifiesta que “Desde hace algún tiempo la población de San Miguel que es parte de Marquetalia, viene siendo refugio de un grupo de bandoleros comandados por “Lister” y un tal Marulanda, afiliados al comunismo. Sus asaltos y robos venían causando intranquilidad en el sur del Tolima y el Norte del Huila. El ejército resolvió ocupar pacíficamente la región con el fin de controlar el orden público y garantizar la honra, vida y bienes de los habitantes”<sup>84</sup>.

Las operaciones militares sobre las “repúblicas independientes” no se limitaron a los bombardeos de las colonias agrarias, sino que se extendieron por todo el nororiente y noroccidente del Huila y sur del Tolima, afectando, por supuesto, a las familias campesinas de estos territorios que se tuvieron que “enmontar” por muchos días, pasando hambre porque no podían regresar a las zonas donde se daban los bombardeos y desarrollaban los enfrentamientos<sup>85</sup>.

El 22 de marzo de 1965 se realizó el ataque a la colonia agrícola de El Pato. A pesar de los esfuerzos de los colonos, hacendados y mayordomos para evitar el bombardeo, “[l]a aviación militar bombardeo despiadadamente todas las fincas y enramadas consideradas de

---

<sup>83</sup> Fuente de archivo externa. 18244-OE-227295. Ministerio de Defensa Nacional. “Plan de Operaciones Lazo”. 2020.

<sup>84</sup> *El Tiempo*, enero 22 de 1962. Pág. 1 – 17).

<sup>85</sup> Rojas, Yuri. 2008. Yo era una burra amarrada en el camino de la Revolución. *Revista Periferia*. USCO. Neiva. Pág. 60. Citada por Escobar Polanía, Pablo Emilio. 2019. *La colonización armada en El Pato*.

uso de la insurgencia, incluyendo la sede sindical y la cooperativa [...] Inmediatamente después de los bombardeos matutinos, el ensordecedor ruido de la flotilla de helicópteros despegando desde la base militar de Balsillas anunciaba, en los desolados campos, que las fuerzas élites del batallón Colombia desembarcaban para unirse al resto de los cuatro mil hombres asignados a la misión y cuya tarea era peinar metro a metro la zona”.<sup>86</sup>

Lo mismo sucedió en Ríochiquito, donde el empuje de la fuerza pública empezó en septiembre de 1965. “Ocho aviones a reacción acometieron violentamente con nutrido bombardeo y ametrallamiento que se prolongó durante todo el día. Siete helicópteros iniciaron sus intentos de desembarco. Al encontrar resistencia, los mandos militares ordenaron el desembarco de tropas en lugares no fundamentales. Ese día ocuparon La Estrella, muy cerca al poblado, y otros sitios en la vereda El Canelo<sup>87</sup>.

El orden público del Huila se empeoró tras los bombardeos a las colonias agrarias, las confrontaciones entre las guerrillas y el Estado continuaron utilizando la práctica de la emboscada donde regularmente el resultado era una masacre, bien fuera de soldados o de guerrilleros. La crisis social se ahondó profundamente por el éxodo de campesinos que salieron en todas las direcciones tras los ataques al Pato, Marquetalia y Ríochiquito, especialmente Neiva y las cabeceras municipales del noroccidente y nororiente del departamento fueron receptoras de víctimas.

Allí sus espacialidades se fueron reconfigurando por los movimientos poblacionales generados por la violencia que trajo tras de sí el abandono de tierras, la expansión urbana, la marginalidad de los barrios de invasión y la pobreza. También la persecución de los campesinos en las zonas rurales y la judicialización de estos en la Sexta Brigada en Neiva, las detenciones sistemáticas en las cárceles de Neiva y Florencia aunado al creciente descontento de la población rural, generó el contexto sociopolítico, económico y cultural que explica el cambio nodal que sufrió el conflicto armado en el Huila.

En la región de Sumapaz, incluida como una de las “repúblicas independientes” en los señalamientos de Álvaro Gómez Hurtado, no se darían operaciones militares directamente.

---

<sup>86</sup> *Ibíd.* Pág. 223.

<sup>87</sup> Arenas, Jacobo. 1965.



Sin embargo, la región sí fue receptora de desplazados de las zonas donde la confrontación había aumentado:

“Sumapaz sirve como anfitrión de la creación de las FARC (...) llegaron los desplazamientos de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y El Guayabero y se da la primera reunión, después de venir de Río Chiquito dónde fue la creación propiamente, pero la primera conferencia constitutiva de esa organización la hacen en la región del Duda y ahí surge la cuestión del desdoblamiento, de enviar gente de un lado a otro (...) y la dirección de las FARC queda prácticamente en el Duda (...) en Bogotá, en el centro del país. Ahí llegaban todas las estafetas, de manera clandestina, sin uniformes ni distintivos (...) ahí llegaban todos los correos de los embriones de FARC que van montando en todas partes, desde ahí se impartían las ordenes (...)”<sup>88</sup>.

En la persecución de la fuerza pública a los guerrilleros entre 1967 y 1969, los más afectados fueron los campesinos de la región del Pato, Algeciras y Santana Ramos que terminaron desplazándose a Neiva y Guacamayas para proteger su vida. En las cárceles de Neiva y Florencia permanecieron más de 200 presos políticos, acusados de dirigir, auxiliar o colaborar con la guerrilla. Las detenciones e investigaciones eran realizadas por miembros del B2 con sede en Neiva. “Son conocidos los Consejos de Guerra convocados por la VI Brigada de Neiva, entre junio de 1968 y enero de 1969, contra los hermanos Roberto y Jesús Escobar Perdomo, Jorge Cerquera, Jorge Eliecer Lozano y Roberto Castrillón, entre otros, acusados de colaborar con el Movimiento”<sup>89</sup>.

Las operaciones militares contra las “Repúblicas independientes” no sólo no acabaron con los brotes de insurgencia guerrillera, sino que provocaron el efecto contrario: El reagrupamiento de las guerrillas y su transformación en frentes (FARC), la extensión del área de su influencia y el aumento del número de los alzados en armas. Agregado a lo anterior, está el surgimiento, para la misma época (1965), de otras agrupaciones guerrilleras (ELN y EPL) que en nuestro país inauguraron la era de las guerrillas modernas con perfiles,

---

<sup>88</sup> Entrevista 076-CO-00120. Entrevista colectiva a líderes históricos de la región del Sumapaz.

<sup>89</sup> Gonzales Arias. 1993. Pág. 113-114. Véase también los sumarios Nos. 479-850-579 y 613, juzgado primero superior de Florencia).

programas y tácticas antisistema<sup>90</sup>. En este sentido, Hernando Gómez Buendía señala que “en términos de estrategia militar, la guerrilla pasó de la defensa de zonas de colonización, aisladas de la opinión pública, al proyecto reciente de constituirse en ejército popular, pasando por la ofensiva rural móvil y la multiplicación de los frentes en el caso de las FARC; por el poquísimo en el caso del ELN; la “zona liberada” en el EPL; por el golpe urbano y el terrorismo en los ADO y el M19”<sup>91</sup>.

La doctrina contrainsurgente tendría una manifestación más clara durante los setenta y, concretamente, con el desarrollo del Estatuto de Seguridad Nacional durante la administración del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982)<sup>92</sup>. Por medio del Estatuto se extendía la jurisdicción de la justicia penal militar a los civiles que no hacían parte de las Fuerzas Armadas. Esta extensión se consolidaba en allanamientos, detenciones, e interrogatorios realizados de formas secretas, abusivas e irregulares, debido a que estos se hacían arbitrariamente sin orden judicial y por motivos indeterminados<sup>93</sup>.

La lógica del enemigo interno operó en este contexto de forma más clara y explícita, muy en sintonía con los manuales militares que eran utilizados para la época<sup>94</sup>. En un contexto de urbanización del conflicto, se desarrolló la idea del guerrillero urbano como un “perturbador social-militar”, cuya misión era crear caos por medio del desgaste y la distracción de las fuerzas de seguridad. Pero, a su vez, el enemigo no lo constituían sólo los guerrilleros en armas, sino también ciertos sectores de la población contrarios al gobierno y que eran vistos como radicales por cuenta de las exigencias sociales y las propuestas de reforma del sistema político. Este contexto propiciaría entonces el uso más sistemático de

---

<sup>90</sup> Gózales Arias. 1992. Pág. 117.

<sup>91</sup> Gómez, Buendía. 1986. Pág. 382

<sup>92</sup> Entrevista 311-PR-02545 (Experto, defensor DD.HH., académico); Entrevista 442-PR-01002 (Conversatorio, Experto, Defensor DD.HH. y Actor armado, ejército); Entrevista 842-CO-00548 (Conversatorio Seguridad y Defensa en Colombia, 2020); Entrevista 429-PR-00881 (Experto, académico).

<sup>93</sup> Gallón, Gustavo. “La república de las armas: relaciones entre fuerzas armadas y estado en Colombia, 1960-1980”. Centro de Investigación y Educación Popular. 1983: 28-29.

<sup>94</sup> Manual de Guerrillas y Contraguerrillas Urbanas (EJC-318); Manual de Inteligencia de Combate (EJC 2-3) de 1978.

prácticas de detención, interrogatorio y tortura, que fue dirigido principalmente hacia los grupos sindicales y estudiantiles<sup>95</sup>.

El desarrollo de estas prácticas, si bien tuvo sus adecuaciones locales con base en las lógicas del conflicto social que se vivía en el país, tuvo sus raíces en los aprendizajes obtenidos en la Escuela de las Américas y sus manuales de enseñanza.<sup>96</sup> No es casualidad que para la época del Estatuto, los oficiales que dirigían las instituciones de seguridad habían sido antiguos estudiantes de las escuelas norteamericanas de formación<sup>97</sup> que, como se ha evidenciado, socializaban a los estudiantes latinoamericanos en prácticas orientadas a eliminar al enemigo interno bajo la lógica de la guerra fría y el anticomunismo.

“[...] en la década de los 70 prevaleció una estrategia basada en detenciones y los allanamientos masivos, el procesamiento de civiles por tribunales castrenses y el uso sistemático de la tortura, y respaldada en una serie de medidas legales. [...] Esta represión “legal” coexistió con operaciones militares de gran envergadura en zonas rurales, en donde el Ejército desplegó un poder de aniquilamiento de la población, como la práctica del asesinato político y de la desaparición. En esa década se registraron 60.325 casos de detención y 1.053 asesinatos políticos<sup>98</sup>.

Este desarrollo que se venía dando de la doctrina contrainsurgente, por medio de las disposiciones en el ordenamiento jurídico, entra en declive a finales de la década de los 80 y principios de los 90 debido a la derogación del Estado de Sitio y del Estatuto de Seguridad en 1982, por el presidente Belisario Betancur, y a la preponderancia que tomará la *lucha contra el narcotráfico* y el énfasis y apoyo económico-técnico que brindaría Estados Unidos para este asunto.

---

<sup>95</sup> Ver Caso Tortura durante el Estatuto de Seguridad en los anexos del Informe Final, en la plataforma transmedia de la Comisión.

<sup>96</sup> Informe 748-CI-00658 Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch et al. Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. 2020.

<sup>97</sup> Por ejemplo, el Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, fue estudiante en la Escuela de las Américas en 1965 y en 1979 fue profesor invitado en esta institución. Para 1978 era comandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano. INFORME BINCI.

<sup>98</sup> Informe 119-CI-00232. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR, Comisión interclesial de Justicia y Paz, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. BINCI y Brigada XX: El rol de inteligencia militar en los crímenes de estado y la construcción del enemigo interno. P. 30

## 2. Injerencia de EE. UU.: 90 – 2009

La década de los 70 trajo cambios en el sistema internacional que impactaron también a Colombia y su conflicto. La Guerra Fría parecía distensionarse. En la agenda mundial aparecen con fuerza nuevos temas como las drogas de uso ilícito, la preocupación por los derechos humanos y el medio ambiente que se fueron expresando en mayores reglamentaciones internacionales. Pero, por supuesto, también la crisis económica y los choques petroleros mostraron que el poder podía estar no solo en manos de las potencias nucleares.

En este contexto, la ayuda estadounidense a Colombia continuó dirigiéndose al fortalecimiento de las capacidades del Ejército en función de la lucha contrainsurgente y, en menor medida, para enfrentar el creciente problema del tráfico de marihuana<sup>99</sup>. Con la denominación del narcotráfico como “problema de seguridad nacional” se hizo cada vez más fuerte persecución a los protagonistas de este negocio, situación que se consolidó con la primera operación anti-drogas en 1978, que contó con el despliegue de 10.000 efectivos de la Segunda Brigada del Ejército en la Guajira, lo que algunos cables de NSA denominaron la “Campaña de la Guajira” u operación “Fulminante” y que se hizo tras el precedente de la “Operación Cóndor” en México (1977).

Este cambio en la relación Colombia-EE.UU. estuvo marcado por la firma de dos tratados fundamentales: el de Extradición (1979) y el de Asistencia Legal (1980). Paralelamente, empezó el *lobby* para el inicio de aspersiones aéreas con el herbicida *paraquat*. Así, esas dos estrategias (extradición, aspersión aérea) se convirtieron, de ahí en adelante, en las palancas de cambio de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

La presión de los Estados Unidos transformó el escenario de agencia y/o voluntad del Estado colombiano de atacar el mercado de la marihuana y la cocaína. Así, entre 1977 y 1979 inició una campaña más firme desde Estados Unidos para presionar a Colombia con el objetivo de atacar el tráfico de marihuana y de cocaína, convirtiéndose en la antesala de la

---

<sup>99</sup> Crandall, Russell. *Driven by Drugs: U.S. Policy Toward Colombia*. Lynne Rienner Publishers. 2002.

“guerra contra las drogas” en América Latina. En esta década, la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration -DEA) reemplazó la Oficina Federal de Narcóticos (Federal Bureau of Narcotics - FBN) el 1 de julio de 1973, representando un antes y un después de la agenda, alineación y capacidad de las naciones de tratar el tráfico de drogas, que normalmente descansaba en oficinas mal equipadas y dispersas, sin estrategias claras. La DEA, en su proceso de expansión, impactaría la estructuración de la agenda anti-drogas en América Latina a partir de la capacitación de especialistas, organización de asociaciones y redes, y consolidación de una élite profesional<sup>100</sup>.

La llegada de Ronald Reagan al poder comienza a marcar el inicio de una tendencia que se irá acentuando en las dinámicas de cooperación entre los dos países que tienen que ver con la mezcla entre los discursos del anticomunismo, la guerra contra las drogas y los derechos humanos. La administración Reagan radicaliza el discurso anticomunista, que generará impactos en los conflictos centroamericanos, pero también declara oficialmente la guerra contra las drogas<sup>101</sup>. Esta radicalización de los discursos se verá claramente reflejada en Colombia durante la administración de Turbay Ayala que ya, en 1978, había formalizado el Estatuto de Seguridad Nacional, por medio del cual se le daban prerrogativas a la fuerza pública frente al tema de la violencia política y la protesta social<sup>102</sup>.

Era claro que la política exterior estadounidense hacia las Américas seguía alineada con la contención del comunismo y la lucha contrainsurgente, pero a la vez se iba fortaleciendo la lucha contra las drogas. En paralelo a estas cruzadas, en las que el componente militar y policial era central, distintos sectores del gobierno estadounidense fortalecían la agenda de derechos humanos que desde la administración de Jimmy Carter se venía posicionando.<sup>103</sup> Pese a este fortalecimiento normativo, que se materializó en enmiendas como 502B del

---

<sup>100</sup> Pérez Ricart, Carlos. El papel de la DEA en la emergencia del campo policial antidrogas en América Latina. *Foro Internacional* (FI) 231, LVIII, 2018 (1), 5-48, 2018.

<sup>101</sup> Tickner, Arlene. B. Tensiones y consecuencias indeseables de la política exterior estadounidense en Colombia. *Colombia Internacional*, 49 (50), 39-61. 2000; Tokatlían, Juan Gabriel. National Security and Drugs: Their Impact on Colombian-US Relations. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 30 (1), 133-160. 1988.

<sup>102</sup> Moyar, Mark, Hector Pagan y Wil Griego. *Persistent Engagement in Colombia*. JSOU. 2014; Ramsey, Robert. *From El Billar to Operation Fenix and Jaque: The Colombian Security Forces Experience, 1998-2008*. Combat Studies Institute Press. 2008; Tate, Winifred. Human Rights Law and Military Aid Delivery: A Case Study of the Leahy Law. *PoLar*, 34 (2), 337-354. 2011.

<sup>103</sup> Mertus, Julie. *Bait and Switch: Human Rights and U.S. Foreign Policy*. Routledge. 2008. P.p. 29.



Foreign Assistance Act o la Enmienda Harkin, cuyo propósito era exigir parámetros en materia de DD.HH para los países receptores de asistencia militar y económica, nunca se implementó de manera taxativa y la ayuda siguió corriendo a los gobiernos aliados de Estados Unidos, y en esta medida Colombia y su aparato militar continuaron recibiendo la asistencia sin grandes limitaciones. Estas enmiendas de *vetting*<sup>104</sup> y *condicionalidad* terminaron convirtiéndose en herramientas de política exterior de Estados Unidos para presionar a sus “aliados” frente a la adopción de ciertas estrategias en el marco de la guerra contra las drogas, como efectivamente ocurriría en Colombia durante la administración de Ernesto Samper Pizano (1994-1998).

De este modo, el Estado colombiano continuó recibiendo asistencia para su fuerza pública, tanto para la lucha contrainsurgente como para la lucha contra las drogas. Pues era claro que para los años ochenta los actores narcotraficantes habían adquirido una gran influencia, pero también lo hacían las guerrillas, particularmente las FARC que comenzaban a tener un mayor protagonismo, dado que por estos años se celebra la VII Conferencia (1982) en la que se declara la lucha prolongada por el poder. Este periodo vio entonces un complejo entrecruce entre procesos de paz, que se dieron con las administraciones de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990), ofensivas contrainsurgentes y el recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico.

El papel de EE.UU. frente a las negociaciones fue ambiguo, pues pese a que mostraban interés por los diálogos que se adelantaban con las guerrillas, no evidenciaban un apoyo decidido a dichos procesos y, por el contrario, seguían sugiriendo la importancia de “no bajar la guardia en el plano militar”. A juicio de los análisis de diferentes agencias de inteligencia estadounidenses, era muy posible que el cese al fuego que se había establecido con las FARC en 1984, y las negociaciones con el M19 y el EPL, se trataran de “una oportunidad para descansar, reagruparse y reclutar nuevos integrantes, de una manera relativamente libre de la presión de las fuerzas de seguridad del gobierno”, “en el largo plazo, la fuerte convicción ideológica de los insurgente y la aparente preferencia por la vida de combate, probablemente

---

<sup>104</sup> Revisión de los records de Derechos Humanos de la Fuerzas de Seguridad, que son potenciales recipientes de la asistencia de Estados Unidos. Fellowship of Reconciliation. *Military Assistance and Human Rights: Colombia, U.S Accountability, and Global Implications*. FOR. 2010.



iba a limitar el número de guerrilleros dispuestos a abandonar la lucha revolucionaria”<sup>105</sup>. Consideraban que era fundamental no abandonar a las fuerzas de seguridad colombianas ante una eventual coordinación guerrillera que, según la información disponible, estaba siendo patrocinada política y económicamente por el gobierno cubano.

Washington presenció con los brazos cruzados cómo las negociaciones de paz con las guerrillas fueron deteriorándose, iniciando con el Ejército de Liberación Nacional (EPL) y, posteriormente, con el M-19, tras la toma del Palacio, hasta el punto de ruptura total con las FARC. Sus diagnósticos de la situación del país no evidenciaron un compromiso creíble por ayudar con algún tema de la agenda de paz, ni de incidir a favor de los gobiernos de Betancur o Barco en términos políticos para favorecer una salida negociada al conflicto.

Sus preocupaciones recaían en los intereses norteamericanos en el país, y en la seguridad de los funcionarios de la Embajada. Por este motivo, su atención en las fuerzas de seguridad colombianas fueron una constante en este periodo, teniendo en cuenta que, desde su lectura, los militares, quienes estaban a cargo de la lucha contrainsurgente, no contaban ni con la movilidad (terrestre o aérea) ni con la capacidad de fuego para enfrentarse con unas fuerzas guerrilleras “organizadas y disciplinadas”, como eran percibidas las FARC, cuyos intereses, por lo demás, permanecían inalterados. Así mismo, la asistencia se fortalecía hacia la Policía, quien se posicionaba como un actor estratégico en la lucha contra las drogas.

Hubo un flujo continuo de armas y entrenamiento en contrainsurgencia para los militares colombianos durante todo el proceso de paz. Incluso, en 1984, el año del “cese al fuego” oficial, Estados Unidos envió más de 50 millones de dólares en armas a las fuerzas de seguridad. La Escuela de las Américas entrenó a 4.844 efectivos colombianos entre 1984 y 1990.

Uno de los elementos que se destacan en este último periodo de la guerra fría, y que influye de manera profunda en el conflicto colombiano, es el tema del mercenarianismo. Pese a ser una práctica de vieja data que, en alguna medida, cayó en desuso tras la consolidación

---

<sup>105</sup> CIA, cable “Colombia: Prospects for Peace”, 19850500, 1985. National Security Archive, Washington.

del Estado-Nación moderno<sup>106</sup>, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, comenzó a activarse de manera más frecuente e, incluso, sistemática, en las guerras que tenían lugar en los llamados países del Tercer Mundo. Los mercenarios se convirtieron en una pieza clave para la eliminación de idearios de autodeterminación de los pueblos.<sup>107</sup>

En Colombia, el uso de estos actores, tanto en su modalidad de soldados a sueldo, como en su versión corporativizada, tendría un amplio despliegue y sería el resultado, sobretodo en fases posteriores, del estrecho relacionamiento con Estados Unidos y la forma como la potencia proyectaba la defensa de sus intereses en el territorio, tal como se desarrolla en el último apartado de este documento.

La década de los noventa estuvo marcada por grandes cambios. A nivel internacional finalizaba la Guerra Fría con la caída del eje comunista y se consolidaba la globalización neoliberal, que se profundizaría con el auge del narcotráfico y la lucha contra las drogas. Entre tanto, en Colombia se generaba un cambio político fundamental con la Constitución de 1991, resultado de la movilización social y de los procesos de paz consolidados con algunas guerrillas.

Dentro de este marco, algunos sectores políticos y sobretodo militares comenzaron a utilizar el discurso de las narco-guerrillas, originado en los círculos oficiales estadounidenses<sup>108</sup>, con la idea de canalizar recursos de la lucha contra las drogas en la lucha

---

<sup>106</sup> Antoine Perret recoge el artículo 47 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra el cual define los mercenarios como individuos que hayan sido reclutados con el fin específico de combatir en un conflicto armado y que, de hecho, toman parte directa en las hostilidades. La motivación debe ser una retribución material, considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares a las fuerzas armadas de esa parte. Y no puede ser nacional de ninguna parte del conflicto, ni en misión oficial por orden de otro Estado. Perret, Antoine. *Las compañías militares y de seguridad privadas en Colombia: ¿una nueva forma de mercenarismo?* Universidad Externado de Colombia. 2009.

<sup>107</sup> La reacción a esta situación es que el mismo sistema internacional ha tratado de regularse a través de mecanismos e instituciones multilaterales, bien sea regionales o de carácter mundial, como las Naciones Unidas. Sin embargo, no han logrado materializarse normativas sólidas y vinculantes que regulen el uso de mercenarios y de su evolución: las Compañías Militares de Seguridad Privada. Esto tiene que ver con que es una práctica que muchos actores estatales han encontrado beneficiosa en la medida en que reduce los costos de una intervención militar directa, lo que tendría implicaciones jurídicas, pero también reputacionales y políticas. Pero también con que la ausencia de regulación beneficia los intereses económicos de las diferentes compañías, tanto de las que contrata sus servicios como los suyos propios.

<sup>108</sup> El embajador de Estados Unidos en Colombia, durante los ochentas Lewis Tamps formula por primera vez el término narco guerrilla, que posteriormente irá generalizándose en el discurso militar y político de ambos países.

contrainsurgente. Sin embargo, pese a que la narrativa narcoguerrillera había sido introducida desde EE.UU., a lo largo de la década de los noventa Washington evitará dar recursos a las Fuerzas Militares para el combate contra las drogas<sup>109</sup>. Esto se daba por cuenta de los constreñimientos internos desde el Senado norteamericano, generados por las experiencias de El Salvador y Vietnam, pero también por el hecho de que durante esta década se consolidaban ciertas restricciones para brindar asistencia militar cuando los receptores de la ayuda no cumplieran con los estándares de derechos humanos,<sup>110</sup> como lo fue la Enmienda Leahy de 1996. Ya, para la época, existían fuertes indicios de la vinculación del ejército con los grupos paramilitares y con amplias violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, en los 90 el tema del narcotráfico será priorizado dentro de la agenda de cooperación norteamericana hacia Colombia. Desde 1989, con la llegada de George Bush padre a la presidencia de Estados Unidos, la necesidad de “hacer algo con el problema de la droga”, especialmente en Colombia, donde la institucionalidad del Estado se veía amenazada por los carteles, llevó a Washington a lanzar la Iniciativa Andina en septiembre de 1989. El asesinato de candidato presidencial Luis Carlos Galán presionó aun más para que Estados Unidos viera la necesidad de priorizar el tema del narcotráfico en la región bajo la lógica de que: “la forma más barata de erradicar los narcóticos era destruyéndolos en su fuente, acabando con los cultivos dondequiera se cultiven y eliminando los laboratorios dondequiera existan”<sup>111</sup>. Esto, además de incluir estrategias públicas de combate contra los cultivos, implicó el desarrollo de alianzas entre entidades como la DEA y el cartel de Cali para contrarrestar el poder del Cartel de Medellín y Pablo Escobar.

La Iniciativa le otorgó a Colombia 65 millones de dólares, primordialmente en ayuda militar y el envío de entrenadores estadounidenses para que adiestraran a los militares colombianos en la lucha antinarcóticos. Esta ayuda vendría condicionada a ciertos procesos de reestructuración económica que hicieran los mercados colombianos más abiertos a los

---

<sup>109</sup> Isacson, Adam. *The U.S Military in the War on Drugs*. En *Drugs and Democracy in Latin America* (pp. 15-60). Lynne Rienner Publishers. 2005.

<sup>110</sup> Evans, Michael. *War in Colombia: Guerrillas, Drugs and Human Rights in U.S. Colombia Policy, 1988-2002*. The National Security Archive. 2002.

<sup>111</sup> Stokes, Doug. *America's Other War*. Zed Books. 2005. Pp. 82.



capitales estadounidenses.<sup>112</sup> La justificación de la Iniciativa Andina estaba fuertemente ligada al combate contra el narcotráfico, no sólo en Colombia sino en la región. Sin embargo, el tipo de ayuda que finalmente se desprendió de la estrategia tuvo unos claros tintes contrainsurgentes, en la medida en que brindó asistencia militar, policial y de inteligencia para combatir a organizaciones cuyos nexos con el narcotráfico y los narcotraficantes se hacían más evidentes con el tiempo.

“Aunque seguía siendo sistemáticamente contrainsurgente, se decía que los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos habían pasado de la contención de las guerrillas vinculadas al comunismo internacional a la contención de los insurgentes supuestamente vinculados a los narcotraficantes internacionales. De este modo, se mantuvo la continuidad en los objetivos de la política estadounidense, pero se produjo una discontinuidad en su justificación declarada públicamente.”<sup>113</sup>

Sin embargo, para 1992 era un hecho que la estrategia había fracasado en su esfuerzo de controlar la entrada de cocaína y heroína a Estados Unidos.<sup>114</sup> Bill Clinton trató de reducir la ayuda a la región, sin embargo, por presiones internas, tuvo que mantener la asistencia hacia los Andes, enfocándose primariamente en la ayuda militar. Tanto el programa de Financiamiento Militar Externo (FMF Foreign Military Financing), el programa de Entrenamiento y Educación Militar Internacional (IMET International Military Education and Training) y el ya conocido Programa de Asistencia Militar (MAP), fueron los encargados de canalizar toda la ayuda hacia la región andina, que entre 1980 y 1991 recibió alrededor de 2 mil millones de dólares<sup>115</sup>.

La agudización de la guerra contra las drogas en el periodo Clinton tuvo repercusiones dentro de Colombia, sobre todo con la llegada a la presidencia de Samper, y el escándalo del Proceso 8.000. Esto condujo a que Estados Unidos descertificara a Colombia, primero en 1996 y, seguidamente, en 1997, pese a que en realidad la ayuda económica no se recortó, ni

---

<sup>112</sup> Las reformas neoliberales redujeron los aranceles de los productos importados, lo que a su vez repercutió negativamente en la economía nacional de Colombia y en las cifras de desempleo, y contribuyó a un enorme déficit comercial de 4.200 millones de dólares ocho años después.

<sup>113</sup> Stokes, Doug. *America's Other War*. Pp. 86.

<sup>114</sup> Crandall, Russell. “Driven by Drugs”. Pp. 35.

<sup>115</sup> Isacson, Adam. “The U.S Military in the War on Drugs”. Pp. 18-23.

se aplicaron todas las disposiciones legales que implicaba la sanción.<sup>116</sup> Sin embargo, la presión estadounidense sí contribuyó negativamente a minar aun más la poca legitimidad política que le quedaba al presidente, quien se vio forzado a cooperar con Washington en torno a la lucha antinarcóticos.

Paradójicamente, el gobierno de Samper fue el que de manera más enfática colaboró con Estados Unidos<sup>117</sup>. Un ejemplo de ello se dio con la Operación Resplandor. La mencionada Operación, que inició el mismo mes de febrero en que Samper lanzaba su política antidrogas, representó una de las estrategias de erradicación forzada más agresivas del gobierno de turno. Enmarcada en un contexto de presiones internacionales, especialmente de “una enrarecida atmosfera bilateral respecto de los Estados Unidos que culminaría con la certificación condicionada por interés nacional del primer año y la descertificación del segundo año”<sup>118</sup>.

Para Estados Unidos, la Policía era un socio más confiable, ya que por un lado había mostrado esfuerzos reales de abordar el problema de la droga y a la vez en combatir la corrupción interinstitucional y, por otro lado, debido a su función como institución, únicamente utilizaban los recursos recibidos en la guerra contra el narcotráfico. Desde Washington, se veía con mayor preocupación el record en materia de derechos humanos de las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército, dado que cada vez eran más notorias las conexiones entre sus integrantes y los grupos paramilitares que se conformaban en el país. Para Estados Unidos, el Ejército había mostrado poca voluntad de cooperar, sin separar los esfuerzos contrainsurgentes de los antinarcóticos. Esto llevó a que, durante la segunda descertificación del país, en 1997, el Ejército colombiano no recibiera ayuda militar en el marco de la recién aprobada Ley Leahy de 1996, mientras que la Policía fuera el principal beneficiado.

Un notable ejemplo de esta cercanía con la Policía se dio a través del general Roso José Serrano, quien logró canalizar de manera efectiva los recursos norteamericanos en el combate

---

<sup>116</sup> Leal Buitrago, Francisco. “La Seguridad Nacional a la Deriva”; Tickner, Arlene. B. “Tensiones y consecuencias”.

<sup>117</sup> Se restableció el tratado de extradición, se aprobaron leyes antidroga y la aplicación de un herbicida más fuerte para la fumigación de cultivos. Se aceptó la creación de un grupo de trabajo con miembros de ambos países que excluía al presidente Samper.

<sup>118</sup> Ramírez Tobón, Williman. “¿Un campesinado ilícito? Pág. 65. En Análisis Político No. 19. 1996.”



contra el narcotráfico. Es interesante el nivel de cercanía que existía entre este y algunos asesores estadounidenses como lo fue Gilbert Macklin, quien en distintas correspondencias firma como “Su Gringo”, dado que fue este Mayor el que lideró junto con Serrano la creación de las unidades COPES dentro de la Institución. Estas unidades especiales serán la punta de lanza de la Policía para el combate contra el narcotráfico, especialmente contra Pablo Escobar y, posteriormente, contra el Cartel de Cali<sup>119</sup>.

La situación en Colombia siguió deteriorándose a lo largo de 1996 y 1997. Por su parte, la ayuda estadounidense continuaba fluyendo casi que exclusivamente para las operaciones antinarcóticas en conjunción con la Policía, enfocadas en el sur del país. La Fuerza Aérea y la Armada lograron llegar a un acuerdo con la embajada estadounidense, pudiendo acceder de este modo a la ayuda de Washington; el Ejército seguía viéndose limitado por el veto de Derechos Humanos. De manera reiterada el Ejército trataba de negociar las condiciones del veto con Estados Unidos, pero terminaba siendo peor. En un cable de la embajada de Estados Unidos en Colombia se muestra como el general Harold Bedoya trató de negociar las condiciones de un acuerdo de monitoreo en relación con Derechos Humanos. y esfuerzos antinarcóticos (*End-use monitoring* EUM) por medio del cual se le restituiría la ayuda al Ejército. Sin embargo, el mal manejo dado por el General, y por la postura estadounidense, se decidió que la ayuda se le otorgaría a la Policía.<sup>120</sup> Únicamente en julio de 1997, cuando el general Bedoya fue obligado a renunciar y tomó el puesto el general Manuel José Bonnett, se firmó el acuerdo de monitoreo y la ayuda nuevamente comenzó a llegar al Ejército colombiano<sup>121</sup>.

Estas contradicciones, ocasionadas por la agudización de un conflicto armado en el que coexistían guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha y carteles de la droga, y un escenario internacional que de improvisto dejó de enfocarse en el enemigo comunista y pasaba a priorizar otro tipo de amenazas como el narcotráfico, tuvo impactos sobre la fuerza

---

<sup>119</sup> Fuentes de Archivo Externas, EXT20-71528. Policía Nacional de Colombia. “14.09.2020 1997 acuerdos de cooperación usa-Colombia 3 parte”. 1997; CBSNEWS. “The Secret Warriors: Covert War In Colombia”. 1999. Documento digital, disponible en <https://www.cbsnews.com/news/the-secret-warriors/>

<sup>120</sup> US DoS. “1997BOGOTA06705”. EUM TALKS WITH DEFMIN AT DEAD END, RECOMMENDATION, The National Security Archive, Washington. <http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/col55.pdf>

<sup>121</sup> Tate, Winifred. Human Rights Law and Military Aid Delivery. Pp. 342.

pública, especialmente las Fuerzas Militares, que durante este periodo recibirían fuertes golpes por parte de la insurgencia. Como lo expresó un excanciller, de la administración Samper:

“el planteamiento es que había que haber un concepto de cooperación, que sirviera para derechos humanos como para narcotráfico porque no podía ser que nos pareciera bienvenida la presencia de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero que no podíamos hablar sobre derechos humanos porque tocaba, fundamentalmente, a los militares. Entonces lo que yo decía era “hagamos un concepto que muestre que la cooperación, no importe cual sea el tema, debe ser igual. Debe ser equitativo, debe ser equilibrado, debe ser consensuado, tanto en narcotráfico como derechos humanos”. Era chistoso, la izquierda era partidaria de la cooperación para defender los derechos humanos y la derecha era partidaria de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico, pero criticaban la otra. La derecha criticaba la participación en derechos humanos y la izquierda criticaba la participación en la lucha contra el narcotráfico. “Hagamos un concepto que sea válido para los dos temas”. Trata de mostrar en qué condiciones era aceptable para Colombia la cooperación de Estados Unidos porque si iba a la izquierda bienvenida la cooperación para derechos humanos, si ibas a la derecha bienvenida para la lucha contra el narcotráfico.”<sup>122</sup>

Este complejo escenario habría de entrar en contradicción con las políticas estadounidenses que, de improviso, dejaron de enfocarse en el enemigo comunista, y pasaron a priorizar a los carteles y la amenaza narcotraficante. Pese a esta aparente alineación dentro de Estados Unidos frente al discurso antinarcóticos, dentro de las mismas entidades norteamericanas se evidenciaba una falta de coordinación sobre cómo enfrentar la situación en Colombia. Mientras que actores como el Comando Sur, cuya vocación siempre había estado más en función de la capacitación y entrenamiento militar para garantizar la seguridad hemisférica, compaginaba con sus contrapartes colombianas en cuanto a los “claros nexos” entre las guerrillas y el narcotráfico, otra era la lectura proveniente de la DEA, la DIA y la CIA.

---

<sup>122</sup> Entrevista 311-PR-00411 Experto, testigo, relaciones exteriores, 2020.



En un informe de la DEA (United States Drug Enforcement Administration) de 1994 se decía que “a pesar de que las fuerzas de seguridad colombianas afirmaban con frecuencia que las unidades de las FARC participan directamente en operaciones de narcotráfico, la actuación independiente de los insurgentes en la producción, el transporte y la distribución de drogas a nivel nacional en Colombia es limitada”. El informe añade que “no hay pruebas creíbles que indiquen que las FARC o el ELN hayan ordenado, como cuestión de política, que sus respectivas organizaciones se dediquen directamente a la producción o distribución independiente de drogas”, y también que “no se tiene constancia de que las FARC ni el ELN hayan participado en el transporte, la distribución o la comercialización de drogas ilícitas en Estados Unidos o Europa”<sup>123</sup>.

De manera similar, la DIA (Defense Intelligence Agency), en un informe de 1993, restaba importancia a la participación de los grupos insurgentes en el proceso del narcotráfico, señalando que su participación se centraba, en gran medida, “en la extorsión de los campesinos que cultivan las plantas de amapola y producen el látex [de opio]”, y que “hay pocas pruebas de que los grupos guerrilleros estén protegiendo físicamente los cultivos de amapola”. El informe también señala que los ataques contra las fuerzas de erradicación, que se atribuyen a las fuerzas guerrilleras, “son más bien instigados por los propios cultivadores y no por protectores guerrilleros contratados”.<sup>124</sup>

Los reportes de la CIA (United States Drug Enforcement Administration) sobre la Iniciativa Andina eran reveladores de estas contradicciones, incluso desde épocas tempranas de implementación de esta. En 1992, un informe del Centro Antinarcóticos de la Agencia examinaba la relación entre los narcotraficantes y los grupos guerrilleros en Colombia y Perú, y evaluaba las implicaciones de esta relación para los programas antidroga financiados por Estados Unidos en la región. Concluía que las guerrillas estaban efectivamente asociadas al tráfico de drogas en la región andina, pero advertía, sin embargo, que el uso por parte de las

---

<sup>123</sup>DEA, cable, “Drug Intelligence Report, Insurgent Involvement in the Colombian Drug Trade”, 19940600, June 1994. Washington, NSA.

<sup>124</sup>Defense Intelligence Agency, cable, “Smuggling Trends in the Department of Huila,” 199331201, December 1, 1993. Washington, NSA.



fuerzas de seguridad de estos países de la ayuda antidroga con fines de contrainsurgencia no produciría un resultado medible contra el tráfico de estupefacientes<sup>125</sup>.

Pese a estas enormes contradicciones, que se tradujeron en una falta de congruencia entre las políticas estadounidenses y las necesidades de seguridad de Colombia, es fundamental aclarar que el “abandono” al cual se vio obligado el Ejército fue más aparente que real.<sup>126</sup> Cables confidenciales de la NSA<sup>127</sup> han mostrado que el Ejército colombiano, pese a no poder recibir “oficialmente” la ayuda estadounidense, nunca se vio totalmente privado del flujo de recursos de Estados Unidos. A través de distintos canales legales, como la Sección 1004 y la 1033 del Departamento de Defensa, que no requería notificación del Congreso, o mediante prácticas que le buscaban el quiebre a las normativas de DD.HH., el Ejército se nutrió de recursos y entrenamiento estadounidense.<sup>128</sup>

El grueso de la ayuda que da Washington a sus aliados en materia de seguridad pasa a través del Foreign Assistance Act (FAA), que se encarga de poner bajo la supervisión del Departamento de Estado, la ayuda militar que ofrece el Departamento de Defensa. Del mismo modo, el acta permite al Congreso estadounidense poner ciertos límites a la ayuda, introduciéndola dentro del proceso de autorización y apropiación anual. El FAA, en términos generales, trata de controlar que la ayuda que destina Estados Unidos en términos militares no caiga en manos de gobiernos abusivos o unidades militares y policiales violadoras de derechos humanos.

A raíz del furor que va a ir adquiriendo la guerra contra las drogas, el Departamento de Defensa y el Comando Sur también comenzaron a tener protagonismo y cierta autonomía a

---

<sup>125</sup> Central Intelligence Agency, “Narco-Insurgent Links in the Andes,” 199110800, July 29, 1991. Washington, NSA.

<sup>126</sup> Ver, por ejemplo; Marcella, Gabriel, y Donald Schulz. “Colombia’s three wars”; Marks, Tom. *Colombian Army Adaptation to Farc Insurgency*. Strategic Studies Institute. 2002.

<sup>127</sup> U.S. Embassy Colombia cable, “The Proposed Sale of UH-60L Helicopters to Colombia,” 1996. National Security Archive, Washington; U.S. Embassy Colombia cable, “Aerial Eradication in Guaviare, Caqueta and Putumayo: Things Heat Up as DANTI [Colombian National Police Anti-Narcotics Division] and COLAR [Colombian Army] Increase the Pressure on Miraflores and Environs; COLAR Launches “Operation Conquest II” into Caqueta and Putumayo.” 1996. National Security Archive, Washington; State Department Backgrounder, “Blackhawk Helicopter Sale Request-Colombian Army”. 1996. National Security Archive, Washington; U.S. Embassy Bogotá cable, “Ambassador’s January 12 Meeting with New MOD [Minister of Defense] Designate.” 1997. National Security Archive, Washington; U.S. Embassy Colombia cable, “Hold on Sec. 506 Shipment for Colombian Military.” 1997. National Security Archive, Washington.

<sup>128</sup> Isacson, Adam. “The U.S Military in the War on Drugs”.



la hora crear programas y canalizar recursos. Bajo este escenario cobra vida la Sección 1004, ubicada dentro del Departamento de Defensa, la cual está encargada de transferir fondos a sus unidades regionales, en este caso concreto al Comando Sur, sin el monitoreo del FAA. Aunque el grueso de la ayuda que da Estados Unidos se sigue haciendo a través de agencias como el INC (*International Narcotics Control*) adscrita al departamento de Estado, y con programas como el IMET (*International Military Education and Training*) y el FMF (*Foreign Military Financing*), la asistencia que se ha dado bajo la Sección 1004 no es para nada despreciable<sup>129</sup>. A través de la Sección no se pueden transferir armas y demás material bélico letal, pero sí entrenamiento y capacitación. Además de la 1004, en 1998 se aprueba un segundo programa más pequeño de asistencia antinarcóticos, bajo la sección 1033. A diferencia de la anterior, esta sí permite transferir ciertos elementos bélicos, además de unidades de transporte y entrenamiento.<sup>130</sup>

En ese sentido, es lógico que los recursos provenientes del Departamento de Defensa, bajo la forma de las secciones 1004 y 1033, hayan ido a nutrir a las Fuerzas Militares colombianas, que para la época sufrían de abandono en términos de la ayuda más oficial y sustanciosa que recibía Colombia. Del mismo modo, aunque las secciones tenían como objetivo nutrir y capacitar a las unidades militares en sus “acciones antinarcóticos”, es evidente que tanto los componentes materiales como el entrenamiento recibido, fueron utilizados en la lucha contrainsurgente. Aunque públicamente altos mandos oficiales criticaron la división entre una y otra, es muy probable que, a puerta cerrada, los materiales y recursos que no eran objeto de monitoreo se utilizaran para mejorar las capacidades militares antiguerrilla.

Adicional a la existencia de estos canales “legales” por medio de los cuales se capacitó y fortaleció al Ejército, según cables desclasificados del NSA, entre 1998 y 2000, se

---

<sup>129</sup> Para 1997 la Sección 1004 había otorgado alrededor de 142.8 millones de dólares para América Latina. Aunque determinar la suma exacta que llegó a Colombia es imposible debido al secretismo con que se maneja esta información, es posible asumir que para esa fecha, los recursos fueron considerables teniendo en cuenta el valor estratégico que tenía el país, además de estar pasando por épocas críticas en torno a la lucha guerrillera. Se estima que para 2003, ingresaron a Colombia cerca de 136 millones de dólares. Isacson, Adam. “The U.S Military in the War on Drugs”. Pp. 37.

<sup>130</sup> Entre 1998 y 2002 Colombia y Perú recibieron cerca de 89 millones en entrenamiento, botes y equipos varios. Isacson, Adam. “The U.S Military in the War on Drugs”. Pp. 38.



desarrollaron ciertas prácticas dentro de la institución que permitieron evadir las restricciones impuestas por el Senado norteamericano. Entre estas, la más sonada fue la “limpieza” de las unidades, que consistió en crear nominal y formalmente nuevas unidades militares, pero conformadas por el mismo personal de las antiguas.<sup>131</sup> Debido a que estas unidades no figuraban dentro de los registros de unidades violadoras de Derechos Humanos podían pasar el *vetting* y *condicionalidad* y obtener la ayuda.

Así, por ejemplo, en marzo de 1998, el Comando Especificó del Oriente fue la primera unidad en ser *vetada* y *limpiada*, y se volvió la inspiración para repetir la práctica con otras unidades colombianas. Entre 1998 y 2001 otras once unidades “se limpiaron”, incluyendo la Brigada 12, que comenzó a operar de manera conjunta con la Brigada 24 en el Putumayo, la cual, según diferentes fuentes, estuvo vinculada estrechamente con grupos paramilitares que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)<sup>132</sup> y funcionaba bajo las directivas de la FUTCO (*Joint Task Force South - JTF-S*).<sup>133</sup> La misma Brigada Contra el Narcotráfico (BRCNA), que fue la primera unidad militar creada en función de la lucha antinarcóticos con ayuda estadounidense, y que fue determinante en la estrategia del “push hacia el sur”, estuvo en estrecha coordinación con las brigadas 12 y 24 y con la Segunda Brigada Móvil, todas unidades que habían sido vetadas de recibir ayuda antes de “ser limpiadas” por su record en Derechos Humanos y los nexos probados con el paramilitarismo<sup>134</sup>. Estas prácticas no disminuyeron, sino que, por el contrario, con la entrada

---

<sup>131</sup>U.S. Embassy Colombia cable, “Colombia EUM [End-Use Monitoring] Update: Final Data Received.” 1998. National Security Archive, Washington; State Department cable, “Requests for Further EUM [End-Use Monitoring] Information Regarding COLAR [Colombian Army] 12th Brigade.” 1998. National Security Archive, Washington; State Department cable, “Military Assistance to the Colombian Army’s 7th Brigade and 2nd Mobile Brigades.” 1998. National Security Archive, Washington; U.S. Embassy Colombia cable, “Military Assistance to Colombian Army’s 7th and 12th Brigades, and 2nd ‘Brim.’” 1998. National Security Archive, Washington.

<sup>37</sup> U.S. Embassy Colombia cable, “Human Rights Review of Unit Proposed Under End-Use Monitoring Agreement: Colombia’s JTF-S (“Joint Task Force South”) Command Element.” 2000. National Security Archive, Washington; U.S. Embassy Colombia cable, “Part of the 1st CN Battalion Deployed to Southern Putumayo; Logistical Support from 24th Brigade.” 2000. National Security Archive, Washington.

<sup>132</sup> Humans Rights Watch. La “Sexta División

<sup>133</sup> Evans, Michael. “War in Colombia”.

<sup>134</sup> U.S. Embassy Colombia cable “Military Assistance to Colombian Army’s 7th and 12th.” 1998. National Security Archive, Washington.



en vigor de Plan Colombia en 2000, incrementaron debido a la necesidad de poseer unidades que pudieran recibir el flujo masivo de recursos que vendrían con el Plan.

Indudablemente, Plan Colombia representa un hito en el acercamiento entre Colombia y Estados Unidos en torno a su cooperación en seguridad, así como un punto fundamental en el proceso de modernización de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Después de transcurrir los tropiezos de una administración cuyo enfoque hacia las drogas era percibido por Washington como “blando” (César Gaviria) y de una caracterizada por la falta de legitimidad y nexos con el narcotráfico (Ernesto Samper), la presidencia de Andrés Pastrana se convirtió en la base para el acercamiento entre los dos países<sup>135</sup>.

Desde Estados Unidos se comenzó a aceptar que la intransigencia con la que se había tratado al gobierno anterior había profundizado la crisis que atravesaba el Estado colombiano, en un momento donde las guerrillas y paramilitares se hacían más fuertes, y las fuerzas de seguridad sufrían duros golpes militares a manos de las primeras. Este sentimiento de *mea culpa*<sup>136</sup> condujo a ver en Pastrana un socio con el cual mejorar las relaciones bilaterales, tratando de generar estrategias propicias para solucionar el problema colombiano. Se quería entonces generar una mayor confianza y restablecer las relaciones con el país andino y, al mismo tiempo, se aceptó, inicialmente con un cauto optimismo, la voluntad del nuevo gobierno de buscar una salida negociada al conflicto.

Tanto así que, como lo plantea Rodrigo Granda, el llamado Canciller de las FARC, en diciembre de 1998 “Raul Reyes se reúne con Peter Romero, ¡los gringos! los dueños del planeta tierra. Ahí sí, juntar a los gringos y juntar a las FARC no era una tarea sencilla, pero eso se hace en Costa Rica y los gringos escuchan y están interesados en que de pronto se haga un proceso de paz en Colombia. Ahí se llegan a acuerdos que es muy importante seguir con estas conversaciones, incluso se pone una nueva cita, (...) en Panamá para seguir hablando con los gringos”<sup>137</sup>.

---

<sup>135</sup> Rosen, Jonathan. *The Losing War: Plan Colombia and Beyond*. State University of New York Press. 2014; Tickner, Arlene. B. “Tensiones y consecuencias”; Tickner Arlene. La “guerra contra las drogas”: las relaciones Colombia-Estados Unidos durante la administración Pastrana. En J. Estrada Álvarez, *Plan Colombia: ensayos críticos* (págs. 215-234). Universidad Nacional de Colombia. 2001.

<sup>136</sup> Tickner, Arlene. Intervención por invitación. *Colombia Internacional*, 65, 90-111. 2007. P.p.101.

<sup>137</sup>Entrevista 084-PR-02988, Canciller de las FARC, 2021.



Este apoyo inicial de Estados Unidos hacia la iniciativa de paz terminaría abruptamente tras el asesinato de los tres indigenistas estadounidenses que habían sido secuestrados por las FARC en Arauca, en 1999<sup>138</sup>. El mismo Rodrigo Granda dijo a la Comisión de la Verdad que “en Arauca, se hace una operación militar y se captura tres indigenistas, estos tres indigenistas (...) Dos de ellos habían estudiado en Cuba y estaban siempre al lado de las causas más nobles, eran lingüistas e investigadores, los camaradas nuestros consideran que estos tres indigenistas son agentes de la CIA y los matan”.<sup>139</sup>

La respuesta inmediata de los EE.UU. fue cerrar toda conversación. Todas las puertas que se habían abierto se cierran, Granda lo reconoce: “cuando se dice que nosotros somos responsables del asesinato de estos tres indigenistas, eso se desplomó, quedamos bajo cero como la temperatura en Moscú (...) Peter Romero no volvió a aparecer, y nosotros nos quedamos con este lastre de haber asesinado gente buena e inocente”<sup>140</sup>.

Pero no solo se congelaron los acercamientos, sino que tanto oficiales de Estados Unidos como de Colombia concentrarían sus esfuerzos en la aprobación del Plan Colombia. El Plan, que había comenzado a negociarse desde 1998 en una lógica de constituirse como un paquete de ayuda socioeconómica con componentes de seguridad, terminó convirtiéndose en un acuerdo de cooperación que priorizaría los temas de seguridad y la militarización por sobre los temas de desarrollo. Si bien es posible que la estrategia haya terminado acentuando el componente militar, esto no fue el resultado de una imposición de Washington hacia el país, sino el resultado de un lobby activo por parte de autoridades colombianas que requerían un respaldo tanto económico como político en un momento crucial del conflicto armado. Como lo planteó Guillermo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores durante la administración Pastrana, los cambios que se introdujeron al Plan no fueron realmente cambios sino adaptaciones pragmáticas de énfasis en aras de obtener el apoyo de Estados Unidos<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> Noticias: [https://elpais.com/diario/1999/03/06/internacional/920674815\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1999/03/06/internacional/920674815_850215.html)

<sup>139</sup> Entrevista 084-PR-02988, Canciller de las FARC, 2021.

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Avilés, William. US Intervention in Colombia: The Role of Transnational Relations. En *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 27, No. 3, pp. 410–429. 2008

El resultado fue la aprobación para julio de 2000 de un paquete de ayuda que ascendía a 1.300 millones de dólares, de los cuales un 80% estarían destinados a fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública, y sólo un 20% a la asistencia económica y social. Aunque desde Washington se había acentuado la necesidad de ayudar a Colombia, que según los mismos funcionarios colombianos en Washington decían, se perfilaba como un *estado fallido*<sup>142</sup>, y por lo tanto requería de ayuda inmediata, el lente estadounidense estuvo limitado por la guerra contra las drogas.<sup>143</sup>

Tanto los sectores duros y blandos del Congreso estadounidense concordaban en que era totalmente indeseable que Estados Unidos se viera sumido en un nuevo conflicto armado al estilo de El Salvador o Vietnam. Por esta razón, en este primer momento, el Plan trató de no cruzar la línea invisible que separaba la lucha antinarcóticos de la contrainsurgente. Sumado al *vetting* en torno a Derechos Humanos, la ayuda estadounidense no logró traducirse a lo largo de la administración Pastrana en un verdadero impulso para contrarrestar la crítica situación que vivía el país. Sin embargo, durante su administración se comenzó a gestar el proceso de modernización militar que sería vital para modificar el balance de fuerzas a favor del Estado colombiano.<sup>144</sup>

En términos generales, la ayuda estadounidense durante la administración Pastrana se vio limitada a estos ámbitos debido a las restricciones en torno a la utilización de la asistencia en la lucha contrainsurgente. Pese a esto, era evidente que ciertos elementos de esta ayuda, como por ejemplo el entrenamiento que se dictaba en Colombia, podía ser transmitido de una

---

<sup>142</sup> La conceptualización de los Estados Fallidos surgió en el seno de la academia estadounidense para estudiar las situaciones de los países de África, primordialmente, haciendo alusión a comunidades políticas que carecen de la capacidad de cumplir con sus funciones básicas de proveer bienes y servicios a la población y garantizar mínimos de seguridad, perdiendo así su legitimidad, y convirtiéndose en un escenario proclive para el surgimiento de diferentes formas de violencia. Los estados débiles son espacios propicios para el auge y crecimiento de los llamados señores de la guerra, entendidos como individuos que controlan pequeños pedazos de territorio usando una combinación de fuerza y patronazgo. Estos señores de la guerra contemporáneos no sólo desafían la soberanía estatal genuina, sino que en ocasiones también lo hacen con la complicidad de ciertas autoridades y oficiales gubernamentales, haciendo uso de prácticas corruptas y el miedo que sobre estos generan.

<sup>143</sup> Esta narrativa puede ser rastreada en diversas fuentes secundarias que ya han sido mencionada, y corroboradas con los testimonios dados por altos funcionarios estadounidenses en el marco de los seminarios web, organizados por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Embajada de Colombia en EE. UU. “Plan Colombia: Una Hoja de Ruta para las Relaciones Futuras entre EE. UU. y Colombia y la Región el 27 de abril y 4 de mayo de 2021”. Seminarios web de cuatro partes.

<sup>144</sup> Ramsey “From el Billar”; Pizarro “Las FARC”.

unidad a otra, sin que tuviera que haber participación directa de Estados Unidos. Igualmente, ciertas actividades como el acompañamiento por parte de los Batallones Contra el Narcotráfico a las unidades de Policía en el Putumayo para las actividades de fumigación implicaban entrar en contacto directo con las guerrillas, con lo que se cruzaba la línea invisible entre una y otra actividad. Desde el comienzo, distintas operaciones “antinarcóticos” no sólo afectaron a los narcotraficantes, sino a las insurgencias, y en menor medida a los paramilitares. De este modo, en el largo plazo, las fuerzas antinarcóticos, terminaron beneficiando a la contrainsurgencia, producto de la capacitación recibida, los equipos e infraestructura generada.<sup>145</sup>

En el terreno, la realidad impedía generar una separación tajante entre las dos guerras que se libraban en el país, y las fuerzas de seguridad y los sectores políticos utilizaron esto a su favor. Por una parte, no había forma real de impedir que los entrenamientos recibidos no se trasladaran en acciones de contrainsurgencia y que, incluso, se pasaran hacia unidades que habían sido excluidas de la ayuda por su record en materia de DD.HH. De otro lado, ciertas acciones desarrolladas por parte de entidades estadounidenses en clave de guerra contra las drogas, como la provisión de inteligencia, contribuían a la lucha contrainsurgente pues brindaban información sobre los desplazamientos de los grupos guerrilleros y sus ubicaciones en tiempo real.

Voces colombianas, pero también estadounidenses, comenzaron a plantear la necesidad de romper la línea divisoria y utilizar recursos del Plan Colombia en la lucha contra las guerrillas. Como lo sugirió el General Gary Speer, “para el operador es muy difícil distinguir entre las FARC como traficantes de droga, las FARC como organización terrorista y las FARC como organización insurgente”.<sup>146</sup> Esta idea, sumada a la intención de esta guerrilla de obtener el estatus de beligerancia, fue creando un ambiente de zozobra que, con los cambios que se avecinaban en el sistema internacional, terminarían por quebrar la línea divisoria y volver el Plan Colombia un plan contrainsurgente de manera abierta.

---

<sup>145</sup> Ramsey “From el Billar”

<sup>146</sup> Speer, citado en Moyar. “Persistent Engagement”.

La llegada de George Bush al poder en Estados Unidos no se tradujo inmediatamente en un cambio de política hacia Colombia. Las estrategias antinarcóticos y los derechos humanos marcaron la agenda estadounidense hacia el país. Sin embargo, un cambio significativo se dio con la aprobación de un paquete de ayuda adicional a Plan Colombia para cuidar el oleoducto Caño Limón-Coveñas, de la multinacional petrolera Occidental Petroleum (OXY), que venía sufriendo atentados constantes, especialmente en Arauca.

En febrero de 2002, la embajadora de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson, anunció que el presidente Bush solicitaría 98 millones de dólares adicionales para entrenar y equipar a la Decimoctava Brigada del Ejército colombiano con el fin de proteger el oleoducto Caño-Limón. Era claro que la protección de la infraestructura petrolera se alejaba totalmente de la lucha antinarcóticos, y estaba más enfocada en la insurgencia. Como lo sugirió el general Patterson en ese momento: “Es cierto que esto no es un asunto antinarcóticos, pero es algo que debemos hacer. Es importante para el futuro del país, para nuestras fuentes de petróleo y para la confianza de nuestros inversionistas”.<sup>147</sup>

Así, en la Audiencia en el Plenario del Comité del Presupuesto de la Cámara de Representantes del 7 de marzo de 2002, donde se debatía el presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2003, se afirmó que se agregaba “un nuevo elemento a los esfuerzos antinarcóticos. Se trata de US\$ 98 millones en financiamiento militar extranjero (Foreign Military Financing. FMF) para ayudar a Colombia a proteger el oleoducto Caño Limón–Coveñas de las organizaciones terroristas internacionales que están involucradas en el tráfico de drogas de las FARC y el ELN. Sus ataques al oleoducto lo mantuvieron cerrado por 240 días en el último año con grandes costos para Colombia, causando serios daños ambientales y privando a los Estados Unidos de una fuente de petróleo”<sup>148</sup>.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 impactaron de manera contundente el devenir del conflicto armado colombiano. La lucha mundial contra el terrorismo<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> El Tiempo. “E.U cuidará sus intereses en Colombia”. *El Tiempo*. Febrero 10 de 2002. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1324656>

<sup>148</sup> Resumen de la Audiencia Audiencia en el Plenario del Comité del Presupuesto de la Cámara de Representantes del 7 de marzo de 2002. Documentación consultada en la Dirección América de Cancillería.

<sup>149</sup> En todo caso es necesario recordar que en los manuales militares de los EE.UU. ya desde finales de los ochenta se comenzaba a hablar de terrorismo en vez de insurgencia.



comenzaba y el primer paso que dio EE. UU. frente a Colombia consistió ratificar<sup>150</sup> la inclusión de las FARC y el ELN dentro de la lista de organizaciones terroristas internacionales e incluir a las AUC en octubre de 2001<sup>151</sup>. Esto generaría cambios inmediatos en la intervención estadounidense. En palabras de un alto mando de inteligencia militar esto se evidenció, por ejemplo, en el tema de la inteligencia, “en la operación que hacíamos de inteligencia, la ayuda gringa era muy, muy mala para nosotros. (...) Otra cosa fue la guerra contra el terrorismo y cuando el 11 de septiembre ahí sí los tipos, nos llegaba gente de primer orden, gente muy comprometida y fueron decisivos en muchas cosas para qué”<sup>152</sup>.

Desde la perspectiva de un guerrillero perteneciente a la Comisión Internacional de las FARC, el 11 de septiembre “generó la posibilidad de un mayor control y una mayor vigilancia. Se estrechó espacios (...) Entonces, unido al incremento del plan bélico norteamericano en el mundo, se redujo el ambiente internacional de paz, se impusieron las salidas militares que desarrolló Estados Unidos y en el conflicto colombiano es obvio que esa política norteamericana pues tenía convencido a las fuerzas armadas que no era tan necesario avanzar hacia un acuerdo hasta que no tuvieran seguro que podían hacer desaparecer a las FARC”<sup>153</sup>.

La guerra, desde el plano discursivo, comenzaba a tener una narrativa distinta. Ahora se situaba en la lucha internacional contra el terrorismo. Esto llevó a cambios importantes en la asistencia militar, que se hicieron explícitos con la permisividad para la utilización de los recursos norteamericanos en la guerra contra las guerrillas colombianas, especialmente contra las FARC. De manera efectiva, se logró plasmar al terrorismo como una amenaza constante y latente para Estados Unidos, por lo que había que tomarse medidas drásticas e inmediatas para hacerle frente tanto a nivel nacional como internacional.<sup>154</sup>

---

<sup>150</sup> Estas ya habían sido incluidas dentro de la lista de organizaciones terroristas (FTO por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado desde 1997. <https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/>

<sup>151</sup> Tickner, Arlene. “Intervención por invitación”. Pp. 101-102.

<sup>152</sup> Entrevista 311-PR-02117, Fuerza Pública, doctrina militar, asistencia militar extranjera. 2020-2021

<sup>153</sup> Entrevista 084-PR-02882, excombatiente de las FARC, perteneciente a la Comisión Internacional de las FARC, 2021.

<sup>154</sup> Entrevista 655-PR-02491, Experto, Estados Unidos, Transformación de las Fuerzas Militares. 2020; Entrevista 655-PR-02149, Experto, Ayuda militar, Plan Colombia. 2020.



La llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en Colombia permitió capitalizar el descontento nacional frente al actuar de las guerrillas, y la situación internacional para perseguir una ofensiva contra las FARC<sup>155</sup>. Lo que antes estaba dividido en guerra contra las drogas y contra la insurgencia, se aglutinó en la guerra contra el “narco-terrorismo”. El corolario de lo anterior fue que, para octubre de 2002, la administración Bush pidió al Congreso levantar las restricciones asociadas con el uso de la asistencia militar estadounidense en Colombia, lo que permitió al Estado colombiano utilizar los recursos de Plan Colombia para enfrentar a las guerrillas y proteger la infraestructura petrolera de manera frontal.

Este nuevo marco de referencia generó una lectura diferente acerca del complejo escenario de seguridad que se desarrollaba en Colombia, fundamentalmente por parte de EE.UU. y sus aliados en la lucha contra el terrorismo internacional. Francis Taylor, Coordinador para el Contraterrorismo del Departamento de Estado, señaló que las FARC, junto con el ELN y las AUC, eran las organizaciones terroristas más peligrosas del hemisferio, y como tal debían recibir el mismo tratamiento que otras organizaciones afines, es decir la fuerza militar. Taylor, también enfatizó en el nexo internacional de las FARC con terroristas del IRA, que se encontrarían en territorio nacional entrenando a la guerrilla colombiana.<sup>156</sup>

La mayor cercanía entre los gobiernos se va a traducir en una mayor reciprocidad entre los dos países en lo concerniente a la seguridad. Apenas tomó posesión, Uribe viajó a Estados Unidos en busca de más recursos para hacer frente al conflicto armado, enmarcado como una amenaza terrorista. Solicitó la renovación de un programa para la interceptación del transporte de drogas, así como apoyo para una eventual negociación con los paramilitares. A su vez, Colombia colaboraría con Estados Unidos bajo la nueva cosmovisión de la guerra antiterrorista, extraditando por primera vez a un guerrillero colombiano, Eugenio Vargas,

---

<sup>155</sup> Borda, Sandra. “La internacionalización de la paz”. Pp. 76; Isacson, Adam. “The U.S Military in the War on Drugs.” Pp. 110.

<sup>156</sup> El Tiempo. “En Colombia, 55 del terrorismo en el mundo”. *El Tiempo*. Mayo 22 de 2002. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1322571>; Taylor, Francis. Overview on global terrorism. State.gov. 2002. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/10291.pdf>

alias ‘Carlos Bolas’, quien sería procesado no solo por narcotráfico, sino también por su autoría intelectual en el asesinato de los tres ciudadanos estadounidenses en 1999.

Para seguir consolidando la alianza con Washington, el gobierno Uribe reanudó de forma drástica las fumigaciones aéreas, esta vez sin restricciones territoriales y bajo las directrices de Estados Unidos. En estos primeros meses del acercamiento, el país del norte anunció el envío de los primeros miembros de Fuerzas Especiales para entrenar a los soldados colombianos en operaciones de contrainsurgencia. Estas fuerzas fueron las que entrenaron a los miembros de la Brigada 18, ubicada en Arauca, para la defensa del oleoducto Caño-Limón Coveñas<sup>157</sup> y fueron las encargadas de llevar a cabo la implementación del decreto 2002 de septiembre de 2002, la zona de rehabilitación y consolidación que llevó a grandes violaciones a los derechos humanos, especialmente en este departamento.

Posteriormente, a finales de 2002, la administración Uribe continuó haciendo peticiones para un mayor involucramiento y asistencia de Estados Unidos. Intentó obtener un acceso más directo a la inteligencia recogida por Washington y recursos adicionales para financiar el programa de recompensas, creado para capturar narcotraficantes y terroristas. La petición fue respondida por Washington en febrero de 2003, cuando Bush solicitó al Congreso la aprobación de 463 millones para la lucha contra el narcoterrorismo para el año fiscal 2004. Este paquete, inserto dentro de uno más amplio conocido como Iniciativa Regional Andina, incluyó 110 millones para las Fuerzas Militares en sus labores antiterroristas, y 1.6 millones para el programa International Military Education and Training (IMET), que proporciona becas para la formación de personal militar de países aliados. El apoyo de Colombia a la invasión de Estados Unidos a Irak le garantizó al gobierno Uribe 100 millones de dólares adicionales que podría destinar a la “guerra narcoterrorista”.

En 2004, Uribe viajó a Washington con el objetivo de ampliar Plan Colombia cuatro años más. Por este mismo periodo, la administración Bush obtuvo la aprobación de ampliar el número de efectivos en Colombia, pasando de 400 a 800 militares, y de 400 a 600 contratistas militares. El objetivo de ampliar Plan Colombia residió en la necesidad de contar con fondos, equipo y entrenamiento apto para lograr la concretización del Plan Patriota. Este

---

<sup>157</sup> Borda, Sandra. “La internacionalización de la paz”.



consistió en una estrategia de seguridad diseñada por las Fuerzas Militares colombianas, que vendría a complementar y nutrir la Política de Seguridad Democrática de la administración<sup>158</sup>.

La gestación del Plan, así como su implementación, contó con el aval y apoyo de Estados Unidos. Por más de un año se celebraron reuniones entre los militares de ambos países, contando con la presencia de James Hill, comandante del Comando Sur, en función de discutir las dimensiones tácticas, políticas y presupuestarias del Plan<sup>159</sup>.

“Con todos nuestros otros compromisos en el mundo, algunos se preguntan: ¿por qué querríamos participar en Colombia? En primer lugar, porque nos interesa. Colombia es la segunda democracia más antigua del hemisferio, nuestro quinto socio comercial en América Latina y nuestro noveno proveedor de petróleo. Una Colombia desestabilizada amenaza la cordillera andina y perturba el comercio regional. Una Colombia débil, repleta de terroristas de todo tipo en espacios sin gobierno, sólo puede sentar un precedente muy poco deseable para desestabilizar a los países vecinos.”

“Nuestra presencia física es más bien modesta, ya que por ley no supera los 400 soldados y 400 contratistas civiles. Pero ya han visto lo que unos pocos hombres dedicados que trabajan con las fuerzas aliadas han hecho en el extranjero. Estamos teniendo un efecto similar en Colombia. Su competencia militar está aumentando. Esto significa que pueden responder más rápido, moverse más rápido y luchar mejor de lo que nunca han podido. La 1ª Brigada Antinarcóticos sigue entrenando y operando con una competencia profesional cada vez mayor. La creación y el entrenamiento de un batallón de comandos para perseguir a los líderes enemigos ya ha dado resultados desde su primer despliegue en enero. El sargento mayor de mi mando está trabajando con el ejército colombiano para profesionalizar su cuerpo de suboficiales, que es el alma de cualquier ejército y la clave del éxito a largo plazo. El personal del Comando Sur está trabajando con los militares colombianos para ayudarles a mejorar las operaciones conjuntas, otra de las

---

<sup>158</sup> Informe 365-CI-01177 Corporación viva la ciudadanía. Allá la vida nos pertenecía...aquí nos tenemos que defender solas. 2021.

<sup>159</sup> Brittain, James. “Colombia: The objective reality of Plan Patriota - A response to subjective propaganda”. OCHA services – reliefweb. Enero 24 de 2005. <https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-objective-reality-plan-patriota-response-subjective-propaganda>



claves del éxito a largo plazo. Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos también han entrenado a las fuerzas armadas colombianas en Arauca para proteger una parte del oleoducto de 772 millas que ha sido un objetivo frecuente de los ataques de las FARC y el ELN, una piedra angular en una estrategia general de protección de infraestructuras en todo el país.”

“La situación de Colombia es única en dos sentidos. En primer lugar, se enfrenta a enemigos que están financiados en órdenes de magnitud mejores que los grupos a los que se han tenido que enfrentar otros países. Incluso en el punto álgido de la Guerra Fría, ninguno de los grupos marxistas por delegación en ninguna parte de América estaba tan bien pagado, equipado y abastecido como los que los colombianos enfrentan hoy, todo ello debido, por supuesto, a los hiperbeneficios del tráfico de drogas. En segundo lugar, Colombia está luchando con justicia, de acuerdo con los valores democráticos y los derechos humanos. Esto es sencillamente fundamental para lo que ellos y nosotros nos esforzamos por conseguir. El gobierno colombiano no está empleando campos de concentración rurales, ni redadas de campesinos, ni masacres, ni desapariciones, ni ninguna otra táctica utilizada por sus enemigos” (James Hill ).<sup>160</sup>

El Plan Patriota se constituyó en la estrategia contrainsurgente más grande y sostenida de la historia colombiana, y fue crucial para asestar duros golpes recibidos por las FARC en materia militar. Por supuesto, sin olvidar que estos mayores éxitos vinieron de la mano de masivas violaciones a los derechos humanos, siendo los falsos positivos el caso más representativo. El primer éxito que obtuvo el Plan, consistió en desarticular todas las unidades guerrilleras que amenazaban con estrangular Bogotá, mediante la Operación Libertad I<sup>161</sup>. Posteriormente, con la Operación JM, la Fuerza de Tarea Omega fue enviada a la llamada “retaguardia estratégica” de las FARC, que corresponde a los departamentos de Caquetá,

---

<sup>160</sup> The Center for International Policy’s Latin American Security Program. “Colombia -- The Way Ahead”. Remarks by James Hill, Commander of the U.S. Southern Command, Center for Strategic and International Studies. 2003. [https://adamisacson.com/files/old\\_cip\\_colombia/030910hill.htm](https://adamisacson.com/files/old_cip_colombia/030910hill.htm)

<sup>161</sup> A pesar del éxito operacional es importante resaltar que las provincias de Sumapaz y Tequendama durante esa operación reportaron graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, homicidios de civiles, pues esta región tradicionalmente había sido de tradición comunista, por lo que fue estigmatizada. También es necesario advertir que también hubo un componente paramilitar importante en este periodo, lo que incrementó la violencia y la degradación del conflicto entre 2002 y 2003.



Meta, Guaviare y Putumayo (área de operaciones Omega), en los cuales la insurgencia había encontrado territorios de refugio frente a las ofensivas estatales<sup>162</sup>.

En el paso del Plan Patriota hacia el Plan Consolidación, y previo al inicio de las negociaciones de paz con las FARC, se desarrolló desde Washington una nueva estrategia de cooperación hacia Colombia. Con base en los éxitos obtenidos en el plano militar, y bajo la necesidad de consolidar dichas ganancias territoriales, desde el Ministerio de Defensa dirigido por Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo, se acude a la Oficina de Inicativas de Transición (OTI, por sus siglas en inglés) de las USAID, con el objetivo de redireccionar la ayuda estadounidense precisamente hacia el logro de dichos objetivos de consolidación. Esto permitió, inicialmente, el desarrollo del Programa Inicial de Respuesta a la Gobernanza (IGRP por sus siglas en inglés), cuyos objetivos eran fortalecer la credibilidad y la legitimidad del gobierno en las áreas de posconflicto, o “zonas de consolidación”; aumentar la voluntad y la capacidad de las comunidades de las zonas de consolidación para cooperar e interactuar con el gobierno, y aumentar la capacidad gubernamental para responder a las necesidades prioritarias de la comunidad de manera oportuna.

En 2007, la Oficina de la USAID ayudó al gobierno colombiano a crear el Plan Integral de Consolidación de la Macarena<sup>163</sup> (PCIM), un proyecto dirigido a los seis municipios del sur del departamento del Meta, cerca del parque nacional de la Macarena, durante mucho tiempo bastión de la guerrilla. En 2009, el enfoque del PCIM se convirtió en el modelo del Plan Nacional de Consolidación (PNC) de Colombia. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá lanzó la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia para coordinar la asistencia estadounidense a estos esfuerzos de consolidación entre todas las agencias estadounidenses de desarrollo, diplomacia y defensa que operan en Colombia.

Esta iniciativa puede ser leída como una sucesión de Plan Colombia y en cierta medida en un factor de persistencia de la violencia en el país. Si bien pretendió abordar el tema del conflicto armado desde una mirada más centrada en el desarrollo, el componente militar

---

<sup>162</sup> Pizarro, Eduardo. *Las Farc*. Pp. 277; Rangel, Alfredo y Pedro Medellín. *Política de Seguridad Democrática*. Grupo Editorial Norma, 2010. Pp. 16.

<sup>163</sup> Para profundizar este tema y ver los impactos sobre el campesinado cocalero, recomendamos revisar el capítulo de hallazgos.



estuvo presente desde el inicio.<sup>164</sup> Una de las instituciones con mayor fuerza dentro de la iniciativa fue el US Military Group. Si bien su presencia es histórica en Colombia, en el marco de esta nueva fase de cooperación ha generado un cambio fundamental en la manera de concebir a Colombia, tratando de posicionar al país como un socio estratégico en materia de cooperación en seguridad hemisférica. Esta última tendencia no deja de ser preocupante si se tiene en cuenta los enormes problemas no resueltos en materia de DD.HH que involucran a las fuerzas de seguridad, que ahora se han convertido en los instructores de otras Fuerzas Militares y policiales en América Latina.

Cuando durante los cincuenta y sesenta las fuerzas de seguridad del país eran las receptoras de una serie de recomendaciones frente a su modernización y profesionalización frente al combate contra el enemigo interno, tras la firma del acuerdo de paz y sin haber saldado los costos humanos del conflicto, tanto Policía como Fuerzas Militares ofrecen un brochure de servicios a la carta para otras fuerzas interesadas en obtener la experiencia colombiana frente a la seguridad. En la medida en que Estados Unidos “lidera desde atrás”, apoyando a Colombia como hacedor de seguridad, Colombia le ayuda a capacitar a otros, generando un efecto multiplicador en aquellos países considerados problemáticos en términos de la inseguridad y la violencia. Por su parte, Colombia construye una historia de éxito que legitima las prácticas utilizadas en el marco de la lucha contrainsurgente.<sup>165</sup>

## **2.1. Plan Colombia**

Es importante comprender que Plan Colombia consistió en un acuerdo de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos orientado a la recuperación del control territorial y al fortalecimiento del Estado, que inició durante la administración Pastrana, en julio de 1999, y se prologó, en su primera fase, hasta 2007. Posteriormente, el Plan sería ampliado gracias a la gestión del gobierno Uribe hasta 2013, en lo que se conoce como Plan Colombia II, que se materializa por medio de la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social 2007-2013 (EFDDS). Este acuerdo de cooperación, dotaría al país de una

---

<sup>164</sup> U.S. Embassy, cable. “Telling Colombia's Story: From Failing State to Stable Ally”, octubre 2009. Wikileaks. [https://wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA3362\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA3362_a.html)

<sup>165</sup> Ibid. Pp. 198.

serie de recursos materiales, tecnológicos, de capacitación y entrenamiento, para hacer frente al conflicto armado, especialmente con relación al tema de lucha antinarcoóticos.

Paralelo al inicio de la implementación de Plan Colombia I, que se da en la transición entre la administración de Pastrana a Uribe, surge la necesidad de plantear un cambio en el discurso gubernamental hacia el conflicto armado y, especialmente, hacia la guerrilla de las FARC, tras la ruptura de los diálogos de paz en 2002. Este cambio de discurso se traducirá en una postura abiertamente militarista hacia la manera de abordar el conflicto, se materializará en la Política de Seguridad Democrática (PSD) y en los planes de guerra: Plan Patriota y Plan de Consolidación.<sup>166</sup> Ambos planes contarían con la asesoría militar estadounidense y se desarrollarían gracias a los recursos recibidos por medio del Plan Colombia, teniendo en cuenta las acciones concretas que implicaban los planes: inteligencia, operaciones especiales, operaciones psicológicas y acción integral, bombardeos y neutralización de objetivos de alto valor.

La formulación y el desarrollo de Plan Colombia es menos lineal de lo que usualmente se ha concebido y sus impactos son menos claros de lo que tradicionalmente se supone. El Plan surgió como iniciativa de la presidencia de Andrés Pastrana en el marco de las negociaciones que se adelantaban en San Vicente del Caguán, Caquetá, con las FARC. El “Plan para la paz, prosperidad y fortalecimiento del Estado”, en un primer momento, pretendía constituirse como un paquete amplio de ayuda que permitiera abordar diferentes temáticas de orden nacional, no limitadas al plano de la seguridad y la lucha antinarcoóticos.<sup>167</sup> La idea inicial pretendía recaudar cerca de 7.500 millones de dólares para revivir la

---

<sup>166</sup> Usualmente, se piensa que en el marco de Plan Patriota se desarrollaron las operaciones militares que generaron un debilitamiento progresivo de las FARC. Sin embargo, operaciones como el Plan Escudo, orientado a la protección de los oleoductos frente a los ataques de las FARC y el ELN; la Operación Jaque, que permitió la liberación de varios secuestrados entre los que se encontraban la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos, la Operación Camaleón, que permitió el rescate de cuatro secuestrados tres miembros de la Policía Nacional y uno del Ejército; y otras operaciones dirigidas contra objetivos de alto valor, como la Operación Sol Naciente (contra alias el Negro Acacio), Operación Fénix (contra alias Raúl Reyes), la Operación Alcatraz (contra alias Martín Caballero y el frente 37 de las FARC), la Operación Sodoma (contra alias el Mono Jojoy), la Operación Odiseo (contra alias Alfonso Cano), se desarrollarían en el marco del Plan Nacional de Consolidación (PNC).

<sup>167</sup> El “Plan para la paz, prosperidad y fortalecimiento del Estado” se componía de cinco partes: la economía, la estrategia antidrogas, la reforma al sector de la justicia, el plan para la democratización y el desarrollo social, y el proceso de paz.



economía, promover el desarrollo social, erradicar los cultivos ilícitos y reavivar las negociaciones de paz, por lo que era necesario atraer distintos actores, no únicamente Estados Unidos, como por ejemplo la Unión Europea y Japón.<sup>168</sup>

Sin embargo, a medida que las negociaciones de paz van perdiendo legitimidad, y el apoyo de Estados Unidos al proceso se retira a raíz del asesinato de los indigenistas asesinados, se comienza a enfatizar de manera cada vez más notoria el eje de seguridad del Plan. Esto resultará en el retiro del apoyo por parte de la Unión Europea a la estrategia de Pastrana, dados los desacuerdos frente al enfoque militarista de Estados Unidos, y en que Plan Colombia terminará volviéndose una estrategia de fortalecimiento a las fuerzas de seguridad, donde el componente socioeconómico se desvanecía.

A partir de unos conversatorios desarrollados por la Embajada de Colombia en Estados Unidos en abril de 2021, coordinados por el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos,<sup>169</sup> se evidencia el activo papel jugado por diferentes funcionarios colombianos en la aprobación del Plan. Sin embargo, también concuerdan en que el rol activo por parte de diferentes miembros del congreso en reconocer la importancia de ayudar a Colombia fue determinante para el desarrollo y aprobación del Plan, empezando por los múltiples viajes que varios de estos asesores y legisladores hicieron al país.

Según el testimonio de Tim Rieser, asesor del senador demócrata Patrick Leahy, el asunto no estaba en convencer a los miembros del congreso pues, para la mayoría, era una realidad que algo tenían que hacerse con respecto a Colombia para evitar que se convirtiera en un estado fallido. El punto central era cómo iban a hacer para desarrollar un programa que permitiera abordar la crisis colombiana de la mejor manera posible y cuáles serían aquellas condiciones sobre las cuales se insistiría y que deberían ser respetados a toda costa. “No estábamos acostumbrados a firmar cheques de billón de dólares, y particularmente no a países

---

<sup>168</sup> Crandall, Russell. “Driven by Drugs”. Pp. 149.

<sup>169</sup> Embajada de Colombia en EE. UU. “Plan Colombia: Una Hoja de Ruta para las Relaciones Futuras entre EE. UU. y Colombia y la Región el 27 de abril y 4 de mayo de 2021”. Seminarios web de cuatro partes.



con serios problemas que generaban preocupación en el congreso, específicamente relacionadas con la conducta de las Fuerzas Militares”.<sup>170</sup>

El problema radicaba en cómo poder limitar la ayuda estrictamente al componente antinarcóticos y evitar que esta fuera usada por unidades militares cuestionadas por violaciones de derechos humanos. En ese sentido, la negociación y aprobación del Plan enfrentó a diferentes sectores de ambos países que tenían lecturas muy diferentes de la crisis colombiana. Hubo sectores, tanto nacionales como en Estados Unidos, que abogaban por un plan que permitiera abordar el serio problema de drogas, que tenía efectos en ambos países de maneras diferenciadas; igualmente, estaban quienes, como el General Barry McCaffrey y sus contrapartes colombianas, veían en Plan Colombia la oportunidad de fortalecer a las Fuerzas Militares para hacer frente a unas guerrillas que se financiaban del narcotráfico, asestaban duros golpes militares y estaban poniendo en jaque a la institución, la democracia y al Estado, valiéndose hábilmente del discurso de la narcoguerrilla y el narcoterrorismo; pero también estuvieron quienes vieron en el Plan una oportunidad para representar sus intereses económicos en el país.

Vendedores de material bélico; contratistas privados de seguridad, con experticias múltiples y variadas en el juego de las guerras irregulares y grandes multinacionales petroleras, influenciaron el destino de lo que sería Plan Colombia. Así, por ejemplo, dos de los principales fabricantes de helicópteros, Sikorsky Aircraft Corporation y Bell Textron, ejercieron una activa presión para que el Plan Colombia destinara fondos a este fin. Las empresas ofrecieron viajes gratuitos en helicóptero sobre Washington a los miembros del personal del Congreso e, incluso, Textron contrató a un antiguo embajador colombiano para que ejerciera presión. En un contexto internacional donde el material bélico no tenía mucha demanda, el impulso económico que significaba la aprobación de Plan Colombia no podía ser despreciado. “[...] obviamente eso implicaba que Estados Unidos de alguna manera, con los Black Hawk, con mucha economía de guerra, muchas empresas dedicadas a la producción

---

<sup>170</sup> Embajada de Colombia en EE. UU. “Plan Colombia: Una Hoja de Ruta para las Relaciones Futuras entre EE. UU. y Colombia y la Región: La Perspectiva del Congreso - El Bipartidismo en su mejor momento”. 27 de mayo de 2021.



de armas, a la producción de insumos para las tropas, etcétera, reactivaban la economía de los Estados Unidos ¿no?”<sup>171</sup>

Esto fue lo que en su momento se denominó como “guerra de helicópteros” (*Chopper Wars*) y fue criticado por diferentes sectores de la opinión pública estadounidense al ser el real motivo por el cual se había demorado la aprobación del Plan de ayuda a Colombia, dadas las discusiones en torno a cuáles helicópteros comprar (Blackhawks o Hueys). Al final, el comité entre la Cámara y el Senado dividió la diferencia, aprobando la compra de dieciocho Blackhawks y cuarenta y dos Hueys, la mayoría de ellos para el Ejército. “A pesar de lo absurdo de la Guerra de los helicópteros, coincide con la exagerada retórica del asunto de la coca colombiana. “Colombia es el corazón de la guerra contra la droga, y será mejor que nos encarguemos de ello. Si perdemos Colombia, entonces perdemos todo”. Es la teoría del dominó de nuevo, con coca en lugar de comunistas.”<sup>172</sup>

Otro sector beneficiado con Plan Colombia fue la industria extractiva. Su protección siempre ha sido una prioridad de orden nacional, razón por la cual siempre ha habido algún tipo de involucramiento de la fuerza pública en estas actividades de seguridad, sobre todo con relación a la industria petrolera. El U.S.-Colombia Business Partnership conformado en 1996, durante la primera desertificación del país, compuesto por multinacionales como Occidental Oil, Bechtel, Caterpillar, Enron, Colgate-Palmolive y BP Amoco, jugó un papel clave para mantener la asistencia militar a Colombia, esgrimiendo argumentos relacionados con la importancia de proteger los intereses comerciales y la inversión en Colombia.

En el umbral de aprobación de Plan Colombia, el vicepresidente de Occidental, Lawrence Meriage, testificó ante el Congreso en febrero de 2000 para apoyar el paquete de ayuda para el Ejército y la Policía. Meriage sugirió que las operaciones petroleras no solo eran cruciales para los ingresos del Estado colombiano, sino que a su vez eran una importante fuente de desarrollo territorial. Meriage fue igualmente hábil a la hora de evidenciar la importancia geopolítica de los yacimientos de Colombia: “Las exportaciones de Estados

---

<sup>171</sup> Mann, Jim. “A Government by the People, for the Military-Industrial Complex.” *Los Angeles Times*. 27 de septiembre de 2000. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2000-sep-27-mn-27528-story.html>; Entrevista 311-PR-00633, defensor de DD.HH, Experto, asistencia militar y violaciones de derechos humanos, 2020.

<sup>172</sup> Huffington, Arianna. “Chopper wars”. *Salon*. Junio 30 de 2000. [https://www.salon.com/2000/06/30/chopper\\_wars/](https://www.salon.com/2000/06/30/chopper_wars/)



Unidos alcanzaron casi 5.000 millones de dólares en 1998, lo que supone casi el 32 por ciento de las importaciones totales de Colombia. Esta nación andina es nuestro vigésimo sexto mercado de exportación en general. Estados Unidos es también el primer inversor extranjero en Colombia. Por último, Colombia es el octavo proveedor de petróleo extranjero a Estados Unidos, con más de 330.000 barriles diarios enviados a las refinerías de la Costa del Golfo en Texas y Luisiana. Este factor es una parte importante de la diversificación de nuestro suministro energético lejos de Oriente Medio.”<sup>173</sup>

Igualmente, argumentó la importancia de no limitar el paquete de ayuda militar y policial únicamente hacia las unidades del sur del país, pues en el norte, donde opera Occidental, la situación de drogas y presencia de actores armados era igualmente problemática. Además, “También hay otro problema, si... que se relaciona con la cuestión regional. Tenemos una operación en Ecuador que está a 40 millas de la frontera con Colombia. Hay cierta preocupación de que, si este empuje comienza en el sur, un empuje implacable en el sur, qué impacto tendría probablemente en las áreas cercanas a la frontera ecuatoriana también.”<sup>174</sup>

Esta postura sobre los intereses petroleros de Estados Unidos ha sido reconocida incluso por personas que estuvieron muy de cerca en la cooperación en materia de seguridad entre ambos países. El sargento retirado de las Fuerzas Especiales de Inteligencia, que por varios años capacitó a los batallones colombianos antinarcóticos, Stan Goff, ha argumentado de forma bastante directa que “El propósito del Plan Colombia es defender las operaciones de Occidental, British Petroleum y Texas Petroleum y asegurar el control de futuros campos colombianos” “El principal interés de Estados Unidos es el petróleo”.<sup>175</sup>

“Nunca mencionamos las palabras coca o narcotraficante en nuestro entrenamiento”,  
“El objetivo de nuestras operaciones no eran los colombianos, sino los estadounidenses

---

<sup>173</sup> House Hearing, 106 Congress. “The crisis in Colombia: what are we facing?”. Hearing before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources of the Committee on Government Reform House of Representatives, second session. Febrero 15 de 2000. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-106hhrg66788/html/CHRG-106hhrg66788.htm>

<sup>174</sup> House Hearing, 106 Congress. “The crisis in Colombia: what are we facing?”. Hearing before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources of the Committee on Government Reform House of Representatives, second session. Febrero 15 de 2000. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-106hhrg66788/html/CHRG-106hhrg66788.htm>

<sup>175</sup> Dunning, Thad y Leslie Wirpsa. “Oil Rigged There’s Something Slippery about the U.S. Drug War in Colombia”. *Amazon Watch*. Febrero 15 de 2001. <https://amazonwatch.org/news/2001/0215-oil-rigged>



que pagan impuestos por la inversión realizada en Colombia. El objetivo sigue siendo el petróleo. Miren dónde están las fuerzas estadounidenses -Irak, el Mar Caspio, Colombia-, lugares donde esperamos encontrar reservas de petróleo”.

“He llegado a la conclusión de que los miles de millones de beneficios e intereses que se pueden obtener en Colombia y en las naciones vecinas tienen mucho más que ver con el prurito de estabilidad que con cualquier preocupación por la democracia o la cocaína. Tras reflexionar sobre mis más de dos décadas de servicio, estoy convencido de que sólo he servido al uno por ciento más rico de mi país [...] Los grandes inversores y prestamistas también son los grandes contribuyentes a las campañas políticas en este país, tanto para los republicanos como para los demócratas. La prensa, dirigida por un puñado de gigantescas corporaciones, repite sombríamente este razonamiento una y otra vez, reforma económica y democracia [...] Pero me estaba acostumbrando a las mentiras. Eran la moneda de nuestra política exterior. ¡Drogas, una mierda!”<sup>176</sup>

Finalmente, un sector que se benefició enormemente de Plan Colombia fue el sector de la seguridad privada, compuesto por grandes compañías de exmilitares que desempeñaron múltiples y variadas funciones en este periodo dentro del país. “El enorme paquete de ayuda estadounidense”, como usualmente ha sido comprendido, Plan Colombia, en realidad no se tradujo en la entrada de grandes flujos de dinero para el Estado colombiano, sino que gran parte de este se destinó tanto a la compra de material de guerra (especialmente de helicópteros), pero, sobre todo, a pagar a compañías privadas para que desarrollaran diversas actividades de asesoramiento, entrenamiento, interdicción, inteligencia y fumigaciones.

“muchos de los recursos del plan Colombia no llegaban directamente al estado Colombiano sino llegaban al estado Colombiano a través de las empresas, podemos decir más o menos entre un 40 - 50 % iban para las empresas y el resto para el gobierno colombiano, en el año 2006 la suma que tuvieron las empresas fueron más de

---

<sup>176</sup> Goff, Stan. “Inside U.S. Counterinsurgency: A Soldier Speaks”. *Consortium News*. Diciembre 22 de 1999. <https://www.consortiumnews.com/1999/122299a.html>



300.000.000 millones de dólares y más de 25 empresas trabajando de seguridad extranjeras trabajando en Colombia”.<sup>177</sup>

El caso mas representativo de la presencia de estas compañías es DynCorp International. Esta contribuyó con dinero para las campañas de senadores del estado de Virginia, donde tienen su centro de operaciones, y en contraprestación obtendrían contratos y recursos en el marco de la estrategia antinarcóticos.<sup>178</sup> Estrechamente ligado con DynCorp está el papel de Monsanto, gigante químico y biotecnológico que produce el Roundup y Roundup Ultra que han sido utilizado en procesos de fumigación en Colombia desde los setenta. Por supuesto, Monsanto también hizo un importante lobby durante la campaña presidencia de George Bush (12.000 dólares) y también contribuyó con cerca de 74.000 dólares a diferentes candidaturas del Senado, mayoritariamente republicanas. Además de esto, contó con la ayuda de una prestigiosa empresa de lobby encabezada por Ann Veneman, quien luego sería la ministra de agricultura de Bush.<sup>179</sup>

Brian Sheridan, Subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Operaciones Especiales Conflictos de Baja Intensidad (SOLIC), también movió sus propios intereses durante el proceso de aprobación del Plan. A partir de sus nexos personales, al haber sido un soldado del ejército norteamericano con la compañía Military Professional Resources Inc (MPRI), Sheridan recomendó directamente la contratación de dicha empresa al Congreso y también al entonces Ministro de Defensa colombiano Luis Fernando Ramírez y al Embajador colombiano en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno.<sup>180</sup> Además de recibir una gruesa suma de dinero por cuenta del Plan Colombia (4.3 millones de dólares por un año de asesoría), lo llamativo de compañías como MPRI es que están conformadas exclusivamente por personal militar retirado de Estados Unidos, incluyendo generales de cuatro estrellas.

---

<sup>177</sup> Entrevista 311-PR-00652, defensor de DD.HH, Experto, Compañías de seguridad militar.

<sup>178</sup> OpenSecrets.org. “DynCorp PAC Contributions to Federal Candidates”. *OpenSecrets.org, Center for Responsive Politics*. <https://www.opensecrets.org/political-action-committees-pacs/dyncorp/C00131383/candidate-recipients/2000>

<sup>179</sup> Bigwood, Jeremy. “Toxic Drift: Monsanto and the Drug War in Colombia,” *Corpwatch*. 21 de junio de 2001. <https://corpwatch.org/article/toxic-drift-monsanto-and-drug-war-colombia>

<sup>180</sup> de la Garza, Paul y David Adam. “Colombia: US Military Aid from the Private Sector,” *Corpwatch*. 2 de diciembre de 2000. <https://corpwatch.org/article/colombia-us-military-aid-private-sector>



Si bien la discusión en torno a los objetivos de Plan Colombia siempre ha coincidido en plantear que hubo un antes y un después en materia de utilización de los recursos del Plan, dedicándose inicialmente a la lucha antinarcóticos y posteriormente a la lucha contra el narcoterrorismo, lo cierto es que la utilización poco monitoreada de contratistas privados de seguridad lanza dudas sobre si esta distinción realmente existió. La ayuda, asistencia y entrenamiento que recibieron Fuerzas Militares y de Policía por parte de militares activos del Ejército de Estados Unidos en los primeros años del Plan, debido al mayor control por parte del Congreso, muy seguramente se dedicaron a temas relacionados con la guerra contra las drogas. Sin embargo, nada garantiza que las asesorías y entrenamientos recibidos por los contratistas privados hayan estado orientadas en el mismo sentido, sobre todo cuando para varias de estas compañías y para los mismos militares colombianos (que serían los recipientes de la ayuda), esa separación entre contrainsurgencia y antinarcóticos no existía en el terreno de operaciones.

Como fue comentado en su momento por el senador demócrata Patrick Leahy, “No tenemos forma de saber si los contratistas están entrenando a estos soldados colombianos de forma totalmente coherente con la política, las leyes y los procedimientos de Estados Unidos (...) El Congreso no tiene más remedio que confiar en el Pentágono para que supervise a los contratistas, pero el Pentágono no suele prestar mucha atención.”<sup>181</sup>

Por lo demás, es muy escasa la información pública o los pronunciamientos y entrevistas que se tienen por parte de estos actores. DynCorp, MPRI, Monsanto y el mismo Pentágono, han sido renuentes a dar declaraciones públicas a cerca de sus operaciones en Colombia (y en el mundo), poniendo sobre la mesa la carta de la seguridad. Soyster, el representante de MPRI, recordando sus épocas como empleado de la DIA, comentó: “Cuando estaba en Vietnam, no quería contar mi operación, si el enemigo lo sabe, puede contrarrestarlo.”<sup>182</sup>

Monsanto, por su parte, ha sido igualmente esquivo a la hora de pronunciarse sobre los encádalos relacionados con el uso del glifosato. Por supuesto, es presumible que esto se deba a las serias implicaciones que esto podría desencadenar en la imagen de la compañía y sus

---

<sup>181</sup> de la Garza, Paul y David Adam. “Colombia: US Military Aid from the Private Sector,” Corpwatch. 2 de diciembre de 2000. <https://corpwatch.org/article/colombia-us-military-aid-private-sector>

<sup>182</sup> de la Garza, Paul y David Adam. “Colombia: US Military Aid”.



enormes costos económicos, como ocurrió en Estados Unidos cuando tuvieron que pagar la suma de 80 millones de dólares a los veteranos de Vietnam que habían demandado a Monsanto a raíz de la utilización del Agente Naranja.<sup>183</sup>

Lejos de constituirse en un simple paquete de insumos para la lucha antinarcóticos, Plan Colombia se convirtió en una enorme colcha de retazos representativos de los diferentes intereses involucrados en Colombia para la época. Es claro que tanto los colombianos como los funcionarios de EE.UU tenían contemplado un escenario en el cual las FARC vería seriamente afectada su posición en los territorios y la población debido a las políticas del Plan Colombia. Por lo tanto, la idea “inocente” de un Plan para la “lucha contra las drogas” pero que en ningún momento llegaría a entrometerse en los esfuerzos del gobierno colombiano contra las guerrillas marxistas es algo imposible de alcanzar. Incluso ya en las primeras semanas de implementación del Plan, los estadounidenses estaban evaluando como sus políticas, incluidas aquellas dirigidas a programas de desarrollo alternativo, podrían impactar a las FARC, y de qué manera reaccionaría la población que estaba en sus zonas de control<sup>184</sup>.

## **2.2. Inmaterialidad de la guerra: contrainsurgencia bajo el discurso de la guerra contra las drogas**

La idea de “lucha contra las drogas” que se gestó desde Estados Unidos, pero que tendría su activo interlocutor en los diferentes gobiernos colombianos, estuvo marcada, al igual que la lucha contra el comunismo durante el desarrollo de la guerra fría, tanto por un componente ideacional o no material, y una serie de practicas (o un componente material) por medio de las cuales se ejecutaría toda la estrategia a lo largo de los años. El Plan Colombia como estrategia de lucha contra las drogas, en realidad se estructuró como un plan de lucha contrainsurgente similar a aquellos desarrollados en periodos anteriores, pero también con

---

<sup>183</sup> Bigwood, Jeremy. “Toxic Drift: Monsanto and the Drug War in Colombia”. Corpwatch. Junio 21 de 2001. <https://corpwatch.org/article/toxic-drift-monsanto-and-drug-war-colombia>

<sup>184</sup> Cable, From Secretary of State Washington to American Embassy Bogota, “QUESTIONS FOR GOC OFFICIALS IN CARTAGENA”, 2000STATE086077, Confidential, May 5, 2000, Colombia Documentation Project, The National Security Archive, Washington, D.C. p. 4.



cambios importantes, propios de los desarrollos tecnológicos, así como de las narrativas utilizadas para legitimar la idea del enemigo interno.

El Plan Colombia, entendido como el plan de cooperación en seguridad entre Bogotá y Washington, fue una estrategia abiertamente contrainsurgente, donde los componentes cívico-militares estuvieron presentes desde un inicio como ya había sucedido en épocas tempranas del relacionamiento entre los dos países en materia de seguridad. Desarrollo y seguridad, con este último como el factor dominante, fueron partes de la ecuación que representaba una continuidad.

En ese sentido, Plan Colombia conserva varios de los elementos de la doctrina contrainsurgente que ya se había venido consolidando desde los albores de la guerra fría, donde existieron componentes inmateriales y materiales. De un lado, Plan Colombia siguió manteniendo una lectura del enemigo interno muy similar a aquella que se desplegó en manuales militares, pronunciamientos y discursos oficiales de la élite políticas durante gran parte de la guerra fría. Con el diferencial de que ya no se trataba, o al menos no se mencionaba públicamente, al bandolero, al insurgente o al comunista, sino al narcoterrorismo o las narcoguerrillas.<sup>185</sup> Sin embargo, en términos reales, el sujeto entendido como enemigo interno siguió siendo el mismo: las guerrillas comunistas y sus colaboradores civiles.<sup>186</sup>

“la narrativa generada a partir de la consolidación de la economía de la coca en los territorios de alta influencia guerrillera, la sensación de “Estado fallido” que alcanzó la institucionalidad colombiana luego de la descertificación realizada por el Gobierno de Estados Unidos al cumplimiento de Colombia de las obligaciones internacionales derivadas de los tratados de drogas, y los golpes militares de la guerrilla al final de la década de los noventa, llevaron al contexto de enunciación de la “narcoguerrilla”.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> En particular, el calificativo que se le da a las FARC es el de “narco-guerrilla terrorista”, y los primeros registros corresponden al General McCaffrey. House Hearing, 106 Congress. “The Narcotics Threat from Colombia”. Subcommittee On Criminal Justice, Drug Policy, And Human Resources Of The Committee On Government Reform House Of Representatives One Hundred Sixth Congress, First Session. Agosto 6 de 1999. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-106hhrg65738/html/CHRG-106hhrg65738.htm>

<sup>186</sup> Por supuesto, bajo la lectura de la guerra contra las drogas, aparecieron otros “enemigos” como fueron aquellos que evidentemente eran parte de los principales carteles de la droga.

<sup>187</sup> Informe 748-CI-00648. El daño que nos hacen. Glifosato y guerra en Caquetá. 2020. Pp. 28.

El discurso internacional de la guerra contra el terrorismo encontró en las administraciones de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) una contraparte profundamente comprometida con ampliar esta narrativa en función de justificar la mano dura contra las insurgencias, especialmente las FARC. Uribe inició su mandato presidencial con el objetivo de profundizar los esfuerzos de su antecesor<sup>188</sup> e iniciar un camino propio en la ampliación de la presencia y las facultades de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional bajo la evidencia de que “la violencia ejercida por organizaciones criminales de diversa índole” era el principal desafío que afrontaba Colombia en el momento. En este sentido lo enunció en el Plan Nacional de Desarrollo de 2002-2006: “la sucesión de homicidios y secuestros, la repetición de actos terroristas y la profusión de negocios ilícitos se han convertido no solo en un obstáculo para el crecimiento económico, sino también en una amenaza para la viabilidad de la Nación. Sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y puede no haber futuro”<sup>189</sup>.

Desde esta visión, la Política de Seguridad Democrática se basó en el rediseño del Estado para la guerra y una militarización de la sociedad<sup>190</sup>, particularmente, a través de alinearse con la idea de una “guerra contra el terrorismo”<sup>191</sup>, lo que negaba la existencia del

---

<sup>188</sup> Ver, por ejemplo, la *Ley N°684 de 2001*. La norma establecía nuevas definiciones de delito terrorista; cláusulas de “presunción de responsabilidad” penal que permitían criminalizar actos lícitos; rebajaba la edad de responsabilidad penal y promovía el establecimiento de pactos de autocensura en los medios de comunicación; creaba “Frentes de Seguridad Ciudadana” integrados por civiles con la función de apoyar a la Fuerza Pública “en la vigilancia, recolección de información y reacción oportuna”; facultaba a las Fuerzas Militares para realizar detenciones e interrogatorios de personas sospechosas de actos terroristas o de tener relaciones con organizaciones terroristas; interceptar comunicaciones y practicar allanamientos de vivienda sin orden judicial; y creaba la obligación de colaborar con las autoridades en la lucha contra el terrorismo, so pena de sanciones penales. Esta Ley fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por ser contraria a los principios básicos del estado de derecho y transgredir obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Ver Sentencia C- 251/2002 de 11 de abril de 2003, Magistrados Ponentes Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández, Expedientes D-3720 y D-3722.

<sup>189</sup> Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un estado comunitario. Página. 19.

<sup>190</sup> *Colombia: socavando el Estado de Derecho y consolidando la impunidad*, Doc. Cit., pág. 17.

<sup>191</sup> Ver, por ejemplo: “Intervención del Presidente de la República, Álvaro Uribe, durante el acto de posesión del nuevo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Édgar Lesmez, en la base militar de Catam, en Bogotá”, *El País*, 9 de septiembre de 2003; Discurso del Presidente de la República ante el Cuerpo diplomático acreditado en Colombia, “Palabras del Presidente Uribe ante el cuerpo diplomático”, 31 de enero de 2005, [http://www.presidencia.gov.co/discursos/discursos2005/enero/cuerpo\\_diplomatico.htm](http://www.presidencia.gov.co/discursos/discursos2005/enero/cuerpo_diplomatico.htm); y Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, *¿Conflicto armado o amenaza terrorista?*, 6 de marzo de 2005, [http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/marzo/mar\\_06\\_05.htm](http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2005/marzo/mar_06_05.htm)



conflicto armado al interior del país; la concentración de los esfuerzos del aparato estatal y el llamado a la población civil para estar al servicio del esfuerzo militar del Estado.

“La cooperación requiere confianza de la ciudadanía, la confianza se adquiere con buen trato y eficacia. Que el campesino, el obrero, el empresario, sienta el trato amable de la Fuerza Pública. Que el ánimo de cooperar se estimule con la reacción oportuna y eficaz. Que cada colombiano que coopere con la Fuerza Pública, sea un multiplicador de convivencia<sup>192</sup>.”

El discurso de los dos gobiernos de Uribe estuvo cargado por la representación de una realidad apocalíptica, según la cual Colombia estaba al borde del colapso total, frente al cual las instituciones debían recuperar su soberanía en el territorio, jalonadas por una fuerte arremetida militar contra los actores armados, pero con un particular énfasis en las FARC. Así, por ejemplo, en los considerandos del Decreto 1837 de 2002 para la primera declaratoria del estado de conmoción interior se señalaban el accionar de los grupos guerrilleros como punto de partida para el colapso: “Hemos alcanzado la más alta cifra de criminalidad que en el planeta se registra, en un proceso acumulativo que hoy nos coloca a las puertas de la disolución social”; para ello, adujo el gobierno, los insurgentes sembraron la anarquía y crearon “la sensación de orfandad, abandono y desgobierno en amplias zonas del país”.

Igualmente, se homogeneizaron tres de los grandes problemas del país: el conflicto armado, la economía del narcotráfico y la inseguridad. La siguiente es la intervención del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez ante la 58ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el 30 de septiembre de 2003.

“En la situación colombiana, terrorismo, droga, violencia e inseguridad son una misma cosa (...) nuestro problema es una amenaza internacional. Si Colombia no destruye la droga, la droga destruye la cuenca amazónica. Si Colombia no frena el terrorismo, este pondrá en dificultades a la democracia de la región”.<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Discurso del Presidente de la República. Álvaro Uribe Vélez  
<http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2002/agosto/tropas.htm>

<sup>193</sup> Intervención del presidente Álvaro Uribe Vélez ante la 58ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 30 de septiembre de 2003  
<http://www.presidencia.gov.co/discursos/discursos2003/septiembre/septiembre2003.htm>

Al igual que durante la contrainsurgencia de los años sesenta en el marco de Plan Lazo, la lógica del Plan Colombia, operacionalizado por medio de Plan Patriota, consistió en quitarle el “agua al pez”, partiendo de la concepción de que las comunidades eran potencialmente aliados de las guerrillas y, en ese sentido, era fundamental neutralizarla de diferentes maneras; “esto no es una cosa dirigida solamente a la guerrilla, esto es una cosa dirigida contra toda la población, sigue permaneciendo la idea de quitarle el agua al pez, eso hace parte de la estrategia contrainsurgente”.<sup>194</sup>

“No sé si usted se acuerda de las órdenes masivas de captura, yo si vi en televisión cuando dijeron, le hicieron el reclamo [a Álvaro Uribe] es que usted está mandando capturar 50, 100, 150 personas, y él dijo no, 100 o 150 personas, eso no es nada, hay que capturar 1000, 1500 guerrilleros y guerrilleras... Entonces mire en qué categoría nos tiene o en qué concepto nos tiene el gobierno nacional si hay que capturar 1000, 1500 guerrilleros y guerrilleras y la pobre gente que va a hacer el mercado le hacían el reten y venga para acá se llevaban 3,5,10,15,20 personas en las órdenes de captura masiva”.<sup>195</sup>

Esta lógica del enemigo interno en épocas de la Seguridad Democrática implicó igualmente que se generaran planes sistemáticos de montajes y procesos judiciales contra los campesinos, líderes sociales y comunidades, de forma más general. Esta estrategia tuvo dos objetivos. Por una parte, desprestigiar los liderazgos locales y, segundo, aislar estos liderazgos de los procesos organizativos de protección de los territorios y la protección de las comunidades. Igualmente, implicó acciones militares directamente contra sindicatos y organizaciones sociales y comunitarias bajo la consigna de luchar contra el terrorismo. Todo este tipo de acciones terminó teniendo un efecto devastador a nivel de la colectividad, pues las personas viven un contante estado se zozobra, lo que ocasiona que poco a poco las comunidades terminen desintegrándose.

“El sentido bélico de los planes implementados por el Estado colombiano para justificarse en la lucha contra el terrorismo, donde no hay cabida para la aplicación entre

---

<sup>194</sup> Informe 365-CI-01177 Corporación viva la ciudadanía. “Allá la vida nos pertenecía...aquí nos tenemos que defender solas. 2021”.

<sup>195</sup> *Ibid* 1 Pp. 79.

combatiente y población civil, pues las necesidades operativas de las acciones exigen resultados concretos para justificar la excesiva presencia militar en la zona”.<sup>196</sup>

Uno de los grupos mayormente afectados por la implementación de Plan Colombia y el Plan Patriota, bajo la Política de Seguridad Democrática, fueron los colectivos cocaleros que fueron fuertemente estigmatizados durante todo este periodo y esto condujo a que poco a poco fueran volviéndose en blancos militares tanto de las fuerzas de seguridad del Estado, como de los grupos paramilitares.

“El hecho de que las FARC-EP controlaran, de un modo u otros, las zonas cocaleras en Caquetá, generó una peligrosa asociación entre la población y esa guerrilla por parte de los demás actores del conflicto, lo que justificó violaciones de los derechos humanos, encarcelamiento de cultivadores, erradicación y fumigaciones con glifosato, acciones que negaron la ciudadanía de los movimientos cocaleros, al punto que se pretendió excluirlos como interlocutores en las marchas cocaleras. Esa asociación indebida terminó desfigurando la protección que tenían las comunidades campesinas como población civil en el marco del derecho internacional humanitario (DIH) (en aplicación del denominado principio de distinción) y de los derechos humanos. [...] los campesinos “cocaleros fueron criminalizados por ser considerado ilegal el cultivo de hoja de coca, además de ser acusados de ser auxiliares de la guerrilla solo por el hecho de compartir el mismo territorio y, por lo tanto, fueron objeto de persecución tanto por el ejército como por los paramilitares.”<sup>197</sup>

Un campesino del Caquetá resume de manera clara la situación que se generó con Plan Colombia:

“Pues la guerra contra la coca realmente fue una guerra contra el campesinado: ¿qué más quiere que le diga? Cuando empezó ese tal Plan Colombia, lo primero que hicieron fue fortalecer la base militar de Larandia con la plata de los gringos. Aquí de lo que se trató fue de golpear las zonas que controlaba la guerrilla. Póngase usted a pensar en la estigmatización tan brava que se había vivido en la época de las marchas cocaleras, ahora sí que se vino ese veneno fue con toda. En el sector del Ortegua, en 2000 más o menos, primero

---

<sup>196</sup> Ibid. Pp. 184

<sup>197</sup> Ibid. Pp. 30



bombardeaban y luego fumigaban. Fue demasiado crítico, al momento que se llevaron a cabo las fumigaciones, se incrementó la militarización y los aviones del Ejército venían y bombardeaban. Y por supuesto hubo desplazamientos por esa forma de luchar contra una mata que realmente ni la culpa tiene, y pues el campesino tampoco, porque es que, con la militarización de muchas zonas, todo mundo en el corregimiento y donde se cultivaba coca era considerado “colaborador de la guerrilla”.<sup>198</sup>

Por esta vía, el gobierno escaló la hostilidad de su discurso fundamentado en la vieja fórmula heredada de la Guerra Fría del enemigo interno, que fomentaba una deshumanización del contrincante en cuanto era representado como un enemigo absoluto de las libertades y derechos de los colombianos. Este discurso estuvo fuertemente apalancado por los secuestros que, bajo la modalidad de “pescas milagrosas”, se habían vuelto sistemáticos en las carreteras del país y cada vez más golpeaban a las clases altas de la sociedad colombiana.

### **2.3. Contrainsurgencia en el marco de Plan Colombia: la materialidad de la guerra**

Plan Colombia se limitó, en sus inicios, a fortalecer al Ejército colombiano frente al narcotráfico. El grueso de la de asistencia se utilizó en la creación de dos Batallones Contra el Narcotráfico, que se sumarían a los esfuerzos del primero creado en 1999, en su tarea lograr el empuje hacia el sur de Colombia. La idea consistió en inmiscuir de manera cada vez más enfática al Ejército en la lucha contra las drogas, sirviendo como apoyo crítico a la Policía Nacional en sus operaciones de erradicación en el Putumayo y Caquetá.<sup>199</sup> Por otra parte, pero muy ligado con lo anterior, la ayuda estadounidense sirvió para nutrir de transporte aéreo a estas unidades recientemente creadas, con lo que su capacidad de combate y movilidad se verían mejoradas. Así las cosas, el Ejército recibió 15 Twin-Hueys, 13 UH-60 Black Hawk y 25 Hueys II.<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> Ibid Pp. 109.

<sup>199</sup> Ramsey, “From el Billar”. Pp. 58.

<sup>200</sup> Moyar, Pagan y Griego. “Persistent Engagement”

Del mismo modo con la aprobación de Plan Colombia, los militares colombianos recibieron capacitación, por parte de entrenadores estadounidenses, en áreas como operaciones de infantería, operaciones aéreas y actividades de *staff*. La Policía también recibió helicópteros<sup>201</sup>, equipos y entrenamiento, ampliando los comandos antinarcóticos (Comandos Jungla) de una a cuatro compañías.<sup>202</sup>

Sin embargo, como se evidenció, con el cambio de discurso hacia el combate contra el terrorismo la ayuda norteamericana pudo ser utilizada de forma mucho más abierta para enfrentar a las guerrillas, especialmente las FARC. Esto se tradujo en un incremento en el número de soldados profesionales y en las unidades especializadas en el combate contrainsurgente. La presencia de mayores ingresos producto de la asistencia estadounidense y los recursos recabados con el impuesto de guerra que se estableció en Colombia, le permitieron al gobierno Uribe crear nueve Brigadas Móviles más, adicionales a las ocho ya existentes.

Por otra parte, logró aumentar el número de policías de 113.600 a 160.000. Igualmente, nuevas fuerzas de seguridad que serían invaluable para contrarrestar a las FARC y el ELN como fueron los *soldados campesinos*. Para 2006 Colombia tenía 598 pelotones, con un total de 21.598 soldados. También aumentó el número de carabineros a 6.720. Estos policías entrenados en tácticas de contraguerrilla y armados con material militar fueron fundamentales para consolidar la presencia en territorios aislados, dada su mayor movilidad y armamento, en comparación a los soldados campesinos. Además de esto se aumentó el número de Batallones de Alta Montaña, Unidades Antiterroristas (AFEUR), Unidades Antisecuestros y Extorsión (GAULA), y Fuerzas de Río<sup>203</sup>.

Del mismo modo, gracias a la mayor presencia de recursos, nuevos equipos y entrenamiento, se logra dividir las fuerzas de seguridad en tres líneas de operación.<sup>204</sup> Por un lado, las ofensivas encabezadas por unidades militares ágiles, que utilizan camiones o

---

<sup>201</sup> 2 Black Hawks, 12 Huey II, Ayres S2R T-65 y varios Rockwell OV-10 Bronco.

<sup>202</sup> Jenzen-Jones, Nic. *Run Through the Jungle: Colombia's JUNGLA Commandos*. Small Wars Journal. 2011.

<sup>203</sup> Ramsey. "From el Billar"; Moyar, Pagan y Griego. "Persistent Engagement"; Informe 066-CI-00552 Aviación y asalto aéreo del Ejército Nacional. La División de Asalto Aéreo en el conflicto armado interno colombiano. 2019.

<sup>204</sup> Informe 066-CI-00552 Aviación y asalto aéreo del Ejército Nacional. La División de Asalto Aéreo en el conflicto armado interno colombiano. 2019.

helicópteros, y cuyo principal objetivo es retomar la iniciativa de la ofensiva, logrando sacar a los insurgentes de áreas pobladas y de las vías de comunicación. El mejoramiento de la tecnología de comunicaciones, así como el aumento y disponibilidad de transporte aéreo fueron fundamentales para el cumplimiento de estas operaciones.

En segunda instancia, están las unidades encargadas de mantener la seguridad. Concretamente, fueron las fuerzas de policía quienes mayormente ocuparon esta tarea consistente en imponer la ley y el orden en las municipalidades más apartadas del territorio. Los soldados campesinos funcionaban como un escudo de seguridad para la Policía. En un anillo posterior se insertaban las fuerzas de carabineros, encargadas de contrarrestar iniciativas enemigas de mayor tamaño. Ante un eventual ataque en masa, se comunicaban con el ejército regular, quien, debido a la mayor movilidad, acudía para respaldar la defensa de las poblaciones. Cuando los territorios habían sido recuperados, y se establecía presencia policial, la estrategia consistía en introducir instituciones civiles y agencias de desarrollo en las poblaciones. Para ello, en 2004 se crearía, con el apoyo directo de Estados Unidos,<sup>205</sup> el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), consistente en un organismo interministerial cuyo objetivo era “mantener el control de los territorios, disminuyendo el crimen y las actividades ligadas con el narcotráfico, fortalecer el sistema judicial, fomentar las actividades económicas lícitas, y reintegrar a estas poblaciones apartadas a Colombia”<sup>206</sup>.

El CCAI quedaría inscrito dentro de la Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social),<sup>207</sup> y consistiría en un organismo cuya principal misión era

---

<sup>205</sup> “El gobierno de EE.UU desempeña un papel integral en el CCAI. El Comando Sur ayudó a diseñarlo, formó a su personal y gasta entre 1 y 2 millones de dólares al año para apoyar docenas de sus proyectos”. U.S Embassy, cable. “GOC Efforts to Win Popular Support in Conflict Zones”. Noviembre, 2006. Wikileaks. [http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA10526\\_a.html](http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA10526_a.html)

<sup>206</sup> Entre sus funcionarios más representativos se encontraban Asesor presidencial y Coordinador de Asistencia Internacional, Luis Alfonso Hoyos, el Vice Ministro de Defensa, Andrés Peñate, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el General Freddy Padilla, y Diego Molano, quien según cables desclasificados era catalogado por el Embajador en Colombia, William Wood, como el “Director de Plan Colombia”.<sup>206</sup> Inicialmente, el Centro trabajaba en 11 áreas que correspondían a 58 municipios. En la fase de Consolidación de la Seguridad Democrática, se aplicó el mismo método en todo el territorio nacional, contando con personal y recursos de la USAID. U.S Embassy, cable. “GOC Initiates Interagency Social Assistance Projects”. Mayo, 2004. Wikileaks. [http://wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA5077\\_a.html](http://wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA5077_a.html); Ramsey. “From el Billar”; Moyar, Pagan y Griego. “Persistent Engagement”.

<sup>207</sup> En julio de 2005, por medio del decreto presidencial 2467 se combinaron tres agencias de desarrollo social en la Agencia Presidencial de Acción Social y Cooperación Internacional, comúnmente conocida como Acción Social. El decreto unió los programas sociales antinarcóticos y de lucha contra la pobreza del Plan de Inversión

lograr la consolidación territorial en aquellos espacios que habían sido liberados militarmente del control de las FARC, y, en gran medida, obedecía a la lógica de generar una “acción integral”<sup>208</sup> sobre los territorios (seguridad y desarrollo) y de generar confianza en la población, propia de las estrategias de contrainsurgencia. Representativo de esta doble lógica lo constituye el hecho de que para su creación hayan participado de manera conjunta tanto USAID, como El Comando Sur y el NAS. Igualmente, uno de sus integrantes, el general Freddy Padilla, lo dejaba explícito en alguna de sus declaraciones cuando en 2006 se inauguró una clínica en la vereda de La Loma, municipio de Bojayá (Chocó): “10% de mis actividades consisten en ganarnos las mentes y los corazones de la población, porque pienso que el conflicto en Colombia no se va a resolver hasta que los ciudadanos crean en el gobierno.”<sup>209</sup>

La tercera línea de operaciones, las llamadas “Operaciones y Fuerzas Especiales”, serían centrales para contrabalancear la dinámica del conflicto, y fueron el resultado de una cooperación muy estrecha con Estados Unidos. En 2002 se dio vida al COESE (Comando de Operaciones Especiales del Ejército), organizado con dos Unidades Tácticas -el Batallón de Comandos (BACOA) y la Agrupación de Lanceros (AGLAN)-, cuyo objetivo era atacar líderes de la insurgencia u objetivos de alto valor (HVT por sus siglas en inglés). Formado a partir de pequeñas unidades de reconocimiento, especializadas en operaciones nocturnas, su

---

para la Paz (FIP) del Plan Colombia con los programas de la Red de Solidaridad Social (RSS) y de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI). Esta reorganización tenía el objetivo de abordar mejor los problemas superpuestos del narcotráfico, la pobreza y la violencia que afectan a los segmentos más vulnerables de la sociedad colombiana. U.S Embassy, cable. “The Soft Side of Plan Colombia - Special Social Programs of the Uribe Administration”. Marzo, 2006. Wikileaks. [http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA2804\\_a.html](http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA2804_a.html)

<sup>208</sup> La acción integral fue la manera como en Colombia mutó el concepto de “asuntos civiles” de las Fuerzas Armadas en 2001. Además de implicar un relacionamiento con la población civil por medio de acciones que van más de lo puramente militar, la acción integral también recoge todo el espectro de las operaciones psicológicas, con el propósito simultáneo de mejorar la imagen del gobierno y desmoralizar a los actores armados ilegales. U.S Embassy, cable. “Colombian Military Civil Affairs Unit Plans Changes”. Febrero, 2007. Wikileaks. [https://wikileaks.org/plusd/cables/07BOGOTA1401\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/07BOGOTA1401_a.html)

<sup>209</sup> U.S Embassy, cable. “Goc Efforts to Win Popular Support in Conflict Zones”. Noviembre, 2006. Wikileaks. [http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA10526\\_a.html](http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA10526_a.html)



propósito era infiltrarse en ciertas áreas donde se sabía había presencia guerrillera, y desde allí ordenar ataques aéreos que permitieran dar de baja a altos mandos insurgentes.<sup>210</sup>

Este Batallón fue financiado y entrenado por unidades especiales del Ejército de Estados Unidos como el Regimiento 160 (Special Operations Air Regiment – SOAR) y la Unidad Especial de los Rangers (Delta Force). Para 2004, el papel del 7thSFG se expande y comienza a entrenar a las unidades encargadas de defender la infraestructura, a los carabineros, los Jungla, la Quinta Brigada Móvil de Infantería, además de trabajar en el desarrollo de operaciones especiales para la Fuerza Aérea y la Armada; todas estas unidades, incluyendo el COESE, irían a conformar posteriormente el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), perteneciente al Comando General de las Fuerzas Militares.<sup>211</sup>

Aunque Plan Colombia debía finalizar para 2005, Uribe logró ampliar la ayuda estadounidense por tres años más, recibiendo en 2006, 728 millones de dólares; y 739 millones en 2007. Con esta ayuda, la segunda administración Uribe continuó obteniendo mejoras en el ámbito de la seguridad<sup>212</sup>, y modernizando el aparato militar. Se creó la Fuerza de Acción Decisiva, compuesta por cuatro BRIM, y Segundo Comando Conjunto del Pacífico. En este periodo el país adquirió helicópteros Súper Tucanos que estaban equipados con “bombas inteligentes”, haciendo más fácil la eliminación de altos mandos guerrilleros.

Para complementar el trabajado de las fuerzas especiales, la especialización de la inteligencia y la adquisición de “bombas inteligentes” fue esencial. La utilización de bombas inteligentes y sistemas de laser para bombardear enemigos militares también estuvo acompañada de una constante capacitación por parte de los norteamericanos en cuanto a la utilización de inteligencia humana (tendencia que ya estaba presente desde los periodos de la contrainsurgencia en el marco de la guerra fría). Además de entrenamientos en clave de obtener información con interrogatorios, también se comenzó a utilizar el pago por información y la infiltración de desertores dentro de los campamentos de las FARC, para que

---

<sup>210</sup> Cook, Geraldine. “Colombian Special Forces: Operational Success through Joint Work”. *Diálogo*. Abril 8 de 2019. <https://dialogo-americas.com/articles/colombian-special-forces-operational-success-through-joint-work/>

<sup>211</sup> Informe 066-CI-00552 Aviación y asalto aéreo del Ejército Nacional. La División de Asalto Aéreo en el conflicto armado interno colombiano. 2019.

<sup>212</sup> Ramsey. “From el Billar”. Pp: 120-122.

ubicaran emisores de señales que generan coordenadas GPS para las bombas inteligentes. Todo lo anterior con el objetivo de localizar y eliminar a los objetivos de alto valor, como se venía desarrollando alrededor del mundo en la guerra contra el terrorismo.

La combinación de fuerzas especiales, inteligencia en tiempo real y bombas inteligentes se tradujo en los mayores golpes a las FARC.

“Estas Operaciones Especiales han integrado de manera muy efectiva las capacidades de las Unidades Especiales (CCOES, BRFER) con las de la Aviación del Ejército, como con la capacidad de la Inteligencia (no solo la del Ejército, sino igualmente la de las demás Fuerzas y de la Policía). Esta integración ha permitido sincronización y sinergia en el desarrollo de las Operaciones Especiales de gran complejidad tanto por el mismo enemigo al que se está atacando, como también por el ambiente operacional en la cual se desarrollan y que requiere de un altísimo nivel de entrenamiento y experiencia”.

“Hasta la fecha, estas Operaciones Especiales – como la Fénix, Jaque, Camaleón, Sodoma, Odiseo, entre otras – se han convertido en golpes de gran importancia estratégica para la Seguridad Nacional en contra de las organizaciones al margen de la Ley, menguando significativamente la capacidad de organización y de acción de las mismas, llevándolas como en el caso de las FARC, a un punto de quiebre que las ha obligado a sentarse en la mesa de diálogo, después de varios fracasos y, especialmente, por pérdida constante de cabecillas del más alto nivel”<sup>213</sup>.

Según un artículo del Washington Post titulado *Covert Action in Colombia*, la inteligencia en tiempo real permitió cazar a los más importantes líderes de las FARC, y un kit guía GPS (de 30.000 dólares cada uno) ha transformado bombas poco precisas en lo que en la jerga militar se conoce como “municiones de precisión guiada” o MGP (precision-guided munitions). Estas bombas, “son capaces de matar a un individuo en la selva de triple

---

<sup>213</sup> Informe 066-CI-00552 Aviación y asalto aéreo del Ejército Nacional. La División de Asalto Aéreo en el conflicto armado interno colombiano. 2019. 38-39.

follaje si se puede determinar su ubicación exacta y se programan las coordenadas geográficas en el pequeño cerebro informático de la bomba”<sup>214</sup>.

El artículo permite comprender que gran parte, por no decir la totalidad, de esta doble asistencia, hace parte de un paquete de ayuda clasificado que se sale de los montos oficiales de Plan Colombia en sus fases 1 y 2. Si bien la inteligencia en tiempo real ha tendido a ser una constante con ayuda de la CIA, tanto antes como durante Plan Colombia,<sup>215</sup> su combinación con las bombas inteligentes es un desarrollo posterior que se comienza a materializar a partir de 2006, tras un requerimiento de Juan Manuel Santos, entonces Ministro de Defensa, a Estados Unidos para poder utilizar la misma tecnología con la cual se había el asesinato del líder de Al-Qaeda en Iraq, Abu Musab al-Zarqawi.

Tras la adaptación del Cessna A-37 Dragonfly para poder cargar y utilizar bombas inteligentes se determinó que la CIA tendría la última palabra para la activación del kit de rastreo de los explosivos, dado que existía la duda de que las Fuerzas Militares utilizaran de manera indiscriminada esta tecnología para atacar “posibles enemigos políticos”.

“Para asegurarse de que los colombianos no harían un mal uso de las bombas, los funcionarios estadounidenses idearon una solución novedosa. La CIA mantendría el control sobre la clave de encriptación insertada en la bomba, que descifra las comunicaciones con los satélites GPS para que puedan ser leídas por los ordenadores de la bomba. La bomba no podría alcanzar su objetivo sin la clave. Los colombianos tendrían que pedir aprobación para algunos objetivos, y si hicieran un mal uso de las bombas, la CIA podría negar la recepción del GPS para futuros usos.”<sup>216</sup>

Esta situación es fundamental, dado que esta cadena de órdenes tiene implicaciones en materia de la injerencia estadounidense en la toma de decisiones relativas al conflicto armado. Las entrevistas recogidas por la Comisión en alguna medida dan cuenta de la

---

<sup>214</sup> Priest, Dana. “Covert action in Colombia. U.S. intelligence, GPS bomb kits help Latin American nation cripple rebel forces”. The Washington Post. Diciembre 21 de 2013. <https://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2013/12/21/covert-action-in-colombia/>

<sup>215</sup> Existen dos directivas que permiten a la CIA dar inteligencia en tiempo real: una de 1980 durante el gobierno de Ronald Reagan para autorizar acciones en contra de los narcotraficantes, y una más reciente que avala el desarrollo de operaciones contra el terrorismo internacional.

<sup>216</sup> Priest, Dana. “Covert action in Colombia”.



constante presencia es miembros del ejército de Estados Unidos en diferentes locaciones militares y policiales. De su involucramiento directo en actividades bélicas es poco lo que se ha recopilado. Sin embargo, a partir del testimonio de un miembro de las Fuerzas Militares se puede afirmar que la presencia de “actores extranjeros” siempre era una posibilidad a lo largo de los procesos de toma de decisiones de operaciones militares.

“ENT: Yo quisiera saber si en ese procedimiento de ese comando, en algún momento hay participación de otros niveles, no sé de pronto otros sectores públicos o de otros países, como de miembros de otros países o asesores, o algo así que también tengan conocimiento, por ejemplo, de esas operaciones.

TEST: Digamos que en el nivel del presidente no podría decirlo porque nunca lo evidencié, digamos del ministro y el presidente. Yo que me acuerde, de pronto, hasta el presidente alguna vez, en alguna operación, y el ministro, pero ellos llegan allá, reciben la información, como les decía, y ellos dan el aval, pero el presidente llega solo, el ministro llega solo, y él entra solo, porque no se deja entrar por el secreto, ni siquiera pues al... no sé si él anda con un secretario privado, el que sea, nadie, solo entra él, el ministro y el presidente. De ahí para abajo, digamos en el comando general y en el comando del Ejército en esas operaciones donde confluye el comandante de la Policía, el comandante del Ejército, el comandante de la Fuerza Aérea de pronto, en esa, en algunas operaciones sí hacen parte miembros de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos porque ellos de alguna u otra forma también apoyan al Ejército o al país con inteligencia técnica, digamos con medios, con los medios y con la capacitación. Por decir algo, para interceptar un cabecilla si se necesita un satélite, pues el ejército americano ayuda a hacer esas gestiones para la interceptación, de los medios podría decirlo, digamos no me consta a mí que yo haya hablado con un miembro de los Estados Unidos y yo diga 'ah sí, yo miré como intercepta...!', no, pero es lo que uno entiende y lo que se maneja. Digamos también en esa parte de cuando se reúnen las agencias de inteligencia, pues también hay unas agencias de inteligencia del gobierno que hacen coordinaciones con agencias extranjeras, pues también ellos aportan y dicen “sí, nosotros tenemos información de ese blanco, sea de narcotráfico, sea de la guerrilla,



lo que sea, que está ubicado en este X sector”, si es verídica la información digamos sí concuerda. Pero sí, sí pueden hacer parte, sobre todo el ejército de los Estados Unidos que es el que más ha estado como comprometido con la lucha antiterrorista, llamémoslo así.”<sup>217</sup>

La utilización de bombas inteligentes y sistemas de laser para bombardear enemigos militares también estuvo acompañada de una constante capacitación por parte de los norteamericanos en cuanto a la utilización de inteligencia humana (tendencia que ya estaba presente desde los periodos de la contrainsurgencia en el marco de la guerra fría). Además de entrenamientos en clave de obtener información con interrogatorios, también se comenzó a utilizar el pago por información y la infiltración de desertores dentro de los campamentos de las FARC, para que ubicaran emisores de señales que generan coordenadas GPS para las bombas inteligentes. Todo lo anterior con el objetivo de localizar y eliminar a los objetivos de alto valor, como se venía desarrollando alrededor del mundo en la guerra contra el terrorismo. De hecho, la CIA cuenta con un manual sobre las “mejores prácticas de contrainsurgencia”, titulado “Cómo hacer de las Operaciones de Objetivos de Alto Valor una Efectiva Herramienta de Contrainsurgencia” y utiliza ejemplos del caso colombiano para mostrar la efectividad de dichas prácticas.<sup>218</sup>

“En Colombia, los exitosos ataques lanzados contra los principales líderes de la insurgencia a principios de 2008, junto con ataques anteriores contra líderes de segundo y tercer nivel y especialistas en finanzas y logística, erosionaron sustancialmente la capacidad de la organización para hacer frente a la crisis”.<sup>219</sup>

Vale la pena, sin embargo, enfatizar que toda la tecnificación de la inteligencia en Colombia no ha ocurrido únicamente por cuenta de la cooperación con Estados Unidos, sino que otros actores también han tenido una injerencia constante, pero con menos resonancia en el debate público.

---

<sup>217</sup> Entrevista 122-PR-00492, Fuerza Pública, operaciones con objetivos del alto valor, inteligencia militar. 2020.

<sup>218</sup> CIA, “Best Practices in Counterinsurgency: Making High-Value Targeting Operations an Effective Counterinsurgency Tool”. Diciembre, 2014. Wikileaks. <http://wikileaks.org/cia-hvt-counterinsurgency>

<sup>219</sup> Ibid.

“Colombia por sus condiciones internas ha tenido la afluencia de muchísimos organismos de inteligencia e investigación del mundo que se acreditan en nuestro país dentro de su sede diplomática. Entonces en Colombia desde muchos años atrás hemos tenido funcionarios dentro de las embajadas que son integrantes de los organismos de inteligencia o de seguridad o de investigación, del gobierno alemán, inglés, español, israelí, francés, sueco, noruego, argentino, brasileño, chileno, mexicano, canadiense y americano [...] hasta Rusia ha tenido acá su cónsul que usualmente es del Servicio de Inteligencia Militar Exterior, o sea es un espía [...] pero está legalmente acreditado como el cónsul.

Desde tiempo atrás todos estos servicios de inteligencia han apoyado a todos los servicios de inteligencia colombianos, tanto a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), como al INPEC, como a las Fuerzas Militares, a la Policía, a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad Nacional de Migración. Todos estos servicios han apoyado a Colombia en materia de información, experiencia, capacitación, tecnología, procedimientos y metodologías, temas académicos, incluyendo Interpol y Europol”<sup>220</sup>.

Un caso de interés es la cooperación brindada por las fuerzas de seguridad e inteligencia británicas que, de la mano de la asistencia estadounidense, ha estado presente en el país desde el siglo XX.

“Sin duda alguna los Estados Unidos han sido los que más protagonismo han tenido en términos de inteligencia a través de todas las agencias federales (DEA, CBP, ICE, Servicio Secreto, CIA, FBI), hasta la USAID. Con todas estas agencias se han generado estrategias de capacitación, intercambio de información, intercambio de experiencia, tecnología, todo orientado a objetivos de alto valor. Es decir, en el marco de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, el compromiso de lucha contra el narcotráfico y lucha contra el terrorismo, hay una cooperación permanente, y unos equipos especiales humanos, técnicos, de información y recursos, que EE. UU por medio de aprobación en el Congreso por cuenta de INL, destina a estas agencias para que apoyen las operaciones y fortalezcan la capacidad institucional, la tecnología y los recursos de las entidades del Estado. Es directa la cooperación en todos los ámbitos. Y lo mismo ocurre con la Dirección Nacional de

---

<sup>220</sup> Entrevista de contraste 311-EC-DI-001, alto mando de la Policía Nacional, 2021.



Inteligencia. Los EE. UU brindaron una ayuda muy importante en materia de capacitación, tecnología, metodología, experiencia, entrenamiento de cara a construir el modelo que nosotros considerábamos que debía ser el mejor modelo de inteligencia de Estado”.

“Lo mismo ocurrió con el Reino Unido. A través del MI6, que es el servicio de inteligencia externo y a través del National Criminal Intelligence Service (NCIS) y de Scotland Yard. Desde 1997 el Reino Unido le ofrece a Colombia un acuerdo de cooperación para fortalecer la capacidad institucional en materia de inteligencia. Eso nace en la Dirección de Inteligencia Policial. Ellos siempre buscaron apoyar a Colombia con la filosofía de fortalecer la gobernabilidad, el estado social de derecho, la capacidad institucional contra el delito y contra la corrupción. Mientras que la cooperación norteamericana estaba mas orientada hacia la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, los cultivos ilícitos, etc. El Reino Unido jugó un papel importante tanto en entrenamiento como capacitación, y hoy hay grupos especializados de esas instituciones americanas y británicas que trabajan de manera integrada con grupos investigativos de nuestro país tanto en investigación criminal como inteligencia.”

Una de las grandes innovaciones que serán introducidas con Plan Colombia desde el plano de la materialidad de la guerra tuvo que ver con la utilización masiva de las compañías privadas de seguridad, que, como se comentó previamente, tenían unos intereses económicos muy fuertes a la hora de ser parte del plan binacional. Compañías privadas de seguridad con especialidades muy distintas se lucrarían del paquete de ayuda. Para el año 2002 había una totalidad de 16 contratos activos con empresas privadas estadounidenses, que sumaba un total de 150.4 millones de dólares.<sup>221</sup>

Las asesorías en materia de seguridad que desarrollaron en el marco de Plan Colombia, reprodujeron las mismas lógicas doctrinales y operacionales de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Como lo sugirió Ed Soyster, el portavoz de una de las compañías y ex director de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos (DIA): “Nos utilizan para llevar a cabo la política exterior estadounidense”, “Ciertamente no determinamos la

---

<sup>221</sup> Isacson, Adam. “The U.S Military in the War on Drugs”. Pp. 43.



política exterior, pero podemos formar parte del gobierno de Estados Unidos que ejecuta su política exterior”.<sup>222</sup>

La centralidad de estas compañías no puede ser menospreciada en cuanto a los aprendizajes que obtuvo Colombia en materia de seguridad, aunque es poco claro poder establecer qué desarrolló el país por cuenta de la asesoría con personal militar estadounidense, en Colombia o en el extranjero, y qué fue adquirido de las enseñanzas de estos soldados corporativos. Sin embargo, se sabe que temas de inteligencia, de aprovisionamiento de equipos de interceptación de comunicaciones y su utilización, de pilotaje de aeronaves y mantenimiento, de planeación de operaciones y de formulación de doctrina, fueron también desarrollados en conjunto con compañías como Lockheed Martin, DynCorp, Military Professional Resources (MPRI) y Northrop Grumman.

#### **2.4. Materialización de la política contraterrorista y antinarcóticos: Plan Patriota**

La estrategia militar del gobierno se consolidó en torno a la conocida Política de Seguridad Democrática” (PSD), la cual estableció como uno de sus principales objetivos la recuperación del control territorial a través del aumento exponencial de la capacidad y presencia de las Fuerzas Militares, territorios que, a su modo de ver, habían sido cooptados por las “organizaciones narcoterroristas”.

Aunque varias de las personas entrevistadas por la Comisión de la Verdad, indicaron que la PSD fue una idea del presidente Uribe, en esta política tuvieron gran influencia de pensadores y estrategias de otros países, algunos europeos, con los que Uribe tuvo reuniones en Berlín y en Oxford<sup>223</sup>. También, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el 7 de septiembre de 2001 (días antes de los atentados del 11 de septiembre) había formulado un documento de discusión en el que planteaba algunas de las necesidades que tenía Colombia, como la de romper con la línea divisoria entre lucha contra las drogas y lucha contrainsurgente<sup>224</sup>. Esto, cuando inicia la guerra contra el terrorismo se vuelve una realidad

---

<sup>222</sup> de la Garza, Paul y David Adam. “Colombia: US Military Aid”.

<sup>223</sup> Entrevista 311-PR-03591, 2021, periodista y exmiembro del cuerpo diplomático en la época en Europa.

<sup>224</sup> Departamento de Defensa de EEUU. DOD20010907.Discussion paper: pipeline as opening wedge. National Security Archive. Doc 17. Carpeta Anexo Plan Colombia.

y en diciembre de 2001, ya se hacían evidentes las necesidades de luchar contra el “terrorismo” que se financiaba del narcotráfico y que hacía voladuras de oleoductos, secuestros (incluso a ciudadanos norteamericanos), impedía la movilidad en las vías principales del país<sup>225</sup>. Así, que planteaban visiones que coincidían con las expuestas en la Política de Seguridad Democrática.

Bajo este planteamiento del conflicto y la seguridad, se declaró el estado de conmoción interior apenas tres días después de la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez, por una duración inicial de 90 días<sup>226</sup>. Bajo la vigencia del estado de conmoción interior se expidieron una serie de normas dirigidas a retomar el orden público del país a través de la vía militar. Entre ellas se firmó el Decreto 2002 el 9 de septiembre de 2002, el cual reguló la figura de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación.

De manera paralela, tomó forma el Plan Patriota, que fue el plan de guerra por medio del cual se materializó la Política de Seguridad Democrática, centrado en doblegar la voluntad de lucha de los grupos insurgentes. Este se desarrolló entre 2002 y 2007 en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare, principalmente; zona conocida como área Omega.

La principal fuerza encargada del desarrollo del Plan sería, precisamente, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, conformada por cerca de 14.500 hombres de las distintas armas de las Fuerzas Militares.<sup>227</sup> El primer éxito que obtuvo el Plan, consistió en desarticular todas las unidades guerrilleras que amenazaban con estrangular Bogotá, mediante la Operación Libertad I<sup>228</sup>. Posteriormente, con la Operación JM, la Fuerza de Tarea Omega fue enviada a la “retaguardia estratégica” de las FARC, que correspondió a los departamentos de Caquetá,

---

<sup>225</sup> Departamento de Estado de los Estados Unidos. DOS-20011207. cable. “Enhancing our counterterrorism strategy for colombia”. National Security Archive. Doc 20. Carpeta Anexo Plan Colombia.

<sup>226</sup> Presidencia de la República. Decreto legislativo 1837 del 11 de agosto de 2002. Diario Oficial Año CXXXVIII. N. 44897. 11 agosto 2002. Página 14.

<sup>227</sup> U.S Embassy, cable. “Colmil: Jtf-O onto a More Aggressive Footing”, diciembre 2006, Wikileaks. [https://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA11488\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA11488_a.html)

<sup>228</sup> A pesar del éxito operacional es importante resaltar que las provincias de Sumapaz y Tequendama durante esa operación reportaron graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, homicidios de civiles, pues esta región tradicionalmente había sido de tradición comunista, por lo que fue estigmatizada. También es necesario advertir que también hubo un componente paramilitar importante en este periodo, lo que incrementó la violencia y la degradación del conflicto entre 2002 y 2003.

Meta, Guaviare y Putumayo, en los cuales la insurgencia había encontrado territorios de refugio frente a las ofensivas estatales<sup>229</sup>.

La Operación Libertad acabó con el objetivo que era Bogotá, y la Operación JM acabó con la retaguardia estratégica. Sin esto, “las FARC se quedó sin plan, sin objetivo, sin retaguardia. Los jefes tuvieron que dispersarse, y así fueron blanco de las fuerzas especiales y las operaciones comando [...] después ya intervinieron los gringos: no sean pendejos, no se maten. Les damos los misiles. Y esto aceleró la situación. No la cambió, porque tarde o temprano, los tipos iban a morir con el batallón de comandos”<sup>230</sup>.

De manera paradójica, ninguna operación de renombre se desarrolló contra las fuerzas paramilitares que desde comienzos de los 2000 habían comenzado su proceso de expansión en distintas partes del territorio nacional. No solo no se les abordó militarmente como se estaba haciendo contra las FARC, sino que tampoco se priorizaron zonas de control paramilitar en las cuales se sabía se desarrollaban diferentes eslabones del negocio del narcotráfico.

La revisión de los archivos desclasificados del NSA permiten evidenciar que sectores diversos de los EEUU tenían como prioridad también a los grupos paramilitares, sin embargo, las actuaciones solo parecen haberse concentrado en temas financieros de las AUC. Así lo deja ver un cable de la embajadora Patterson en septiembre de 2002, en el que afirma que se debe “equipar una unidad de las fuerzas armadas colombianas dedicada a detener a los líderes de organizaciones paramilitares”<sup>231</sup> muy centrado en hacer inteligencia a las finanzas del paramilitarismo. De ahí el rol creciente tanto de la UIAF y la Unidad contra el lavado de la Fiscalía. Pero no se concentraron esfuerzos en combatirlos en el campo de batalla.

Paralelo al desarrollo de las operaciones militares, las fuerzas de seguridad implementaron estrategias cívico-militares, como aquellas aconsejadas en etapas tempranas del conflicto en el marco de la guerra fría, ahora bajo el nombre de “Acción Integral”. La

---

229 Pizarro, Eduardo. *Las Farc*. Pp. 277; Rangel, Alfredo y Pedro Medellín. *Política de Seguridad Democrática*. Grupo Editorial Norma, 2010. Pp. 16.

<sup>230</sup> *Ibid.*, pag. 185.

<sup>231</sup> Embajada en Colombia al Departamento de Estado. Cable “Targeting Terrorist Leaders In Colombia” 20020906DOS-27393. Bogotá, septiembre de 2002, NSA

Armada Nacional intensificó los programas de integración con la población civil y de servicio a las comunidades con jornadas cívico-militares de salud y educación, con la participación en la construcción de obras de servicio común. Por parte del Ejército Nacional se crea El Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI (2005), el cual se constituyó como un espacio de coordinación del nivel nacional para la consolidación de los territorios arrebatados a las FARC.

Esta política contrainsurgente implicó una administración de la legalidad al servicio de los éxitos en materia de seguridad, y en desmedro de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. De manera similar a como había ocurrido en épocas tempranas del conflicto con el desarrollo de Plan Lazo bajo la lógica de destruir a las guerrillas, en el marco de la implementación de Plan Patriota se vieron afectados civiles.

En ese sentido, son de lamentable recordación la configuración de redes civiles de informantes para el apoyo de las Fuerzas Militares; el desarrollo de detenciones masivas y arbitrarias; el auge de violencia ejecutada por grupos paramilitares en colaboración con organismos de seguridad del Estado; la interceptación ilegal de medios de comunicación llevada a cabo por organismos de inteligencia en contra de opositores políticos, periodistas, magistrados de las altas cortes y defensores de Derechos Humanos; y el desarrollo masivo de ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles para presentarlos como bajas en combate<sup>232</sup>.

El proceso de “consolidación territorial”, que propugnaba la seguridad democrática y que transitó paralelo a las operaciones militares propiamente dichas contra las FARC, inició a partir del establecimiento de dos zonas de rehabilitación y consolidación en municipios de Arauca y la región de Montes de María (departamentos de Bolívar y Sucre) mediante el decreto 2929 de 2002. En estas zonas hubo un despliegue de operaciones militares indiscriminadas, a las cuales se les sumó un conjunto de restricciones y de normas avocadas

---

<sup>232</sup> Ver caso “la política de los falsos positivos: ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combates simulados” y “Una historia y un señalamiento: detenciones masivas y arbitrarias en Colombia entre 2002 y 2008” en la plataforma transmedia de la Comisión

al control social, justificadas todas ellas por la presencia de grupos armados ilegales y por la supuesta connivencia y apoyo de la población civil a dicho agente armado.

La estigmatización como estrategia se usó para señalar y perseguir a los habitantes de diferentes regiones del país, especialmente, aquellas que se caracterizaban por un histórico control de la guerrilla, asumiendo que sus pobladores tendrían una relación directa y de afinidad con la subversión, como contó un líder campesino del Huila:

“tal fue la presión de nosotros salirnos o irnos, porque un momento a nosotros nos tocó desplazarnos, irnos, pero no tanto fue por la presencia de la guerrilla, no, sino por el mismo Estado. Porque el Estado, donde uno se lo encontrara: “¿de dónde viene usted?”. Se lo encontraban. “No. Vengo de tal parte”. De una vez lo recatiaban a usted, mejor dicho. Porque usted con decir que era de tal parte usted automáticamente: objetivo militar para ellos. Sí, o sea, automáticamente el decir uno de dónde era. Y en ese entonces, por ejemplo, habíamos muchos muchachos. Y claro, pues por verlo uno joven de edad, de 14, 12 años, entonces eso... Fueron muy arbitrario el Ejército con uno porque de una vez le decían, “es miliciano, es guerrillero, es esto, es aquello”, ¿sí?”<sup>233</sup>

Esta lógica del enemigo interno implicó igualmente que se generaran planes sistemáticos de montajes y procesos judiciales contra los campesinos, líderes sociales y comunidades, de forma más general. Esta estrategia tuvo dos objetivos. Por una parte, desprestigiar los liderazgos locales y, segundo, aislar estos liderazgos de los procesos organizativos de protección de los territorios y la protección de las comunidades. Igualmente, implicó acciones militares directamente contra sindicatos y organizaciones sociales y comunitarias bajo la consigna de luchar contra el terrorismo.

En gran medida la estigmatización de los grupos poblacionales estuvo de la mano de una de las estrategias de la contrainsurgencia que fue la guerra psicológica, también ya utilizada desde los albores del conflicto por cuenta de las enseñanzas estadounidense. El complemento lógico de este proceso de estigmatización y persecución es la deshumanización a la cual se vieron sometidas las comunidades rurales a los ojos de la opinión pública y dentro de las mismas Fuerzas Militares. Así, por ejemplo, se generaron campañas masivas para hacer ver

---

<sup>233</sup> 187-VI-00027. Hombre, Presidente de Junta de Acción Comunal, Huila.



a las guerrillas como “dinosaurios en vía de extinción” o como los culpables del “atraso territorial”, lo cual generaba confusión en los liderazgos comunitarios. Igualmente, se generaron propagandas que desconocían la agencia de las mujeres que habían decidido entrar a las filas de las guerrillas, proyectando estereotipos de feminidad, como el ingreso obligatorio y la esclavitud sexual: “No es lo mismo ver que una familia se sienta orgullosa porque su hija o familiar se fue para la guerrilla a empuñar las armas por la liberación nacional como rebelde, a decir es que se fue para que me la prostituyan allá o me la utilicen”<sup>234</sup>.

En el marco de Plan Patriota, donde las operaciones Libertad I y II y JM, estarían dirigidas exclusivamente contra las guerrillas y sobretodo contra las FARC. Ese aval tácito del paramilitarismo y la no priorización de los territorios controlados por este actor en el marco del Plan Colombia, ponía de presente, de una manera muy clara, que esta estrategia era contrainsurgente y pretendía además defender los intereses de las grandes multinacionales petroleras en territorio colombiano, tanto en el norte como en el sur del país, como ya había quedado claro con la aprobación de los recursos extra para la implementación de la Estrategia de Seguridad de Infraestructura 2003-2004.

Por otra parte, la lógica del enemigo interno bajo la que se estructuró Plan Patriota entraría en conjunción con la necesidad de generar resultados operacionales. Tras los golpes iniciales sufridos por las FARC con la operación Libertad I y II, y la ofensiva permanente en su retaguardia estratégica, la insurgencia se replegó y adoptó nuevamente una estrategia de guerra de guerrillas que generaría un estancamiento en los planes militares del Estado colombiano. Esto creó una enorme contradicción ya que por una parte se tenían que producir bajas para mostrar éxitos en materia de seguridad, pero estas cada vez eran más escasas de obtener por medio del combate ante una guerrilla que se replegaba estratégicamente. La salida obvia fue fabricar la victoria por medio del asesinato de civiles y su legalización como bajas en combate.

---

<sup>234</sup> Informe 365-CI-01177. Corporación viva la ciudadanía. “Allá la vida nos pertenecía...aquí nos tenemos que defender solas”, 2021.137

“El sentido bélico de los planes implementados por el Estado colombiano para justificarse en la lucha contra el terrorismo, donde no hay cabida para la aplicación entre combatiente y población civil, pues las necesidades operativas de las acciones exigen resultados concretos para justificar la excesiva presencia militar en la zona”.<sup>235</sup>

La necesidad de presentar resultados en materia de destrucción física de los “terroristas” fue urgente para cumplir las promesas de campaña y para responder a la gran inversión de recursos destinados a las Fuerzas Militares desde el Plan Colombia y a través del presupuesto nacional. Así lo leyeron los integrantes del Ejército: “Con tanto dinero del Plan Colombia, ¿cómo se justifica que el Ejército no tiene resultados?”<sup>236</sup> y de la misma forma lo reforzó el recién elegido presidente en su primer discurso dirigido a la fuerza pública en agosto de 2002: “nuestros compatriotas han aceptado, con una voluntad sin antecedentes, pagar un impuesto de un punto del Producto Interno Bruto, 2 billones de pesos, aproximadamente, para apoyar a la Fuerza Pública. Ahora, corresponde a ustedes soldados y policías de mi patria, trabajar para dar resultados”<sup>237</sup>.

Como explica un soldado que hoy comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz la presión por resultados, entre otras factores, fue determinante en la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales:

“yo considero que eso se puso feo cuando se acabaron estos milicianos, porque es que llegó el punto en que esto era como una bolsa de mercado y se acabaron y ya, no hay milicianos, no hay quien señale milicianos: “traiga a ese guía, ¿esos que están ahí son milicianos?”, “no, ninguno”, estoy hablando de la comuna 13, allá en Medellín: “vámonos para otro sector, Belén, ¿alguno de estos?”, “no, ninguno”, entonces se nos escaseó el producto de milicianos, entonces ahí fue donde se empezaron a ver las graves violaciones de derechos humanos, porque traían gamines, traían gente que no tenía nada que ver con la

---

<sup>235</sup> *Ibid.* Pp. 184

<sup>236</sup> Entrevista 084-PR-02990. Actor armado, militar compareciente, teniente coronel.

<sup>237</sup> Presidencia de la República. Reconocimiento de las Fuerzas Armadas. Agosto 15 de 2002. Archivo general. Discursos 2002 - 2005. Recuperado en: [http://historico.presidencia.gov.co/prensa\\_new/discursos/archivogen.htm](http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/discursos/archivogen.htm)

guerra, traían gente que no tenía nada que ver con el sector, los llevaban allá y se empezaron a asesinar y se presentaron como muertos en combate.<sup>238</sup>

La presión para dar resultados operacionales también provino, de manera importante, desde Estados Unidos. En el marco de los desarrollos militares de Plan Patriota, los comunicados internos entre la embajada de Estados Unidos y el Departamento de Defensa de ese país evidenciaban lo positivo de estarle generando bajas a las FARC, así como fomentando deserciones y produciendo capturas. Desde Washington, al igual que en Colombia, se leía el éxito frente al conflicto en términos estrictamente operacionales, bajo la lógica del *bodycounting*, lo que por supuesto habría de generar incentivos perversos en el sentido de favorecer una mentalidad orientada hacia la generación de bajas y eliminación física del enemigo como indicador de estar ganando la guerra.<sup>239</sup>

## **2.5. Privatización de la seguridad: otra estrategia de la lucha contrainsurgente.**

### **Mercenarios y contratistas**

El final de la guerra fría trajo consigo un aumento en los conflictos intra-estatales, o mejor, una mayor visibilización de estos fenómenos. En diversas regiones del mundo se comenzaron a presentar dinámicas violentas en los que los actores principales no eran los Estados, sino grupos al interior de una misma comunidad política enfrentados entre sí o contra los gobiernos de turno.

Ante estos complejos escenarios, las soluciones armadas comenzaron a complejizarse en la misma medida, haciendo uso de diversos “mecanismos” en función no sólo de minimizar las bajas en combate, sino también los costos políticos y económicos asociados a las tradicionales ayudas militares típicas de la guerra fría. Dentro de este repertorio, las estrategias de guerra no convencional que comenzaron a desarrollarse desde el bloque occidental, se contempló el uso de drones, bombardeos “quirúrgicos”, construcción de capacidades locales para enfrentar los fenómenos de seguridad, uso de fuerzas especiales, y, por supuesto, el uso de mercenarios y compañías privadas de seguridad. Este tipo de

---

<sup>238</sup> Entrevista 084-PR-00332. Hombre, soldado, compareciente ante la JEP.

<sup>239</sup> US DoS. 20031107 “Letter from Powell to Rumsfeld”. 7 de noviembre de 2003. The National Security Archive, Washington, Documento No. 42 Carpeta Anexo Plan Colombia.

aproximaciones coincide con lo que algunos expertos de seguridad han denominado como “Huella Ligera”, una forma de operar que:

“En lugar de desarrollar procesos de construcción de Estado por medio del despliegue masivo de tropas, opta por una combinación de poder aéreo, operadores especiales, agentes de inteligencia, grupos armados autóctonos y contratistas, a menudo aprovechando las relaciones con los aliados y permitiendo que las Fuerzas Militares de los socios asuman un papel más activo. Las tácticas específicas de estas operaciones pueden variar, pero la filosofía que las riges es clara: enviar decenas o cientos de personas en lugar de miles. Ser paciente y trabajar discretamente dentro de las limitaciones del ecosistema político y social existente. Ayudar a otros a ayudarse a sí mismos en lugar de hacer el trabajo en solitario. Pero cuando sea necesario, actuar unilateralmente con una precisión letal y quirúrgica.”<sup>240</sup>

Para el caso colombiano, el uso de mercenarios, pero de forma más concreta de compañías militares de seguridad, es de particular relevancia con respecto al tipo de injerencia que se ha desarrollado por parte de Estados Unidos, y de manera más acentuada a partir de Plan Colombia. El uso de estas compañías para el cumplimiento de objetivos en materia de seguridad no ocurre en un vacío doctrinal, sino que hace parte de uno de los componentes centrales de la aproximación de “huella ligera”, específicamente su carácter “indirecto”. A raíz de las experiencias de El Salvador y Vietnam, al interior de las élites políticas y militares de Estados Unidos se comenzó a ver la importancia de actuar de manera indirecta no sólo a través de los actores locales, sino también por medio de contratistas. Dada la importancia de evitar tener “*boots on the ground*” por los costos políticos y económicos que esto genera, actuar *con* y *a través* de fuerzas locales y privadas se convierte en la única manera de poder alcanzar los objetivos en materia de seguridad, cualesquiera que estos sean.

Esta privatización de la seguridad en Colombia ha sido más generalizada en el marco de la “lucha contra las drogas”, tal como lo veremos en el siguiente apartado. Sin embargo, ya desde la guerra fría, el uso de mercenarios era una práctica y es donde empezamos a ver el rol que tuvieron en la degradación del conflicto de nuestro país. Estos mercenarios, o también

---

<sup>240</sup> Luján, Fernando. “Light footprints”. Pp. 7.

llamados “soldados de fortuna”, llegaron al Colombia desde diferentes países, pero especialmente de Inglaterra, Israel y Estados Unidos.

Cuando en Colombia se habla de mercenarios, el referente siempre será Yair Klein<sup>241</sup>, el israelí que entrenó a varios paramilitares asociados al narcotráfico en Puerto Boyacá (Magdalena Medio), la autodenominada “capital antisubversiva de Colombia”. Su participación en el conflicto colombiano es recordada por el resultado de sus entrenamientos, pues sus alumnos cometieron crímenes que aún hoy duelen en nuestro país, como los asesinatos de Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo.<sup>242</sup> Pero la realidad es más compleja y reducir el problema a Klein es un error histórico que nos ha impedido ver la verdadera dimensión del fenómeno y, en consecuencia, continuamos facilitando la llegada si no de mercenarios, sí de Compañías Militares de Seguridad Privadas (CMSP), sin ningún tipo de control.

En la segunda mitad de los ochenta, llegaron al menos tres grupos de mercenarios a entrenar paramilitares en diferentes partes del país. Algunos incluso venían para realizar acciones armadas y no sólo de entrenamiento. Adicionalmente, su llegada hace evidente la coincidencia de actores que, en principio, se supondrían antagonistas, pero que terminaron uniéndose de manera pragmática para combatir un mismo enemigo: el comunismo. La consecuencia de esto fue el aumento sistemático de violaciones de derechos humanos de los ciudadanos colombianos que pensaban distinto. Como afirma un mercenario inglés que lideró uno de los grupos, “los combatientes que entrenamos eran perfectamente expertos en asesinato. Si de algo fuimos culpables fue de haberlos vuelto eficientes”<sup>243</sup>.

La historia también es más compleja porque esta problemática no se limitó a los ochenta, sino que la privatización de la seguridad en Colombia, en manos de actores extranjeros, continuó y, de hecho, se profundizó, ya no con los pequeños grupos de mercenarios, sino con la presencia de grandes corporaciones especializadas en el ámbito de la seguridad. Estas compañías llegaron al país por cuenta de los arreglos de cooperación que se daban con

---

<sup>241</sup> Exmilitar israelita, que en los años ochenta inició con algunos colegas de la milicia su compañía militar de seguridad privada, su compañía de mercenarios.

<sup>242</sup> Aunque en general sembraron el terror por todo el territorio nacional a través de masacres y sicariato.

<sup>243</sup> Ronderos, María Teresa. *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Aguilar. 2014. Pp. 272.



Estados Unidos en el marco de la lucha contra las drogas y por parte de multinacionales petroleras que tenían negocios en el país.

A continuación, se revisarán tres momentos de la historia del conflicto donde se evidenció la presencia de estos actores, tanto en su modalidad de mercenarios, como bajo las estructuras de las compañías privadas. El primero se desarrolla a partir de la llegada de mercenarios contratados por paramilitares financiados por el narcotráfico, con la aprobación de una parte importante del Estado (fundamentalmente del Ejército), en el marco del periodo de la guerra sucia. El segundo, patrocinado por las multinacionales petroleras, que se desarrolla durante el periodo que la Comisión de la Verdad ha denominado el “Desmadre”. Finalmente, el tercero, enmarcado en la lucha contra las drogas, pero que evidentemente atraviesa la lucha contrainsurgente, y que se viene presentado desde el periodo “De la guerra total a la paz incompleta”. El involucramiento de estos actores en el marco del conflicto ha sido justificado bajo la idea de resolver la violencia y la depredación guerrillera. Sin embargo, en todos los casos, han tenido un impacto sobre la degradación del conflicto y se han convertido en un factor de persistencia.

La relevancia del tema lo constituye precisamente el hecho de que poco se ha hablado de este en el marco del conflicto armado colombiano. Otras preocupaciones han centrado la atención, y han permitido que este importante fenómeno pase de agache, sin generar cuestionamientos serios frente a su impacto en el desarrollo del conflicto armado. ¿Qué implicaciones ha tenido la presencia de estos contratistas de seguridad militar en el conflicto armado interno? ¿En qué momento comenzó su presencia? ¿Cómo llegaron al país? ¿Existen otros actores del sistema internacional que permitieron o apoyaron su ingreso a Colombia? ¿Qué impacto ha tenido esta dinámica en la intensificación y persistencia del conflicto? ¿Existe un monitoreo y control estricto por parte de las instituciones colombianas responsables del ingreso de este personal? ¿Cuál es el estatus legal de estos hombres y mujeres pertenecientes a estas compañías? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen para poder identificar las responsabilidades internacionales, directas o indirectas, en el conflicto armado colombiano; así como para comprender los contextos internacionales que explican el origen del conflicto y los factores de persistencia de este.



A partir del trabajo de archivo realizado en la Cancillería, dentro de la Coordinación de Protocolos e Inmidades, dos elementos relacionados con el tema de contratistas llaman la atención. Por un parte, quedan dudas sobre el número real de contratistas privados, ligados con temas de seguridad, que han ingresado al país a lo largo del desarrollo del conflicto armado. En ese mismo sentido, además de no saber a ciencia cierta cuántas personas vinculadas a compañías privadas de seguridad ingresaron al país, se desconocen también cuáles son las compañías que han estado involucradas. Gran parte de la información que se desarrollan los apartados siguientes fue posible sólo a través de documentación secundaria, por informes ante el Congreso de Estados Unidos y por cables desclasificados del NSA. La Cancillería carece de una sistematización adecuada sobre cuántos y cuáles fueron los contratistas privados que, beneficiándose de los dineros de Plan Colombia, ingresaron al país.

Dentro de los archivos revisados fue posible encontrar la presencia de compañías privadas vinculadas con la seguridad como DynCorp, Lockheed Martin, United States Investigative Services (USIS), Diplomatic Freight Services y EIC, pero se sabe, por fuentes secundarias, que ha habido otras que no pudieron ser rastreados a partir de la información disponible en Cancillería. Según comentó un funcionario de la Coordinación, existen convenios que quedan bajo el dominio del Ministerio de Defensa y lo mismo ocurre con el personal extranjero que ingresa. Otra explicación puede ser que, dado que los contratos de estas compañías son administrados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y no por ninguna entidad colombiana, es posible que no existan registros de su contratación. Sin embargo, la Cancillería y la Coordinación de Protocolos e Inmidades, en principio, tienen la función de registrar quién entra al país, cuándo lo hace y en el marco de qué lo hace.

Pero tal vez lo más preocupante, y que va de manera transversal a los distintos momentos que se identificaron de presencia de mercenarios y compañías privadas de seguridad, es el hecho de que no hay claridad sobre qué vinieron a hacer a Colombia. De manera concreta, con relación a la última oleada de contratistas en el marco de Plan Colombia, a partir de la información que recoge la Coordinación de Protocolos e Inmidades cuáles fueron las funciones que vinieron a desarrollar estos contratistas privados.

La documentación almacenada no da cuenta clara sobre sus responsabilidades y

funciones. Las diferentes carpetas no cuentan con un grupo mínimo de documentos. Por ejemplo, no todas cuentan con la carta de presentación de la Embajada de EE. UU, en la que se estipula el cargo que vino a ocupar la persona. Incluso, en el listado revisado, existen 30 carpetas que sólo cuentan con 1 folio donde escasamente se lee la información personal del contratista, y 538 carpetas que cuentan con entre 2 y 5 folios, mientras que otras tantas cuentan con hasta 188 folios. En ese sentido, la información recogida y archivada es completamente desbalanceada y no permite entender el sentido de las funciones y responsabilidades de estos contratistas en el país. Los datos no permiten mapear dónde operaron dichos contratistas, por cuánto tiempo estuvieron en el país y, en muchos casos, incluso no se sabe cuándo salieron o si lo hicieron.

Finalmente, muchos “asesores”, tanto de las misiones militares de Estados Unidos como contratistas, están catalogados bajo el rótulo de “asesores técnicos”, sin especificar qué tipo de funciones van a desarrollar en el marco de su actividad en Colombia. Esto es preocupante teniendo en cuenta que se trataron de funciones relacionadas con la seguridad y, en consecuencia, con el desarrollo del conflicto armado.<sup>244</sup>

Estas inquietudes y vacíos es lo que justifica la necesidad de revisar el fenómeno de la privatización de la seguridad en el marco del conflicto colombiano, pues como se ha tratado de enfatizar, y como se evidenciará más adelante, dicha privatización no ocurrió únicamente por cuenta del paramilitarismo. Por el contrario, este fenómeno ha sido una practica bastante generalizada en el marco de la guerra, y que, bajo las grandes atrocidades ocurridas dentro de esta, ha quedado completamente opacado. Es fundamental que la CEV pueda desarrollar recomendaciones de cara al mejor manejo de este asunto, pues es necesario generar un debate realmente público frente al tema de la seguridad que permita generar las condiciones para la no repetición. Desconocer estas prácticas y a estos actores, da pie para que se siga jugando con la carta de la seguridad nacional, con la cual se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el país.

---

<sup>244</sup> Un caso particular es ilustrativo: Mark Cooper, quien estuvo en el país entre 2000 y 2009, aparece etiquetado como Funcionario Técnico en una carta de traducción oficial. Sin embargo, en la versión original de la carta en inglés, el título de esta persona es Aviation Advisor. Esto hace que se deba cuestionar si otros asesores técnicos fueron asesores militares.

### **2.5.1. Los primeros mercenarios en el marco de la doctrina contrainsurgente en el periodo de la Guerra Sucia y el fracaso de la paz**

El periodo de la Guerra Sucia (1978- 1991) en Colombia, coincide con el gobierno de Reagan en los Estados Unidos, lo que significó un endurecimiento y “calentamiento” de la Guerra Fría, especialmente en las Américas. En el caso colombiano, las fuentes secundarias evidencian que EE. UU. estaban concentrados en la primera fase de la lucha contra las drogas, iniciando con la narcotización de las relaciones con Colombia. Así, durante los primeros cinco años de los ochenta, la asistencia militar de los EE. UU. a Colombia estará dirigida a la Policía, que era la institución encargada de la lucha contra las drogas.

Esto permite sugerir que EE. UU. fue ajeno a lo que pasaba con la llegada de los primeros mercenarios al país. Hubiera sido contradictorio que mientras se luchaba junto con la Policía contra el narcotráfico, se apoyara la llegada de mercenarios para que entrenaran paramilitares que servirían, entre otras cosas, como sicarios de los narcotraficantes, tanto del Cartel de Medellín como de Cali. Pero entonces ¿por qué ningún militar pagó condena por estos hechos?, ¿Tenían demasiado poder los militares o fue mera corrupción? ¿Una agencia como la CIA, que había tenido autorización plena del presidente Reagan de apoyar los Contras en Nicaragua, con entrenamiento y accionar mercenario, decidió hacer lo mismo en Colombia y por eso el Ejército colombiano se sentía respaldado?

Dada la ausencia de evidencia contundente, las respuestas pueden llevar a elementos conspirativos, por lo que es necesario centrarse en lo comprobable que, a su vez, puede arrojar luces para responder estos interrogantes. Se conoce que en este periodo entraron al país tres grupos de mercenarios. Dos de ellos estuvieron liderados por exmilitares israelitas. El primero por Yair Klein y el segundo por Leo Gleser.<sup>245</sup> Un tercer grupo, estuvo liderado por militares ingleses, pero conformado por personal con diferentes nacionalidades. Este grupo entrenó a los nacientes paramilitares en uso de explosivos y operó, inicialmente, para el Cartel de Medellín, y luego para el de Cali. En un primer momento, el objetivo era atacar

---

<sup>245</sup> De este poco se sabe, es necesario concentrar esfuerzos en encontrar información respecto a este personaje y su grupo.

a las FARC en Casa Verde y, después, asesinar a Pablo Escobar. Ninguna se concretó de manera exitosa.

Estos grupos fueron contactados con las altas esferas de la dirección del ejército y del DAS, a través de empresarios israelitas con negocios en Colombia y de algunos miembros de la comunidad judía que tenían conexiones con militares colombianos. Sin embargo, aún es escasa esta información de los empresarios.

Existe la posibilidad de que existiera un tercer grupo de mercenarios israelitas en territorio colombiano durante la época, pero los casos de Klein, Gleser y Tomkins han opacado su presencia ¿fueron los otros chivos expiatorios para desviar la atención y no evidenciar otros fenómenos? El nombre de Rafi Eitan y la empresa de seguridad KPI también han sido recientemente visibilizadas, y coinciden temporalmente con la presencia de los demás mercenarios. Hasta el momento, y como es similar para los otros casos, el objetivo concreto de su presencia en el país no se ha podido esclarecer de manera contundente. Sin embargo, las investigaciones sugieren las hipótesis que Eitan estuvo en el país coordinando la seguridad del presidente Virgilio Barco, pero también que pudo haber estado coordinando acciones contra la insurgencia y contra la Unión Patriótica. La presencia del mercenario y la firma de seguridad coinciden con el aumento de asesinatos de los militantes de la UP en 1987<sup>246</sup>.

Si bien, como se mencionó, no hay evidencias sólidas para decir que el gobierno de Reagan autorizara a la CIA para que apoyara el entrenamiento de paramilitares con mercenarios, como sí lo hizo en Centroamérica, sí existe un antecedente que indica que 15 años atrás habían aprobado hacer esto. Las recomendaciones de Yarborough de 1962 dieron pie para que el gobierno colombiano realizara una normativa que permitiera la creación de grupos paramilitares y su acompañamiento por parte de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el desarrollo e implementación de estas recomendaciones se consolidarían e institucionalizarían en el Ejército en el período de la “guerra sucia”, como lo evidencian los manuales de la época. Esto pudo ser la reacción a dos procesos importantes que se vivían en

---

<sup>246</sup> Donadio, Alberto. Virgilio Barco y el exterminio de la UP. *Los Danieles*. Enero 10 de 2021. [https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/?utm\\_source=twitter&utm\\_medium=social-media&utm\\_campaign=addtoany](https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany)

el país: la consolidación de la protesta social a finales de los años setenta con el paro cívico, y las constantes iniciativas de paz que se desarrollaron en los ochenta. Estos se convertirían en los temores más grandes del anticomunismo y la lucha anti-insurgente<sup>247</sup> y, por eso, activaron las recomendaciones de Yarborough.

Sumado a esto, los aprendizajes en la Escuelas de las Américas donde varios de los militares de la época se habían formado, se adelanta la idea de crear escuelas de formación de paramilitares en diferentes partes del país. La entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad coincide con lo contado por varios exparamilitares en el proceso de Justicia y Paz, en particular, sobre el rol desempeñado por el general fallecido Farouk Yanine Díaz<sup>248</sup> De acuerdo con el testimonio de un guerrillero desmovilizado que hizo parte en la escuela de entrenamiento 050 y paso a ser paramilitar, el general Yanine Díaz<sup>249</sup> venía trabajando en la formación contrainsurgente a través de la creación de escuelas en varios batallones.

“El general [Yanine Díaz], decía que él era un convencido que para poder acabar la guerrilla en este país se necesitaba otra guerrilla, pero con diferentes ideales y que yo, en ese entonces, era una persona muy importante para ellos porque ellos necesitaban de que yo les colaborara prácticamente en la organización de esa guerrilla para poder combatir a la otra guerrilla con diferentes ideales porque él decía que él necesitaba organizar la gente que hiciera lo que ellos legalmente, constitucionalmente no podían hacer”.<sup>250</sup>

“[A] medida que fueron avanzando las cosas y que fue llegando gente de todas partes, ya se necesitaba como más categoría. Y qué más superación que contratar unos instructores militares los principales guerreros del mundo, los israelitas. Posteriormente, llegaron los ingleses, que llegaron a Puerto Boyacá, pero luego se fueron y entrenaron en el Putumayo, en el Azul, en La Hormiga, allá los llevaron. Sobre el río Putumayo, allá ellos hacían los entrenamientos. Inclusive hasta helicoportados también, helicópteros que les había donado

---

<sup>247</sup> Temas desarrollados por los núcleos de Estado y Democracia, a partir de la mesa de Enemigo.

<sup>248</sup> Informe 748-CI-00658 Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch et al. Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. 2020.

<sup>249</sup> El general Yanine Díaz, siendo Capitán, en 1969 participó en la Escuela de las Américas junto con otros capitanes colombianos en un curso llamado “Maint Orient”, según información de SOAW. Graduados de SOA. Listados de Graduados en la Escuela de las Américas. Datos Oficiales de SOA/WHINSEC. 2018. <https://soaw.org/graduados-de-soa>

<sup>250</sup> Entrevista 240-AA-00001, Guerrilla, grupo paramilitar. 2020.

El Mexicano [Gonzalo Rodríguez Gacha, narcotraficante de Cartel de Medellín]”.<sup>251</sup>

Por otra parte, al menos dos reportes de la Embajada de EE. UU. en Bogotá señalan que habría más mercenarios y de más nacionalidades:

[E]l informe del DAS sobre los paramilitares en el Magdalena Medio, reporta que en la región hay cuatro escuelas de sicarios. Los aprendices ocasionalmente usan uniforme azul oscuro, que es igual al que usan algunos agentes y guardias de las prisiones. Israelitas, alemanes del oeste, y estadounidenses<sup>252</sup> han sido vistos en las escuelas.<sup>253</sup>

### **2.5.2. Petroleras, Compañías Militares de Seguridad Privada y violaciones de derechos humanos, durante el Desmadre**

En Colombia el interés nacional se ha construido en torno al desarrollo económico, en el que se privilegia la inversión extranjera y el comercio exterior, siendo central el tema minero energético, especialmente el petrolero<sup>254</sup>. Esta situación ha llevado a lo largo de la historia colombiana del siglo XX y XXI, a que las élites colombianas privilegien los intereses de las multinacionales sobre el bienestar de los ciudadanos colombianos, que muchas veces se han visto afectados por las actuaciones de las empresas, las cuales además cuentan con el apoyo y poder de sus Estados de origen.

En el periodo de 1991 al 2000, las empresas petroleras se vieron afectadas por el accionar de las guerrillas, que las extorsionaban, atentaban contra su infraestructura (voladuras de

---

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> Otro cable advierte que según un anónimo a un medio de comunicación en las escuelas participaron “unos 15 mercenarios ingleses, irlandeses, alemanes, peruanos y libios”. U.S. Embassy Colombia cable. “Reports of Mercenary Presence Continue but Remain Unconfirmed”. 262336z. 1998. National Security Archive, Washington.

<sup>253</sup> U.S. Embassy Colombia cable. “GOC Claims to have Dismantled 17 paramilitary groups in past year”. 16443. 1988. National Security Archive, Washington.

<sup>254</sup> En 1905, el gobierno de Rafael Reyes promulgara el decreto 34 que facultaba al presidente para otorgar concesiones, es decir para privatizar la extracción de petróleo. Esto se trató de reversar en 1919 y nacionalizar; sin embargo, la Suprema Corte lo declara inconstitucional, luego de que las empresas petroleras estadounidenses presionaran para que el gobierno y el congreso de los Estados Unidos se pronunciara contra la nacionalización, y amenazara al estado colombiano con la no ratificación del tratado Urrutia Thompson, el cual se había firmado en 1914 para indemnizar a Colombia luego de la pérdida de Panamá.

oleoductos y torres de energía) y secuestraban a sus funcionarios<sup>255</sup>. En este escenario, la *British Petroleum* (BP), que había hecho un importante descubrimiento entre 1988 y 1990 en Cusiana<sup>256</sup>, decidió solicitar al Estado apoyo para garantizar su seguridad. Así, inició acuerdos de protección con el Ministerio de Defensa, dentro de los cuales se encuentra la creación, en 1991, de la Brigada XVI para la protección de sus instalaciones y un contrato con la Policía Nacional de Colombia.<sup>257</sup>

Aunado a ello, la BP contrató a la compañía *Defense Systems Limited* (DSL),<sup>258</sup> la cual creó la subsidiaria *Defense Systems Colombia* (DSC) para cuidar las operaciones de la multinacional petrolera. DSC estaba conformada por soldados del Servicio Especial Aéreo británico (SAS, por sus siglas en inglés) y estuvo encargada de la defensa del “tubo” durante la segunda mitad de los noventa. Igualmente, a través de esta compañía se le dio entrenamiento letal y en métodos de protección del oleoducto a alrededor de 540 miembros de la policía colombiana. También se ha investigado la facilitación de armamento a los oficiales de la institución y de dar información sobre los trabajadores y campesinos que no estaban de acuerdo con el proyecto extractivo.<sup>259</sup>

Una situación similar ocurrió con OCENSA,<sup>260</sup> que contrató a *Defense Systems Colombia* para la protección de los oleoductos. En este caso, a la compañía se le acusa de

---

<sup>255</sup> En el Casanare, en un contexto de auge económico en el departamento, el cual tiene presencia de grupos de paramilitares provenientes de la zona esmeraldera de Boyacá, FARC, ELN y por la fuerza pública.

<sup>256</sup> En 1988, la BP descubre un yacimiento de gas e el pozo Cusiana 1; en 1990, se perfora el pozo Cusiana 2, descubriendo una gran reserva de petróleo y gas en el piedemonte llanero, a este pozo se le denominó Cusiana. En 1993, descubren otro gran yacimiento al que llamaron Cupiagua. Aguilar G., Orlando, Galeano, Carmen y Pérez B., Leonel. *Petróleo y Desarrollo*. Fondo FEN. 1998.

<sup>257</sup> Este grupo contenía alrededor de 3.000 soldados. En 1996, se realizó otro acuerdo con el Ministerio para aumentar el número de personal en el batallón (Yopal), esto incluía 150 oficiales y 500 soldados, el valor del contrato se encontraba entre \$54 y 60 millones de libras anuales, la duración es de tres años. Con la Policía se encargaron de patrullar el perímetro de sus instalaciones, este acuerdo tuvo un valor de £3 millones anuales. Berder, Sharon. *Environmentalists Help Manage Corporate Reputation: Changing Perceptions not Behaviour*. *Ecopolitics: Thought and Action*, 1(4), 60-72. 2002.

<sup>258</sup> Esta compañía fue creada por militares retirados británicos. Luego, esta empresa fue comprada por la estadounidense Armor Holdings.

<sup>259</sup> Diferentes organizaciones sociales se vieron afectadas, algunas de ellas son: Asociación Comunitaria para el Desarrollo Agroindustrial y Social de El Morro (ACDAINSO), Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Casanare (ANUC), Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare (ADUC), Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Casanare (AMUC), CORPORINOQUÍA y las Juntas de Acción Comunal (JAC).

<sup>260</sup> Consorcio de empresas Petroleras de las que BP tenía parte importante. Este oleoducto va desde Cusiana, en el Casanare, hasta su salida a puerto en Sucre.

haber comprado material militar para la Brigada XIV en Puerto Berrío (Antioquia), Brigada que tenía un fuerte historial de violaciones de derechos humanos y nexos con paramilitares. Aunado a ello, en 1996, la empresa *Silver Shadow*<sup>261</sup> se acerca a OCENSA y propone el *Turn Key Project*, que incluía la protección de la zona norte del oleoducto con helicópteros de ataque blindados, suministro directo de armamento especial, munición antiguerrilla y drones, entre otro material bélico.<sup>262</sup> Finalmente, se ha responsabilizado a OCENSA de contratar seminarios en inteligencia, interrogación y guerra psicológica para su personal y de transmitir información a los militares colombianos, a través de sus redes de inteligencia.

El accionar de BP en Casanare y de OCENSA, terminó por lesionar el tejido social, así como debilitar su capacidad organizativa para reclamar a la multinacional. Producto de ello, y de las constantes acusaciones a la empresa en Inglaterra y Europa, la compañía cambió de estrategia. En Casanare, decidió mejorar la relación con la comunidad a través de la Fundación Amanecer que, según el documento de la ANUC, ejecutaba proyectos con dinero del Plan Colombia. Así mismo, OCENSA implementó desde 1998 el Programa de Mantenimiento Civil (PMC), que “consiste en la contratación directa con las Juntas de Acción Comunal (JAC) de las veredas de influencia a lo largo del trazado del oleoducto en su zona norte, para realizar obras de mantenimiento civil y obras menores”.<sup>263</sup>

Estas estrategias en vez de minar la lógica contrainsurgente la profundizan. Por una parte, se trata de las conocidas acciones cívico-militares, orientadas a afectar la base social de la insurgencia, es decir, “quitarle el agua al pez”. A su vez, acercarse a las comunidades y a sus organizaciones de base es una forma tradicional de obtener información y generar inteligencia para las operaciones militares. Según un testimonio recolectado por el artículo de *The Guardian*,<sup>264</sup> el personal de seguridad de Ocesa trabaja como civiles en las comunidades locales. Guardaban silencio sobre su pasado militar, pero eran elegidos por

---

<sup>261</sup> CMSP israelita.

<sup>262</sup> *The Guardian*. BP hands 'tarred in pipeline dirty war'. *The Guardian*. Octubre 17 de 1998. <https://www.theguardian.com/world/1998/oct/17/1>

<sup>263</sup> Patiño Simón, Ben Miller, y Dost Bardouille. Oleoducto Central S.A. y el Plan de Mantenimiento Civil. CDA Collaborative Learning Projects y FIP. 2017; Puentes, Mauricio. “La militarización en Colombia y el papel de Estados Unidos. Evocando la Doctrina de Seguridad Nacional”. *Revista Cambios y Permanencias*, 8 (2), 256-277. 2017.

<sup>264</sup> *The Guardian*. “BP hands”.

DSL por su experiencia previa en una región concreta como oficiales activos. A estos agentes se les pidió que averiguaran sobre los líderes sindicales y comunitarios y que espieran las reuniones locales. Se comenta que la información se compartía regularmente con el Ministerio de Defensa colombiano y con la brigada local del Ejército.

Finalmente, es importante dejar planteada la inquietud sobre la multinacional Occidental en Arauca, no sólo porque “gastó en Caño Limón 3.9 millones de dólares en 1996 para seguridad, y presupuestó 7 millones en 1997”<sup>265</sup>, sino también por el caso de Santo Domingo, en donde la compañía privada Air Scann tuvo una participación importante, por no decir decisiva. Según el testimonio del piloto colombiano responsable del bombardeo, el Cesna 337, piloteado por los contratistas de AirScan, fue quien brindó las coordenadas del ataque y era el que se comunicaba directamente con las tropas colombianas en terreno. Los helicópteros de la Fuerza Aérea atacaron Santo Domingo con fuego de ametralladora, cohetes aire-tierra y bombas de racimo. Murieron 18 civiles, entre ellos nueve niños. Por estas muertes nadie se ha hecho responsable, precisamente por el carácter tan irregular por medio del cual operan los contratistas y sus nexos con las Fuerzas Militares colombianas. Según el mismo reporte, el representante legal en Colombia de Occidental argumentó que la empresa no tenía ningún tipo de vínculo contractual con AirScan, pero luego se demostró que este vínculo había cambiado de pagar directamente a la compañía, como ocurría en 1997, a tercerizar el pago por medio del Ministerio de Defensa colombiano.<sup>266</sup>

Otra multinacional que vinculó a privados en sus asuntos de seguridad fue la alemana Mannesmann<sup>267</sup>, una de las primeras empresas conectada con la industria petrolera en ser víctimas de extorsión, secuestros y atentados a sus infraestructuras. Producto de ello, surgiría una relación entre la petrolera, el ELN y los espías alemanes, los esposos Mauss. En su primera misión entre 1984 y 1986, fueron contratados para negociar con el ELN, de manera tal que este no perturbara la construcción del oleoducto, dado el secuestro de cuatro de sus

---

<sup>265</sup> Oil Watch. La manera occidental de extraer petróleo. Oilwatch.org. 2001.

<sup>266</sup> Penhaul, Karl. Americans Blamed in Colombia Attack. San Francisco Chronicle. Junio 15 de 2001. <https://www.mail-archive.com/kominform@lists.eunet.fi/msg07822.html>

<sup>267</sup> La Mannesmann, fue la empresa contratada para construir un tramo de 278 km del oleoducto Caño Limón (Arauca) hasta Zulia (Santander) por un valor de 169 millones de dólares, cuya concesión de un año fue otorgada a la Mannesmann por la Compañía de Petróleo Occidental Co.

trabajadores, por cuya liberación pagaron una cuantiosa suma de dinero. La estrategia consistió también en hablar con la comunidad aledaña a la construcción del oleoducto, financiar programas sociales y construir pequeños proyectos de infraestructura comunitaria en las zonas de influencia de la multinacional.

En total, los Mauss ejecutaron cinco misiones en Colombia, cuatro de ellas directamente relacionadas a negociaciones con el ELN, y una referente a negociaciones en torno a la construcción del metro de Medellín. En el marco de estas, entraron en contacto con importantes figuras del escenario político nacional. En la última de sus misiones, el 17 de noviembre de 1996, fueron capturados en el aeropuerto José María Córdova de Medellín.

En general la presencia de estos mercenarios y contratistas de seguridad tuvieron en las décadas de los ochenta y noventa implicaciones vitales en el conflicto armado. No solo porque intensificaron la guerra con expresiones de violencia cada vez más sangrientas, sino también porque les dieron a todos los actores armados formas de permanencia, que ni ellos mismos habían contemplado. El uso de estas compañías y contratistas de seguridad se va a profundizar en la lucha contra las drogas, en la segunda mitad de los noventa y especialmente desde la entrada en vigor del Plan Colombia.

### **2.5.3. La privatización de la lucha contra las drogas y la lucha contrainsurgente/contraterrorista: masificación de las compañías militares de seguridad**

“Desde los años noventa<sup>268</sup> hay en Colombia registro de empresas de seguridad extranjeras que vienen a operar en diversos contextos, pero la alarma se da cuando la inversión y los recursos que se les dan a esas empresas son mayores que los que se les da a la Fuerza Pública y que empiezan a crecer exponencialmente en el mercado internacional. Entonces ahí es donde se da la alarma, y sobre todo con los ejemplos de Iraq y Afganistán, donde tenemos los casos del (informe) Tabuga de Abu Ghraib y Guantánamo, donde hay unas extralimitaciones de la fuerza de estos actores y no hay una entidad o un mecanismo de control, ni del país que acoge a las empresas donde operan, ni en el país donde están

---

<sup>268</sup> En ese momento estaba EE.UU. apoyando, yo creo, el 120% el plan Colombia, entonces toda la dotación de antinarcóticos era americana, toda, toda, de pies a cabeza, medias, calzoncillos, todo. Entrevista 189-VI-00196, víctima, guerrilla, secuestro. 2019.

registradas, porque justamente ahí hay un vacío legal que es lo que hace posible la impunidad, o la inmunidad que dan los Estados, como es el caso colombiano en el marco del Plan Colombia”<sup>269</sup>.

Como se ha sugerido en líneas anteriores, hay, por lo menos, dos factores contribuyeron a la expansión del sector privado en la seguridad. El primero tiene que ver con la utilidad que significa para los Estados y ciertas empresas la prestación de servicios especializados de seguridad e inteligencia, mientras que el segundo tiene que ver con la influencia de empresas del sector petrolero en la mejora de las condiciones de seguridad como factor necesario para la ejecución de los proyectos extractivos. Sin embargo, un factor central para la masificación de las compañías ha tenido que ver con la necesidad de evitar los enormes costos políticos y económicos de una intervención directa por parte de socios cooperantes de seguridad como Estados Unidos. Como dijo Myles Frechette, exembajador estadounidense en Colombia<sup>270</sup>,

“es muy útil tener un equipo que no forme parte de las fuerzas armadas de EE. UU. Obviamente, si alguien es asesinado o, lo que sea, puede decir que no es miembro de las fuerzas armadas. Nadie quiere ver a los militares estadounidenses asesinados.”

Argumentos de expertos como los recolectados por la organización Corpwatch, que se encarga precisamente de hacer un monitoreo sobre las actividades de diferentes compañías alrededor del mundo, son ilustrativos al respecto:

“También en lugares como Liberia y Colombia, a EE.UU. le preocupa el “mission creep” (desplome de la misión). Someter al peligro a los contratistas en lugar del personal militar estadounidense es mucho más viable desde el punto de vista político, ya que a menudo pasan desapercibidos y sus costes y funciones son menos conocidos.”<sup>271</sup>

“La externalización de la guerra permite seguir una política sin tener que defenderla en público, o tener que lidiar con esas molestas bolsas para cadáveres y ataúdes envueltos en

---

<sup>269</sup> Entrevista 311-PR-00652, defensor de DD.HH, Experto, Compañías de seguridad militar.

<sup>270</sup> Antiguo embajador de Colombia, analizando la estrategia de EE.UU. The Mail Archive. “Latin America News 12/10”.

<sup>271</sup> Van Dongen, Rachel. Colombia: US 'Private Army' Grows. Corpwatch. Septiembre 3 de 2003. <https://corpwatch.org/article/colombia-us-private-army-grows>

banderas”<sup>272</sup>.

La implementación del Plan Colombia hizo parte de un proceso global en el que se presentó un aumento en la privatización de ciertos servicios de seguridad pública, en especial en contextos de explotación de hidrocarburos y conflictos armados de carácter no internacional, bajo la lógica de la huella ligera.

Así, las empresas extractivas y los Estados concibieron que el fortalecimiento de las CMSP tenía varios beneficios, como la posibilidad de ocupar a soldados cesantes que resultaban costosos para los presupuestos de defensa, o la posibilidad de “privatizar” las violaciones a los derechos humanos, garantizando un menor involucramiento de la Fuerza Pública en eventos que minaban su legitimidad institucional.<sup>273</sup> Además, la contratación de CMSP de carácter internacional dificulta la rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, como en el caso del bombardeo en Santo Domingo. Su mayor presencia y consolidación en el quehacer de los conflictos intra-estatales ha estado acompañado de opacidad e impunidad.

Aunque estas compañías niegan la posibilidad de que se les considere como mercenarios, aspecto que se fundamenta en ciertas interpretaciones de normas de DIH, es importante destacar que estas empresas son el producto de la institucionalización del “mercenarismo”. La industria de las compañías militares pasó de ser un esfuerzo por ganar una remuneración económica, a convertirse en una asociación para la prestación de amplios y ambiguos portafolios de servicios, que los llevó a refinar y profesionalizar sus capacidades.<sup>274</sup>

Para el 2006, se estimó que había alrededor de 300.000 CMSP que generaron más de 150 mil millones de dólares en ingresos<sup>275</sup>. De hecho, las empresas estadounidenses dominan el sector, con ganancias estimadas entre 20.000 millones y 100.000 millones de dólares

---

<sup>272</sup> The Mail Archive. Colombia: Outsourcing the war. The Mail Archive. Mayo 12 de 2001. <https://www.mail-archive.com/kominform@lists.eunet.fi/msg07183.html>

<sup>273</sup> Tate, Winifred. Drugs, Thugs, and Diplomats. U.S. Policymaking in Colombia. Anthropology of Policy. 2015. Pp. 102.

<sup>274</sup> Rendón, José William. La Participación de Compañías Militares y de Seguridad Privadas (CMPS) en el Conflicto Armado Colombiano (1988-2012). (Tesis, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario). 2015. Pp. 15.

<sup>275</sup> Mathieu, Fabien y Nick Dearden. “Corporate Mercenaries. The threat of private military and security companies”. War on Want. 2006.

anuales. La experiencia de Colombia no es aislada, ni única: las fuerzas privadas constituyen casi la mitad del total de las fuerzas desplegadas por los Estados Unidos en Afganistán e Iraq.<sup>276</sup>

Para este periodo “De la guerra total a la paz incompleta”, se comienza a ver el papel de estas compañías en conjunción con un antiguo aliado, las multinacionales extractivas. Como se comentó anteriormente, bajo la necesidad de proteger el oleoducto Cañon Limón y a Occidental, fueron aprobados unos recursos extraordinarios por parte de Estados Unidos para ayudar en este objetivo. DynCorp sería el llamado a ocupar esta posición.

La inclusión de la compañía privada en el programa de protección a la infraestructura se daría tras una reunión entre los ejecutivos de Occidental y altos mandos militares colombianos y estadounidenses donde se discutieron los requisitos para que los militares colombianos en Arauca reciban entrenamiento por parte de tropas estadounidenses<sup>277</sup>. Sin embargo, DynCorp terminaría siendo asignado para entrenar a las Fuerzas Militares colombianas que estarán encargadas de resguardar las actividades de la petrolera en Arauca.<sup>278</sup> Teniendo en cuenta los cuestionamientos de la Brigada 18 que opera en el departamento, es plausible que la asignación de DynCorp haya respondido a una estrategia para sortear los requerimientos de la Enmienda Leahy<sup>279</sup>.

El entrenamiento consistió, principalmente, en la preparación de artilleros aéreos del Ejército colombiano y pilotos de la fuerza aérea estadounidense. Por otro lado, se encargó del mantenimiento de los aviones UH-1H II. Esta asignación de DynCorp para la Estrategia de Seguridad de Infraestructura, sería el comienzo de la expansión de sus actividades hacia el noreste del país, y permitirá la creación de la primera FARP (Forward Arming and

---

<sup>276</sup> Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios del Consejo de Derechos Humanos. *Informe sobre los avances logrados en la elaboración de un proyecto de instrumento jurídico, para su debido examen y actuación por el Consejo de Derechos Humanos*. Referencia Naciones Unidas A/HRC/15/25. (2010), p. 6.

<sup>277</sup> Embajada de Estados Unidos en Colombia. “Plan Colombia Implementation Meeting”. DNSA, documento número 40.

<sup>278</sup> INL “20030300-20030421”. 2003. Evaluación de contrato: [https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gmfTR7SjNkHKAU\\_8IN-8kGC3dp\\_St7w0](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gmfTR7SjNkHKAU_8IN-8kGC3dp_St7w0)

<sup>279</sup> Esta ley exige que antes de entrenar tropas extranjeras, el ejército norteamericano verifique que no hayan sido investigados o acusados por violaciones a los derechos humanos.



Refueling Point) en Tame, que posteriormente será fundamental para las operaciones antinarcóticos en esta región.

Cuando el Plan Colombia fue aprobado a comienzos de los 2000, el Congreso estadounidense aprobó la presencia en Colombia de 400 militares y 400 contratistas, número que luego pasaría a 800 y 600 respectivamente gracias a la gestión del comandante del Comando Sur, James Hill. Sin embargo, no hay certeza que estos topes se hayan cumplido, teniendo en cuenta el nivel de secretismo con el que se manejan estos asuntos de seguridad en Colombia, y la falta de vigilancia por parte del congreso colombiano. ¿Si esta situación era así incluso antes del Plan Colombia, donde no había tantos recursos, cómo sería después, especialmente luego de 2004, cuando el Senado de los EE.UU. en el Acto legislativo sobre autorizaciones para Inteligencia, permite que Colombia pueda hacer uso de recursos para estos fines en el marco de lucha contra las drogas, así como de la lucha contra el terrorismo?<sup>280</sup>

Esta vía libre para financiar y asesorar la inteligencia en un país donde la inteligencia se terminó convirtiendo en la fase previa de la guerra sucia, es peligroso, más cuando existen compañías que están autorizadas para este trabajo y que las cubre el acuerdo de inmunidad.<sup>281</sup> Como lo señala un defensor de derechos humanos:

“A partir de la inteligencia legal e ilegal se define a quién matar, se define a quién desaparecer, se define a quién amenazar, se define a quién chuzar, bueno a quién perseguir, también se define a quién judicializar a veces de manera legal, a veces también se define a quién hacerle montajes, bueno. Entonces para mí la inteligencia de una democracia desviada como la nuestra, pues es un mecanismo, es un mecanismo de guerra, o sea la inteligencia se utiliza con un fin militar, con un fin de seguridad nacional, etcétera pero si se desvía pues es el soporte de la guerra sucia, es decir sin inteligencia no hay guerra sucia”<sup>282</sup>.

---

<sup>280</sup> Ver el Título V de Senate of the United States of America, (2004), FY2004 Intelligence Authorization Act, Report 108-163.

<sup>281</sup> En la entrevista 311-PR-00652, se resalta una CMSP israelita que asesora en inteligencia al ejército y que fue central en 2007 para las operaciones que dieron como la O. Fenix y otras tantas.

<sup>282</sup> Entrevista 311-PR-00633, defensor de DD.HH., Experto, asistencia militar y violaciones de derechos humanos

En el marco de la proliferación de estas compañías, como se dio durante el Plan Colombia, estas han encontrado formas de evadir estas restricciones, como por ejemplo lo hizo DynCorp al contratar personal colombiano para desempeñar funciones de los contratos suscritos.<sup>283</sup> Igualmente, expertos afirman que Estados Unidos suele contratar a nacionales de lugares como Brasil y Centroamérica que no cuentan para el tope.<sup>284</sup>

Igualmente, los acuerdos por medio de los cuales se han contratado sus servicios están contruidos de una manera tal que ninguna entidad pública del gobierno colombiano pueda generar veeduría y rendición de cuentas sobre sus actividades. En 2006, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, hizo un requerimiento al Ministerio de Defensa para que hiciera público el número de contratistas que habían trabajado en el país desde el inicio del Plan Colombia. La respuesta del Ministerio fue que no disponían de dicha información, la cual era manejada de forma exclusiva por la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Ni siquiera la Aeronáutica Civil tenía registro de las actividades de aviación que desempeñaba DynCorp en los cielos colombianos.

Y este es sólo el caso de una compañía que ha recibido mayor visibilidad, precisamente por las actividades de fumigación que desarrolló en el marco del Plan Colombia. Sin embargo, el centro del asunto consiste en que desde la entrada en vigor del Plan se dio un aumento considerable de compañías y contratistas en el país para desempeñar un sinnúmero de tareas ligadas a la seguridad y el conflicto armado. Lejos de ser una situación aislada, el caso de DynCorp es ilustrativo de una práctica más sistemática de privatizar los servicios de seguridad,<sup>285</sup> con el aval, por supuesto, de los dirigentes de turno de Colombia.

Si bien mucho se ha argumentado sobre la ayuda militar que llegó al país por cuenta del Plan Colombia, lo cierto es que para 2002, casi 150 millones de dólares habían sido

---

<sup>283</sup> Entrevista 514-AA-00001, civil, DynCorp, Meta. 2020. El testimonio narra cómo fue contratado por la compañía DynCorp para pilotear avionetas y helicópteros dedicadas a la fumigación de cultivos de hoja de coca, y la estrecha cercanía de las actividades con los intereses de multinacionales.

<sup>284</sup> Van Dongen, Rachel. “Colombia: US 'Private Army' Grows”.

<sup>285</sup> Las funciones que realizan las CMSP son bastantes, ya que su portafolio de servicios es amplio para volverse atractivas y ser más competitivas que las demás, por esto, es posible determinar que realizan: servicios de protección de propiedades, servicios de protección del crimen y correccionales, productores de defensa, producción de armas, fumigación y erradicación de cultivos ilícitos, entrenamiento militar, servicios de consultoría, logística y apoyo, servicios técnicos, mantenimiento y reparación, entrenamiento en seguridad, mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria, combate, inteligencia militar, servicio de transporte de tropas, alimentos y armas. Rendón, José William. “La Participación de Compañías Militares”.

destinados a pagar a distintas compañías de seguridad, lo que corresponde a cerca del 50% de los recursos que habían sido aprobados ese año para la lucha antinarcóticos. Esto permite pensar que gran parte de los procesos de reestructuración del aparato militar y policial de Colombia pudieron haber corrido por cuenta de asesorías desarrolladas por compañías privadas de seguridad contratadas con dinero de Estados Unidos y, por lo tanto, responsables frente al Congreso estadounidense y no frente al colombiano.

A partir del panorama anteriormente esbozado, es posible llegar a apreciar que los contratistas realizaron todo un espectro de servicios militares. Los contratistas hacían de pilotos de avión, mecánicos, responsables del mantenimiento de aeronaves, agentes de seguridad e inteligencia, miembros de equipos de rescate, encargados de logística, inteligencia y planeación de operaciones, entre otras diversas tareas. Como afirmó Isacson,

“estas personas se encontraban más de cerca con la guerra que los mismos militares activos estadounidense presentes en Colombia en esos años. Para el año 2002 había una totalidad de 16 contratos activos con empresas privadas estadounidenses, que sumaba un total de 150.4 millones de dólares”.<sup>286</sup>

En algunos sectores políticos de EE. UU, la tercerización de actividades en medio de un conflicto generaba suspicacia, pues parecía la coartada perfecta para no tener que someterse a supervisión, vigilancia y control, y se prestaba para mucho secretismo<sup>287</sup>. En efecto, apenas en el 2003, a través de un informe del Departamento de Estado se conoció un listado de las empresas con contratos activos, previo a eso, todo operaba en total oscuridad.

Los contratos más importantes han ido a parar a empresas como Lockheed Martin, DynCorp, MPRI y Northrop Grumman, pero empresas menos conocidas como Rendon Group (que presta apoyo en materia de relaciones públicas al Ministerio de Defensa) y Science Applications International Corp (que presta asistencia en el análisis de imágenes) también se beneficiaron.

---

<sup>286</sup> Isacson, Adam. “The U.S Military in the War on Drugs”. Pp. 43.

<sup>287</sup> The New York Times reportó en 2001 que algunos de los ciudadanos americanos que operaron como funcionarios de la compañía militar y de seguridad, DynCorp, habían trabajado previamente en actividades encubiertas con el gobierno de Estados Unidos. Forero, J. “U.S. Pilots Fight Coca in Colombia”. *The New York Times*. 2001. <https://www.nytimes.com/2001/08/17/world/us-pilots-fight-coca-in-colombia.html>

Así, por ejemplo, dentro de las funciones contratadas con Lockheed-Martin se encontraban el apoyo logístico para las operaciones de cuatro aviones de transporte de tropa, además de la contratación del mantenimiento de la flotilla de helicópteros Black Hawk y los aviones entregados a la Policía. Apoyó labores de interdicción, erradicación manual y aérea de coca y “operaciones de alto valor”. Prestó aviones, pilotos, operadores, coordinadores de operaciones de reconocimiento y hasta un sistema de radares para operaciones de multi-inteligencia que se usó para interdicción y “en el teatro de operaciones del Comando Sur de EE. UU, principalmente en Colombia”.

También entrenó a las Fuerzas Militares en comunicaciones y proveyó servicios, software y sistemas de tecnologías de la información y de información geográfica para la Armada. Finalmente, con esa compañía había todo un plan de entrenamiento de vuelo, que incluso implicaba la instalación de simuladores de vuelo a través del Sistema de Entrenamiento de Vuelo Sintético.<sup>288</sup>

Un importante actor dentro de este rompecabezas de las compañías militares fue Military Professional Resources (MPRI). Se conoció información sobre un contrato con la empresa por valor de 4.3 millones de dólares, por vigencia de un año, para mejorar el entrenamiento de soldados para “pelear en la guerra contra las drogas”,<sup>289</sup> así como entrenamiento en operaciones psicológicas, inteligencia y logística. Previamente, la empresa había ganado un contrato por 850.000 dólares para realizar una evaluación de las capacidades del Ministerio de Defensa, que se ejecutó en 6 semanas. Todas estas fueron asignaciones realizadas con dineros del Plan Colombia.

Lo llamativo de compañías como MPRI es que están conformadas exclusivamente por personal militar retirado de Estados Unidos, incluyendo generales de cuatro estrellas. Brian Sheridan, el alto funcionario del Pentágono que supervisó el trabajo del MPRI, dijo en un testimonio ante el Congreso que el papel de la empresa en Colombia no era “siniestro”, solo

---

<sup>288</sup> Rendón, José William. “La Participación de Compañías Militares”. Pp. 53.

<sup>289</sup> de la Garza, Paul y David Adam. “Colombia: US Military Aid”.



“una cuestión de recursos humanos”, insistiendo en que el Comando Sur de EE. UU. no tenía hombres de sobra para dar asesoramiento estratégico y logístico al ejército colombiano.<sup>290</sup>

“Hacemos que (los colombianos) reestructuren, reenfoquen y demuestren los procesos correctos. Lo que hacemos es prepararlos para que lo que hagan, lo hagan de forma eficiente”.<sup>291</sup>

Durante la ejecución del contrato de entrenamiento militar, MPRI presentó problemas de empatía con los miembros del Ejército y la Policía Nacional y cometió errores como contratar asesores que no hablaban español y tampoco conocían el contexto latinoamericano y menos el colombiano.<sup>292</sup> Lo que llevó a que el trabajo de entrenamiento fuera irrelevante frente a las necesidades del Ejército y la Policía. Al final, el contrato no se renovó frente a problemas operativos que hubo entre contrapartes. Para 2006, llegaría otra compañía privada para trabajar en labores similares a las realizadas por MPRI. “Irinco Inc” obtuvo un contrato por 20 millones de dólares, cumpliendo labores de entrenamiento del personal militar, mantenimiento y ayuda logística, todo esto por medio del Plan Colombia”.<sup>293</sup>

Northrop Grumman California Microwave Systems fue contratada para operar un sistema aéreo de recolección de imágenes de Inteligencia (IMINT) y Comunicaciones de Inteligencia (COMINT). Esto implicó la toma de fotografías aéreas en zonas de conflicto y de narcotráfico, así como la interceptación de comunicaciones. La información era transferida al Sistema de Reconocimiento del Comando Sur que funcionaba como plataforma y que, a su vez, compartía la información con las autoridades colombianas.<sup>294</sup> Este es un punto importante para entender que los límites entre operaciones antinarcóticos y operaciones contrainsurgentes no siempre eran muy claros. *The Washington Post* describe la transferencia de esta tecnología a Colombia como uno de los puntos de inflexión del conflicto armado:

---

<sup>290</sup> The Mail Archive. “US crews involved in Colombian battle”. *The Mail Archive*. Febrero 26 de 2001. <https://www.mail-archive.com/kominform@lists.eunet.fi/msg06032.html>

<sup>291</sup> The Mail Archive. “Fw: [STOPNATO.ORG.UK] Colombia: U.S. 'Outsourcing A War' With Military, CIA Mercenaries”. *The Mail Archive*. Septiembre 21 de 2000. <https://www.mail-archive.com/kominform@lists.eunet.fi/msg03545.html>

<sup>292</sup> de la Garza, Paul y David Adam. “Colombia: US Military Aid”.

<sup>293</sup> Perret, Antoine. “The Role of the Inter-American System”. Pp. 70.

<sup>294</sup> Rendón, José William. “La Participación de Compañías Militares”. Pp. 56.

“Pero, en formas críticas, la intervención norteamericana inclinó la guerra. Entregó una inyección de confianza a las instituciones colombianas, particularmente a las militares. Le otorgó al país un vasto y sofisticado sistema de recolección de información de inteligencia para cazar a los rebeldes, así como un *hardware* letal para atacar desde los cielos”.<sup>295</sup>

Esta compañía es recordada en el marco del conflicto armado porque tres de sus contratistas fueron capturados por las FARC, en 2003, tras haber derribado una de las aeronaves con las que se hacía reconocimiento de cultivos de hoja de coca.<sup>296</sup>

Dentro de las compañías que se han especializado en prestar servicios de protección a industrias extractivas se encuentra Armour Group, que durante los noventa era conocida como *Defence Systems Limited* (DSL) y su filial en Colombia Defense System Colombia (DSC) y que, como se comentó en el apartado anterior, prestó sus servicios a la BP y Ecopetrol para proteger la operación e infraestructura del Oleoducto Central<sup>297</sup> que va desde los campos petroleros de Cusiana y Cupiagua, en Casanare, hasta el Puerto de Coveñas.

DSL trajo consigo a exintegrantes del *Special Air Service* del Ejército Británico para proteger los campos petroleros evaluados en 25 billones de libras.<sup>298</sup> De acuerdo con una investigación de The Guardian (1998), existen declaraciones que podrían sugerir que DSL, otra compañía de seguridad israelí llamada *Silver Shadow* y *Ocensa*, estaban relacionados con la Brigada 14 del Ejército que participó en el asesinato de 14 personas en Segovia (Antioquia) en abril de 1996. Aunque la masacre estaba desconectada de la ejecución de los contratos de seguridad pagados por las compañías petroleras, había flujo de información de inteligencia entre DSL y la Brigada 14. Parece que compartir información con las Brigadas era parte del modo de operación de la CMSP o así lo evidencia la declaración del coronel Luis Garcés, oficial de inteligencia militar adscrito a la Brigada 16. Se dijo que las compañías petroleras, incluyendo a la BP, cooperaban con esa Brigada, y de hecho se encontraron 18

---

<sup>295</sup> Miroff, Nick. “Plan Colombia’: How Washington learned to love Latin American intervention again”. *Washington Post*. Septiembre 18 de 2016.

<sup>296</sup> Bowden, Mark. “Flight Risk. When a U.S. company ignored pilot warnings in Colombia, four Americans died, and three were taken captive”. *Global*. 2009.  
<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/07/flight-risk/307492/>

<sup>297</sup> Ocensa se llama el consorcio encargado de administrar y operar el oleoducto.

<sup>298</sup> The Guardian. “BP hands ‘tarred in pipeline dirty war’”



pagos irregulares realizados por la BP que sumaron 312 mil dólares entre mayo de 1996 y agosto de 1998,<sup>299</sup> dentro de lo que se contaba el trabajo de inteligencia.

Otra compañía que estuvo presente en el marco de Plan Colombia, pero también antes de su implementación fue Airscann. Esta compañía, estuvo vinculada con Occidental desde 1997 para cuidar los oleoductos y campos petroleros en Arauca. Lo anterior bajo la ejecución de un contrato para proveer vigilancia de alta tecnología y monitorear los movimientos de la guerrilla con el propósito de evitar daños a su producción, aunque se sabe que el objetivo de fondo era proveer información al Ejército colombiano para contrarrestar las acciones guerrilleras.<sup>300</sup>

Una de las empresas de mayor notoriedad por su presencia en el terreno y las denuncias asociadas a sus operaciones es DynCorp International, fundada en 1951, y descrita como de servicios y tecnología, enfocándose en el ámbito de la aviación. El contrato que tuvieron bajo el Plan Colombia, según el Centro de Política Internacional (CIP), era de 600 millones de dólares, centrado en el acompañamiento a operativos de fumigación aérea de cultivos de coca, así como labores de interdicción, y servicios de mantenimiento a la flota de aviación. Igualmente, The New York Times publicó un artículo en mayo del 2001<sup>301</sup> en el que aseguró que, para ese año, DynCorp era la compañía de seguridad con mayor despliegue de sus efectivos en Colombia con un contrato de cinco años por 170 millones de dólares.

Dyncorp estuvo encargada de la contratación de pilotos, personal técnico y de mantenimiento para apoyar a la Brigada Antinarcoóticos del Ejército y el programa de erradicación de la Policía. Los funcionarios de la compañía eran los que volaban los helicópteros Black Hawks y Huey II donados por Estados Unidos, además de entrenar a pilotos del Ejército en el uso de visores nocturnos para misiones en Black Hawk. Se conoce información sobre la puesta en marcha de un programa de entrenamiento de perros antinarcoóticos y la prestación de servicios al Ejército, al programa de erradicación de la Policía, al INPEC y a la sección antinarcoóticos de la Embajada de Estados Unidos.

---

<sup>299</sup> Ibid.

<sup>300</sup> Perret, Antoine. “Las compañías militares”. Pp. 10.

<sup>301</sup> Forero, J. “U.S. Pilots Fight Coca”.



Los costos elevados que pagaba Estados Unidos a esta empresa fueron duramente criticados por la prensa estadounidense. The New York Times comparó, en este mismo artículo, el costo de contratación de los funcionarios de DynCorp frente a los costos que podrían haber representado las misiones de erradicación si hubiesen sido ejecutadas por pilotos colombianos, afirmando que un piloto de DynCorp llegaba a ganar cien mil dólares al año conduciendo estas operaciones, mientras que un piloto colombiano habría llegado a ganar cuarenta mil dólares en ese mismo lapso.<sup>302</sup> Por otro lado, las críticas se concentraban también en el peligro al que fueron expuestos los ciudadanos norteamericanos contratados por DynCorp. El alto riesgo de la actividad, dada la presencia guerrillera en las zonas a asperjar, hizo necesario que los aviones piloteados por DynCorp fueran escoltados por aviones de la Policía Nacional.

Es importante mencionar que DynCorp tuvo una importante centralidad en lo que fue una estrategia de notoriedad pública y movilización de recursos –la fumigación con glifosato – y, relacionado con ello, empezaron las denuncias de pobladores de zonas rurales que, a su vez, fueron acompañadas por organizaciones de derechos humanos. Una denuncia recurrente era la aspersión de cultivos lícitos a campesinos de las regiones priorizadas por el programa, así como daños a sus animales y afectaciones de salud.<sup>303</sup>

Las operaciones de esta compañía en Colombia abarcan el entrenamiento militar del Ejército y la Policía, tanto para las operaciones antinarcoóticos, como en operaciones de combate contrainsurgente como las que se dieron en el marco del Plan Patriota, las denominadas operaciones contra objetivos de alto valor. Como se ha explicado en apartados anteriores, uno de los desarrollos más relevantes del enfrentamiento entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC fue la conjunción entre la lucha antinarcoóticos y la lucha contrainsurgente. Esto obedeció a decisiones estratégicas de la guerra, bajo la premisa de que, al atacar los cultivos de coca, que eran fuente de financiamiento para las FARC y les habían permitido saltos tácticos y base social, sería una manera efectiva de desestabilizar y debilitar a esa guerrilla.

---

<sup>302</sup> Forero, J. “Role of U.S. Companies in Colombia Is Questioned.” *The New York Times*. Mayo 18 de 2001. <https://www.nytimes.com/2001/05/18/world/role-of-us-companies-in-colombia-is-questioned.html>

<sup>303</sup> Isacson, Adam. “Colombia’s human security crisis”. *Disarmament Forum*, 2, 25-40. 2002. Pp. 29.



Los cables analizados reflejan esta tendencia, en particular en el marco de las operaciones conjuntas entre DynCorp y las Fuerzas Armadas de Colombia a partir del 2003, donde se puede identificar una inclinación hacia la intensificación del componente militar de las operaciones antinarcóticos a partir del crecimiento en el número de operaciones contra altos objetivos militares, es decir, comandantes de los grupos armados ilegales, específicamente las FARC.

Esto se evidencia especialmente a partir de la aparición del concepto de “objetivos de alto valor” en las evaluaciones mensuales de contrato de la compañía. La primera vez que se afirma que DynCorp está formando parte de estas operaciones es en el año 2003, en el mes de agosto. En este cable se menciona brevemente que el contratista brindó apoyo al Ejército colombiano en una misión contra un objetivo militar de alto valor. También es interesante constatar que cada vez que el contratista participa en estas misiones, de carácter exclusivamente militar, es felicitado por su flexibilidad debido a que está obrando en los límites de lo establecido en el contrato:

“El contratista administró hábilmente los recursos limitados para apoyar a Bucaramanga y San José (...) y para apoyar al ejército colombiano (COLMIL) en una misión de Objetivo de Alto Valor. (...) La flexibilidad del contratista permitió que el gobierno ahorrara costos en la dotación requerida para apoyar nuestra misión actual (...) El contratista utilizó su experiencia en coordinación de operaciones de asalto aéreo para crear un plan a largo plazo que pueda proveer seguridad a las parcelas donde los aviones de erradicación han recibido fuego enemigo en Norte de Santander (...) Este modelo de cooperación y coordinación entre las entidades del COLMIL y las entidades de erradicación es un ejemplo para las operaciones conjuntas del Air Wing del Departamento de Seguridad en Colombia y mejora la eficiencia operativa y la seguridad (...) El contratista de nuevo mostró una impresionante flexibilidad en la administración de recursos con el fin de proveer apoyo aéreo para una misión contra un Objetivo de Alto Valor en San José (...) el resultado fueron varios miembros de las FARC detenidos o asesinados (...) El contratista realizó 1354 salidas en apoyo directo de la brigada contra-drogas (CD) y de otras unidades que reciben apoyo estadounidense (vetted units). El contratista realizó una misión contra un Objetivo de Alto Valor en San José



que resultó en la reducción del daño de batalla recibido en la zona de aspersión de Barrancabermeja, varios cientos de kilos de cocaína fueron decomisados y también se produjo la captura del segundo al mando de las FARC en el área de Cúcuta.”<sup>304</sup>

La cita anterior da cuenta del carácter contrainsurgente de algunas operaciones ejecutadas por DynCorp. También deja claro que el INL aprobaba explícitamente su participación en estas misiones, ya que describe la mencionada operación en Norte de Santander como un “modelo para las operaciones conjuntas”. Además, al reportar en la evaluación de contrato las bajas conseguidas y la captura de uno de los comandantes de las FARC, se está planteando sutilmente una nueva categoría de evaluación relacionada con este tipo de resultados en las operaciones del contratista, ya que los criterios de evaluación planteados en el contrato no contemplan un espacio para el reporte de estos resultados operativos.

La fusión entre los paradigmas de la guerra contra las drogas y la guerra contra el narcoterrorismo jugó un papel fundamental para explicar la articulación entre las operaciones de erradicación encabezadas por DynCorp y los programas de inteligencia de Estados Unidos en Colombia enmarcados en una lucha contrainsurgente.

“Al ser una organización de tráfico de drogas, el estatus de las FARC como el de una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, había sido consolidado años antes con la lucha antinarcóticos de Reagan. En ese momento, la epidemia de crack y cocaína estaba en su punto más alto, y el gobierno decidió que las organizaciones que trajeran drogas a las calles de América eran una amenaza para la seguridad nacional”.<sup>305</sup>

Tras el comienzo del gobierno de Uribe, se presentaron ciertos cambios en la forma de operar de DynCorp, ya que aparecieron documentos en que se describe la coordinación entre las Fuerzas Militares o la policía como: “más allá de la expectativa contractual”<sup>306</sup>. Por ejemplo, en el departamento de Putumayo, en el 2004, DynCorp realizó operaciones de

---

<sup>304</sup> INL y Departamento de Seguridad. “20030200 DynCorp HVT Support.” 2003. Evaluación de Contrato. <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OIDDA1OZynHNUHscg2pxueV0uInt29eq>

<sup>305</sup> Priest, Dana. “Covert action in Colombia”.

<sup>306</sup> INL. “20040300”. 2004. Evaluación de contrato:

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gmfTR7SjNkHKAU\\_8IN-8kGC3dp\\_St7w0](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gmfTR7SjNkHKAU_8IN-8kGC3dp_St7w0)



contraguerrilla que involucraron asaltos aéreos y despliegue de refuerzos terrestres con el objetivo de destruir centros de comercio de las FARC<sup>307</sup>. Este involucramiento directo en acciones militares para ganar la guerra revela que las preocupaciones de ciertos sectores políticos eran ciertas, y en efecto los civiles de DynCorp estaban más cerca del combate que militares estadounidenses activos en el país.

Con la implementación de Plan Patriota en el sur de Colombia, DynCorp estrechó su cooperación con la Brigada 27 de Putumayo, de la que hace parte de batallón contraguerrillas número 59. Este Batallón es mencionado en cables previos a ese año por su vinculación con grupos paramilitares de la región y por su participación en la masacre del Tigre, en 1998. En este mismo contexto, aparecen las primeras referencias al papel de DynCorp como coordinador de operaciones militares (OPSCO)<sup>308</sup>, ampliando de esta forma sus facultades.

Según el Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos<sup>309</sup>, los OPSCO son cargos de un deber especial (*special-duty*) que únicamente pueden ser ocupados por personal de grado E-5 de la Fuerza Aérea, un nivel que requiere años de experiencia militar en operaciones de alto nivel. Estos funcionarios se encargan de manejar todos los aspectos operacionales de misiones de ataque, lo que incluye manejo de logística, apoyo administrativo, ejecución de requisitos relacionados con el presupuesto, supervisión de personal extranjero, entre otras actividades.

Respecto a la experiencia militar, se requiere un historial de servicio militar que muestre un desempeño efectivo en general, referido a competencia y capacidad. Los que desempeñan este cargo en el marco de las operaciones militares norteamericanas deben ser obligatoriamente ciudadanos norteamericanos y no tener conexiones familiares o comerciales con otro país. Además, deben poder ser elegibles para recibir información confidencial y sensible, también deben aprobar un examen de polígrafo de contrainteligencia.

---

<sup>307</sup> INL. “20020900-20021022”. 2002. Evaluación de contrato:

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gmfTR7SjNkHKAU\\_8IN-8kGC3dp\\_St7w0](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gmfTR7SjNkHKAU_8IN-8kGC3dp_St7w0)

<sup>308</sup> Operations Coordinators

<sup>309</sup> Department of the Air Force. Air Force Policy Directive 16-1, Security Cooperation. Enero 16 de 2019. [https://static.e-publishing.af.mil/production/1/saf\\_ia/publication/afi16-113/afi16-113.pdf](https://static.e-publishing.af.mil/production/1/saf_ia/publication/afi16-113/afi16-113.pdf)



En definitiva, se trata de un cargo fundamental para labores de inteligencia y tiene un carácter plenamente militar.

Es importante mencionar otro artículo de prensa internacional en donde se ha hecho una lectura similar acerca del carácter cada vez más contrainsurgente de las operaciones de contratistas como DynCorp en el marco del Plan Colombia. *The Washington Post* consigna, en el 2016, la respuesta del embajador de Colombia, William Brownfield, a la pregunta de si las operaciones de aspersión aérea tuvieron un rol en debilitar a las FARC. Brownfield responde: “Se adoptó un enfoque estratégico (...) ¿Tuvieron algún impacto en términos de reducir las capacidades de combate de las FARC y motivarlos a concluir que un acuerdo negociado sería el mejor resultado? Sí. ¿Podría haber ocurrido sin ese enfoque? Tal vez, pero habría sido un proceso mucho más sangriento y más costoso”.<sup>310</sup>

Finalmente, uno de los episodios más controversiales de la presencia de DynCorp en Colombia, fueron las acusaciones de narcotráfico y uso de heroína durante las aspersiones aéreas por parte de algunos operarios de esta compañía. La primera parte de este escándalo surgió a partir del artículo *DynCorp's Drug Problem*, publicado por el diario británico *The Nation*, el tres de julio del 2001.<sup>311</sup> En este se detalla el contenido de un reporte de inteligencia de la DEA del año 2000, al que *The Nation* tuvo acceso a través del Acta para la Libertad de la Información. En este documento se relata la interceptación que hizo la policía antinarcóticos del aeropuerto El Dorado de un paquete enviado por un empleado de DynCorp. El paquete, que tenía como destino la Base Espacial Patrick en la Florida, contenía dos frascos con un líquido similar a aceite de motor, pero tras la aplicación de un test, se descubrió que era heroína camuflada (250 gramos).

La respuesta de Janet Wineriter, la portavoz de DynCorp, fue desacreditar el equipo con el que se realizaron las pruebas antinarcóticos en el aeropuerto. Otros actores involucrados como la DEA, la Policía de Colombia y el Departamento de Estado se rehusaron a comentar sobre el asunto. Según la investigación de *The Nation*, que involucró a expertos en opiáceos como Peter Facchini de la Universidad de Calgary, la probabilidad de que la prueba

---

<sup>310</sup> Miroff, Nick. “Plan Colombia”.

<sup>311</sup> Vest, Jason. *DynCorp's Drug Problem*. *The Nation*. Julio 16 de 2001.  
<https://www.thenation.com/article/archive/dyncorps-drug-problem/>

antinarcoóticos hubiera fallado era muy baja debido, principalmente, a que los alcaloides no se encuentran de forma natural en aceites combustibles. Por otro lado, Adam Isacson le dijo al diario británico que la falta de una versión única por parte de las entidades involucradas corresponde a un deseo de mantener en la opacidad las operaciones de DynCorp: “Parece que no tienen idea de cuál fue el resultado de este caso, y no parece que tengan un gran deseo de saber qué sucedió (...) No quieren que nada descarrile el Plan Colombia, y la clave para eso es la voluntad de permitir que los contratistas operen en casi total secreto”.

El eco del artículo de *The Nation* tardó un mes en resonar en la prensa colombiana. En el artículo “Mercenarios” de *Semana* se recogen los hallazgos del diario británico y adiciona la versión de Enrique Gilibert, el director de la policía en ese entonces. Gilibert rechazó vehementemente las acusaciones de DynCorp hacia la calidad de las pruebas.<sup>312</sup> Por otro lado, en la revista *Semana* también se señala que, tras el envío de las muestras a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el proceso pasó a la Fiscalía 271 de la Unidad II de Seguridad y adquirió el nombre de proceso 483064, sin embargo, no se conoció de posteriores avances en la investigación. Según esta revista, la falta de respuesta de las autoridades colombianas no fue una novedad, señalando que en el hospital de Florencia falleció un operario de DynCorp, Michael Demons, por sobredosis de cocaína y los documentos del caso desaparecieron en la entidad. Igualmente, la Revista *Semana* denunció la desaparición de los documentos relativos a una investigación de la Fiscalía del año 1999 concerniente a diez funcionarios de DynCorp involucrados en negocios con anfetaminas.

La investigación de *Semana* tiene que ver con la falta de supervisión de las aeronaves de DynCorp. Según una fuente, que no revelan en el artículo, ninguna autoridad colombiana cuenta con la autorización para inspeccionar las aeronaves, dado que estas actividades sólo podían ser realizadas por la *Narcotics Affairs Section*, es decir, la embajada de Estados Unidos, lo que nos devuelve a donde empezamos.

---

<sup>312</sup> *Semana*. “Mercenarios”. *Semana.com*. Agosto 13 de 2001.  
<https://www.semana.com/nacion/articulo/mercenarios/46935-3/>

### 3. De receptor a donante, ¿una nueva forma de la injerencia acordada?

En el paso de Plan Patriota hacia el Plan Consolidación, y previo al inicio de las negociaciones de paz con las FARC, se desarrolló desde Washington una nueva estrategia de cooperación hacia Colombia. Con base en los éxitos obtenidos en el plano militar, y bajo la necesidad de consolidar dichas ganancias territoriales, desde el Ministerio de Defensa, dirigido por Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo, se acudió a la Oficina de Inicativas de Transición (OTI, por sus siglas en inglés) de las USAID, con el objetivo de redireccionar la ayuda estadounidense precisamente hacia el logro de dichos objetivos de consolidación. Esto permitió, inicialmente, el desarrollo del Programa Inicial de Respuesta a la Gobernanza (IGRP por sus siglas en inglés), cuyos objetivos eran fortalecer la credibilidad y la legitimidad del gobierno en las áreas de posconflicto, o “zonas de consolidación”; aumentar la voluntad y la capacidad de las comunidades de las zonas de consolidación para cooperar e interactuar con el gobierno, y aumentar la capacidad gubernamental para responder a las necesidades prioritarias de la comunidad de manera oportuna. Para lograr estos objetivos, el IGRP trabajó con Acción Social y con el Centro de Coordinación de la Acción Integral (CCAI).

En 2007, la OTI ayudó al gobierno colombiano a crear el Plan Integral de Consolidación de La Macarena<sup>313</sup> (PCIM), un proyecto dirigido a los seis municipios del sur del departamento del Meta, cerca del parque nacional de La Macarena, durante mucho tiempo bastión de la guerrilla. En 2009, el enfoque del PCIM se convirtió en el modelo del Plan Nacional de Consolidación (PNC) de Colombia. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá lanzó la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia (CSDI) para coordinar la asistencia estadounidense a estos esfuerzos de consolidación entre todas las agencias estadounidenses de desarrollo, diplomacia y defensa que operan en Colombia.

A través de la IGRP (y en coordinación con la CSDI), la OTI siguió apoyando el componente de ayuda del programa de consolidación en el Meta, una vez que el PCIM pasó a formar parte de la PNC. Posteriormente, el IGRP apoyó en el departamento de Tolima

---

<sup>313</sup> Para profundizar este tema y ver los impactos sobre el campesinado cocalero, se recomienda revisar el capítulo de hallazgos y recomendaciones.



y la subregión de los Montes de María en el Caribe colombiano y prestó asistencia técnica para la formulación de planes operativos en las regiones del Bajo Cauca antioqueño, sur de Nariño y San Vicente del Caguán, Caquetá.

En ese sentido, la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia, puede ser leída como una sucesión de Plan Colombia, teniendo en cuenta que si bien pretendió abordar el tema del conflicto armado desde una mirada mas centrada en el desarrollo, el componente militar estuvo presente desde el inicio:

“La Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia (CSDI), que fue concebida durante el año anterior como sucesora del Plan Colombia. La CSDI es el plan interinstitucional de la Embajada para apoyar el Plan Nacional de Consolidación (PNC) del Gobierno de Colombia para ampliar la presencia del Estado a zonas anteriormente controladas por grupos armados ilegales. Hemos formado un comité ejecutivo de la CSDI compuesto por los jefes de sección y de agencia de USAID, la Sección de Asuntos Narcóticos, el Grupo Militar y el Político para facilitar la coordinación interinstitucional.”<sup>314</sup>

Además del énfasis militar advertido dentro de la iniciativa, la cooperación y asistencia brindada por parte de una de las agencias implementadoras, el MILGRP, pretendió *posicionar paulatinamente a Colombia como un socio estratégico en materia de cooperación en seguridad hemisférica*. De manera explícita, el embajador Brownfield sugirió, en 2010, que la asistencia brindada en el marco de esta reiteración de Plan Colombia debía servir para “apoyar los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos en el mundo”. En ese sentido, la Iniciativa no sólo permitió continuar avanzando con los objetivos en materia de seguridad y estabilización al interior del país, conduciendo eventualmente a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, sino que ha garantizado que Colombia se posicione cada vez más como un oferente de cooperación en seguridad hacia la región latinoamericana y otras latitudes.

De hecho, desde mediados de los años 2000, Colombia ha recibido un número creciente de solicitudes y ha aumentado su oferta de cooperación en seguridad a distintos gobiernos en

---

<sup>314</sup> U.S. Embassy, cable. “Telling Colombia's Story: From Failing State to Stable Ally”, octubre 2009. Wikileaks. [https://wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA3362\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA3362_a.html)



toda América Latina y el resto del globo. Hasta la primera elección de Santos, en 2010, las solicitudes que llegaban a Colombia para la cooperación en seguridad fueron tratadas de manera desestructurada. Ejemplo de esto fue la participación en 2007 de la Policía Nacional en la capacitación de sus homólogos en Afganistán y la colaboración en actividades de capacitación entre los cuerpos de seguridad y la rama judicial en México a través del Plan Mérida, así como su participación en las metas de seguridad contempladas por el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), que resaltaron positivamente el potencial de la coordinación entre Washington y Bogotá<sup>315</sup>.

Posteriormente, estas acciones adquirieron un talante más estratégico, convirtiéndose en parte de la política exterior del país. A su vez, incorporó el tema al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos” mediante la creación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012-2014. Esta se desarrolló, incluso, por áreas geográficas prioritarias, incluyendo el Caribe, Mesoamérica, Sudeste Asiático, Eurasia, y África. En este sentido, se concretó la Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral, coordinada por la Cancillería, encargada de interactuar con los gobiernos extranjeros y coordinar los esfuerzos específicos de cooperación con el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía (PNC) y la APC. Según información del MRE sobre esta estrategia, Colombia ofrece un portafolio de servicios “a la carta” en siete áreas –desarrollo organizacional, lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, derechos humanos y derecho internacional humanitario, y capacidades operativas– y adapta la cooperación a las necesidades de cada solicitante a través de un diagnóstico inicial sobre la seguridad y las capacidades institucionales del receptor; la planificación y recaudación de fondos; la ejecución; y el seguimiento y la evaluación.<sup>316</sup>

Más allá de la búsqueda de mayores márgenes de maniobra y de liderazgo regional e internacional, la cooperación internacional en seguridad también se ha desarrollado en función de la relación de Colombia con Estados Unidos. Así, y de forma paralela a los

---

<sup>315</sup> Tickner, Arlene. *Colombia, the United States and Cooperation by Proxy*. Washington Office on Latin America (WOLA), 2014. <http://www.wola.org/es/node/4402>

<sup>316</sup> Tickner, Arlene y Mateo Morales, “Cooperación dependiente asociada. Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados Unidos”. *Colombia Internacional* 85, 171-205, 2015. Pp.194.

esfuerzos individuales del país por potenciar la “historia de éxito” –sin contemplar las graves violaciones de derechos humanos del periodo– y convertirse en un exportador de seguridad, en febrero de 2012 se inauguraron los Diálogos de Alto Nivel en Seguridad Estratégica (HLSSD por sus siglas en inglés) con Washington. Varios meses después, en la Cumbre de Cartagena, los presidentes Obama y Santos anunciaron la creación de un Plan de Acción para la Cooperación Regional en Seguridad para apoyar la construcción de capacidades en América Central, el Caribe y África Occidental.

Desde la perspectiva de Washington, y en seguimiento de la estrategia de “entrenar a entrenadores”, en la medida en que Estados Unidos “lidera desde atrás”, apoyando a Colombia como “hacedor de seguridad”, Colombia le ayuda a capacitar a otros, generando un efecto multiplicador en aquellos países de Mesoamérica y el Caribe considerados problemáticos en términos de inseguridad y violencia. Por su parte, el interés colombiano le ha apuntado, simultáneamente, a madurar la asociación estratégica con el país del norte y aumentar los niveles propios de influencia en el hemisferio<sup>317</sup>.

En el centro de la cooperación triangulada colombo-estadounidense está la idea de que Colombia tiene instalaciones, equipos, *know-how* y entrenadores que pueden ser utilizados a un menor costo económico, con resultados potencialmente mejores y sin los riesgos políticos asociados con una presencia militar directa de Estados Unidos. Por medio de este tipo de cooperación se reproducen las lógicas de seguridad de Estados Unidos, con los costos en materia de Derechos Humanos que estas enseñanzas traen consigo.

“Entre 2009-2013, la Policía Nacional de Colombia dio entrenamiento militar y policial a 21,949 efectivos de 47 países distintos. De esta manera, EUA exporta su doctrina y prioridades para el entrenamiento militar y policial a otros países y puede evitar obligaciones de transparencia y restricciones de derechos humanos impuestas por el Congreso de los EUA. Y cabe pensar que se exportan las prácticas violatorias de derechos humanos de las fuerzas de seguridad colombianas a otros países. En el marco del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia para la Seguridad Regional (USCAP), entre 2013 y 2017, Colombia entrenó casi 17.000 efectivos de Panamá,

---

<sup>317</sup> Ibid. Pp. 198.



Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y la República Dominicana. En el 2011, 7.000 mexicanos habían recibido entrenamiento por colombianos con financiamiento de los EUA. Destaca la formación de la policía colombiana, con el apoyo de los EUA, a los TIGRES de Honduras, estructura policial implicada en la brutal represión a las protestas masivas que se sucedieron tras el fraude en las elecciones de noviembre 2017”.<sup>318</sup>

A nivel discursivo se ha tratado de posicionar al país, tanto desde Estados Unidos como dentro de la oficialidad colombiana, como un caso de éxito en materia de cooperación en seguridad, situación que ni siquiera se logró en Afganistán tras una inversión de más de 780 billones de dólares. Este posicionamiento, sin embargo, es muy problemático en diversos aspectos. Por una parte, avala y legitima planes de cooperación como el Plan Colombia, cuyos resultados e impactos sobre el territorio nacional fueron cuestionables e incluso poco eficaces, si se tiene en cuenta que esta se consolidó como una estrategia en contra del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito.

Por otro lado, termina legitimando a unas fuerzas de seguridad que siguen teniendo señalamientos muy graves en materia de violaciones de derechos humanos, y genera la falsa sensación de que en Colombia el conflicto armado tuvo un cierre, cuando la realidad ha evidenciado que, sobre todo en las zonas de frontera como en la región del Catatumbo, y los departamentos de Arauca y Putumayo la violencia sigue viva y la presencia de actores armados es visible.

Finalmente, esta utilización de la historia de éxito de Colombia ha tenido el objetivo de poner sobre terceros la transferencia de conocimientos en materia de seguridad. Esto, por supuesto, es de gran beneficio para Estados Unidos, en la medida en que únicamente tienen que preocuparse por la transferencia de fondos para los proyectos de cooperación, más no involucrase directamente en este tipo de actividades, con lo que, ante cualquier escenario de violaciones a los derechos humanos, pueden generar un distanciamiento creíble y una descarga de responsabilidades.

---

<sup>318</sup> Informe 748-CI-00658 Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch et al. Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. 2020. Pp. 63.



En este sentido, se hace necesario una mirada más crítica al proceso de asistencia militar que ha recibido históricamente Colombia por parte de los EEUU. Aunque sin duda fue importante la asistencia en algunos momentos puntuales ha permitido la profesionalización de la fuerza pública, esta no ha ido acompañada ni de ejercicios estrictos de rendición de cuentas al interior de Colombia, ni de una política decidida en materia de derechos humanos que impida la estigmatización de la población. Es claro que se han dado capacitaciones en la materia, pero a todas luces han sido ineficientes e insuficientes. La búsqueda de resultados y el afán por mostrar éxitos operacionales llevó a falsos positivos y a constantes atropellos contra la población civil.

Por eso se han sido tan importantes los controles al interior del congreso de los EEUU, con enmiendas como la Leahy, que han permitido tener algunos controles. Pero sin lugar a duda han sido ausentes los controles por parte del Estado colombiano. Es su tarea tener una clara voluntad de verificación y monitoreo de la asistencia militar, de la presencia de contratistas de seguridad y de personal extranjero en su territorio. No se puede continuar afirmando que al ser un tema de seguridad nacional las demás ramas del poder no pueden verificar estos temas. Por supuesto debe tener unos protocolos serios y bien establecidos, pero debe poder verificarse el cumplimiento de dichos protocolos.

## Referencias

### **Fuentes primarias internas de la Comisión de la Verdad**

—Entrevista 001-VI-00008, Líder de UP, víctima, exilio. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición - CEV. 2019.

—Entrevista 118-PR-00380, Defensor de DDHH, tortura. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 118-PR-00380, Defensor de DDHH, tortura. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 122-PR-00492, Fuerza Pública, operaciones con objetivos del alto valor, inteligencia militar. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 142-PR-00398, Fuerza Pública, vida militar. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 189-VI-00189, guerrilla, impacto humano del conflicto, Caldonó. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2019;

—Entrevista 189-VI-00196, víctima, guerrilla, secuestro. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2019.

—Entrevista 189-VI-00196, víctima, secuestro, Miraflores. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2019.

—Entrevista 220-AA-00003 Fuerza Pública, Bucaramanga. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2019.



—Entrevista 084-PR-00332. Hombre, soldado, compareciente ante la JEP. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 084-PR-02990. Actor armado, militar compareciente, teniente coronel. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 240-AA-00001, Guerrilla, grupo paramilitar. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 240-AA-00006, grupo paramilitar, dinámicas y patrones de violencia. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2019.

—Entrevista 311-PR-00003, Bogotá. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020

—Entrevista 311-PR-00411 Experto, testigo, relaciones exteriores. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 311-PR-00633, defensor de DD.HH, Experto, asistencia militar y violaciones de derechos humanos. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 311-PR-00652, defensor de DD.HH, Experto, Compañías de seguridad militar. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 311-PR-02117, Fuerza Pública, doctrina militar, asistencia militar extranjera. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020-2021.

—Entrevista 311-PR-03101, Actor armado, comisión internacional, dinámica de la guerra. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2021.



—Entrevista 655-PR-02149, Experto, Ayuda militar, Plan Colombia. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 655-PR-02151, funcionario público, experto, cooperación internacional militar. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 084-PR-02882, Excombatiente, FARC, Comandante. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2021.

—Entrevista 655-PR-02491, Experto, Estados Unidos, Transformación de las Fuerzas Militares. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2020.

—Entrevista 187-VI-00001, víctima, grupo paramilitar, Puerto Asís, Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2019.

—Entrevistas; treinta (30), desmovilizados de las estructuras que conformaron el bloque sur de las FARC, Caquetá, Putumayo, Huila, frontera con Ecuador. Información sobre estructura, modus operandi, finanzas, participación en economías ilegales. Archivo físico de la CEV.

—Entrevista de contraste 311-EC-DI-001, alto mando de la Policía Nacional. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2021.

—Entrevista 311-PR-03221, expresidente del Ecuador, Rafael Correa. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV. 2021.

—Entrevista 87-VI-00027. Hombre, Presidente de Junta de Acción Comunal, Huila. Tomada por Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV.

—Informe 066-CI-00552 Aviación y asalto aéreo del Ejército Nacional. La División de Asalto Aéreo en el conflicto armado interno colombiano. 2019.



—Informe 365-CI-01177 Corporación viva la ciudadanía. Allá la vida nos pertenecía... aquí nos tenemos que defender solas. 2021

—Informe 748-CI-00658 Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOA Watch et al. Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. 2020.

—Informe 748-CI-00648. El daño que nos hacen. Glifosato y guerra en Caquetá. 2020.

—CIA, cable “Colombia: Prospects for Peace”, 19850500, 1985. National Security Archive, Washington.

—CIA, cable, “Peace and War in Colombia”, 19851112, 1985. National Security Archive, Washington

—CIA, “Narco-Insurgent Links in the Andes,”, 199110800, July 29, 1991. Washington, NSA.

—DEA, cable, “Drug Intelligence Report, Insurgent Involvement in the Colombian Drug Trade”, 19940600, June 1994. Washington, NSA.

—Defense Intelligence Agency, cable, “Smuggling Trends in the Department of Huila,” 199331201, December 1, 1993. Washington, NSA.

—Departamento de Agricultura de Estados Unidos. “19971100ca USDA Concern About Non-Target Damage”. 1997. Reporte de viaje: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17E19jQFkiMRIwfgNSHFeB8YL9HnIKR68>

—Departamento de Seguridad e INL. “20030200”. 2003. Evaluación mensual de contrato. [https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gmfTR7SjNkHKAU\\_8IN-8kGC3dp\\_St7w0](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gmfTR7SjNkHKAU_8IN-8kGC3dp_St7w0)

—DynCorp. “20031016 DynCorp letter on dangers of program.” 2003. Correspondencia: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17E19jQFkiMRIwfgNSHFeB8YL9HnIKR68>

—DynCorp. “Dyncorp Letter On Dangers Of Program And Desired Military Role”. 2003. Memorandum.

—Embajada de Estados Unidos en Colombia . “20011031-EMB-US to fund Compensation Program For Spray Related Harm”. 2001. Cable:



- \_\_\_\_\_. “19950206 EM para 6 Specious Claims Dismissed.” 1995. Cable:
- \_\_\_\_\_. “19971107 EMB p2 Drift Control Agents.” 1997.
- \_\_\_\_\_. “20020302 EMB Eradication program danger”. 2002. Cable.
- \_\_\_\_\_. “20081124-EMB-P10-US Paid More than 450000-114 Claims Since 2001.” 2008.
- INL “200010200”. 2001. Evaluación de contrato:
- INL “20010100ca INL p2 Spraying in no spray zone”. 2001. Evaluación de contrato.
- INL “20010100ca INL p2 spraying no spraying zone.” 2001. Evaluación de contrato.
- INL “20020200ca”. 2002. Evaluación de contrato.
- INL “20020800-20020927”. 2002. Evaluación de contrato.
- INL “20020900-20021022”. 2002. Evaluación de contrato:
- INL “20030300-20030421”. 2003. Evaluación de contrato:
- INL y Departamento de Seguridad. “20030200 DynCorp HVT Support.” 2003. Evaluación de Contrato.
- INL. “19970528 INL p3 Too fast and too high”. 1997. Evaluación de contrato:
- INL. “19970800CA-INL-Verified Damage to Licit Crops-Significant”. 1997. Evaluación de contrato.
- INL. “19980921 INL p6 No Flight Following Procedures”. 1998, Evaluación de contrato:
- INL. “2000 Push Putumayo”. 2000. Evaluación de Contrato
- INL. “20000600-20000827.” 2000. Evaluación de contrato:
- INL. “20020900 INL p16 Palm Tree Spraying Issue”. 2002. Evaluación de contrato.
- INL. “20020900-20021022”. 2002. Evaluación de contrato.
- INL. “20030200ca INL p13 chemical dumps to land planes”. 2003. Evaluación de contrato.



- INL. “20030200CA INL p13 chemical dumps to land planes”. 2003. Evaluación de contrato.
- INL. “20040300”. 2004. Evaluación de contrato.
- INL. “20040430 EMB EUM”. 2004. Cable.
- INL. “9970800CA-INL-Verified Damage to Licit Crops-Significant”. 1997. Evaluación de contrato:
- Tribunal Permanente de los Pueblos Sesión Colombia. Acusación contra la Transnacional DynCorp. 2007. CAJAR.
- U.S. Embassy Bogotá. Cable, “Ambassador’s January 12 Meeting with New MOD [Minister of Defense] Designate.” 1997. National Security Archive, Washington;
- \_\_\_\_\_. Cable, “GOC Claims to have Dismantled 17 paramilitary groups in past year”.16443. 1988. National Security Archive, Washington.
- \_\_\_\_\_. Cable, “Reports of Mercenary Presence Continue but Remain Unconfirmed”. 262336z. 1998. National Security Archive, Washington.
- \_\_\_\_\_. Cable, Military Assistance to Colombian Army’s 7th and 12th.” 1998. National Security Archive, Washington.

### **Fuentes primarias externas**

- Barstow, David. “One Man’s Military-Industrial-Media Complex.” *New York Times*. Noviembre 29 de 2008. <https://www.nytimes.com/2008/11/30/washington/30general.html>
- Bigwood, Jeremy. “Toxic Drift: Monsanto and the Drug War in Colombia”. Corpwatch. Junio 21 de 2001. <https://corpwatch.org/article/toxic-drift-monsanto-and-drug-war-colombia>
- Bowden, Mark. “Flight Risk. When a U.S. company ignored pilot warnings in Colombia, four Americans died, and three were taken captive”. *Global*. 2009. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2009/07/flight-risk/307492/>



- Brittain, James. “Colombia: The objective reality of Plan Patriota - A response to subjective propaganda”. OCHA services – reliefweb. Enero 24 de 2005. <https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-objective-reality-plan-patriota-response-subjective-propaganda>
- Burghardt, Tom. Washington’s «Private Warriors». *The Mail Archive*. 2001. <https://www.mailarchive.com/kominform@lists.eunet.fi/msg08775.html>
- Cable de remitente desconocido “FARC guerrilla commanders and paramilitary group members comment on their organization and activities” 1999. National Security Archive, Washington. <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB287/19990203.pdf>;
- CBSNEWS. “The Secret Warriors: Covert War in Colombia”. 1999. Documento digital, disponible en <https://www.cbsnews.com/news/the-secret-warriors/>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. *La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra*. Taurus. 2009. <http://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/3.-La-masacre-de-”El-Salado.pdf>
- CIA, “Best Practices in Counterinsurgency: Making High-Value Targeting Operations an Effective Counterinsurgency Tool”. Diciembre, 2014. Wikileaks. <http://wikileaks.org/cia-hvt-counterinsurgency>
- Colombia Solidarity Campaign. “BP And The US-Colombia Business Partnership.” Abril 1 de 2003. <https://www.colombiasolidarity.org.uk/2003/04/bp-and-the-us-colombia-business-partnership>
- Comité Internacional de la Cruz Roja. 2008. <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm>
- Cook, Geraldine. “Colombian Special Forces: Operational Success through Joint Work”. *Diálogo*. Abril 8 de 2019. <https://dialogo-americas.com/articles/colombian-special-forces-operational-success-through-joint-work/>
- de la Garza, Paul y David Adam. “Colombia: US Military Aid from the Private Sector,” Corpwatch. 2 de diciembre de 2000. <https://corpwatch.org/article/colombia-us-military-aid-private-sector>



- Defense Intelligence Agency, Intelligence Information Report. “Cashiered Colonel Talks Freely About the Army He Left Behind”. 1997. National Security Archive, Washington. <https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEPP/NSAEPP166/19971224.pdf>;
- Department of the Air Force. Air Force Policy Directive 16-1, Security Cooperation. Enero 16 de 2019. [https://static.e-publishing.af.mil/production/1/saf\\_ia/publication/afi16-113/afi16-113.pdf](https://static.e-publishing.af.mil/production/1/saf_ia/publication/afi16-113/afi16-113.pdf)
- Documentos Santa Fe I. 1980.
- Donadío, Alberto. Virgilio Barco y el exterminio de la UP. *Los Danieles*. Enero 10 de 2021. [https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/?utm\\_source=twitter&utm\\_medium=social-media&utm\\_campaign=addtoany](https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_campaign=addtoany)
- Donahue, Sean. “The Other Harken Energy Scandal”. Counterpunch. Julio 12 de 2002. <https://www.counterpunch.org/2002/07/12/the-other-harken-energy-scandal/>
- Dunning, Thad y Leslie Wirpsa. “Oil Rigged There’s Something Slippery about the U.S. Drug War in Colombia”. *Amazon Watch*. Febrero 15 de 2001. <https://amazonwatch.org/news/2001/0215-oil-rigged>
- Casa editorial El Tiempo. “E.U cuidará sus intereses en Colombia”. *El Tiempo*. Febrero 10 de 2002. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1324656>
- \_\_\_\_\_. “En Colombia, 55 del terrorismo en el mundo”. *El Tiempo*. Mayo 22 de 2002. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1322571>;
- \_\_\_\_\_. “Petrolera de Bush reevalúa permanencia en Colombia”. *El Tiempo*. Marzo 16 de 2001. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-589827>
- \_\_\_\_\_. “La muerte de Alexander Ross”. *El Tiempo*. Octubre 15 de 2003. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1009855>
- Embajada de Colombia en EE. UU. “Plan Colombia: Una Hoja de Ruta para las Relaciones Futuras entre EE. UU. y Colombia y la Región el 27 de abril y 4 de mayo de 2021”. Seminarios web de cuatro partes.



\_\_\_\_\_. “Plan Colombia: Una Hoja de Ruta para las Relaciones Futuras entre EE. UU. y Colombia y la Región: La Perspectiva del Congreso - El Bipartidismo en su mejor momento”. 27 de mayo de 2021.

\_\_\_\_\_. “Guerrilla Attack in Putumayo: An “Offensive” in the Making?”. 1994. DNSA, documento número 15.

\_\_\_\_\_. “Plan Colombia Implementation Meeting”. DNSA, documento número 40.

\_\_\_\_\_. “Plan Colombia Implementation”. 2003. DNSA, documento número 40

\_\_\_\_\_. “Plan Colombia Meeting”. 2001. DNSA, documento número 68.

Farsetta, Diane. “An Officer and a Conflicted Man: McCaffrey, the Pentagon and Fleishman-Hillard”. *Center for Media & Democracy*. Diciembre 7 de 2008. <https://www.commondreams.org/views/2008/12/07/officer-and-conflicted-man-mccaffrey-pentagon-and-fleishman-hillard>

Forero, J. “Role of U.S. Companies in Colombia Is Questioned.” *The New York Times*. Mayo 18 de 2001. <https://www.nytimes.com/2001/05/18/world/role-of-us-companies-in-colombia-is-questioned.html>

\_\_\_\_\_. “U.S. Pilots Fight Coca in Colombia”. *The New York Times*. 2001. <https://www.nytimes.com/2001/08/17/world/us-pilots-fight-coca-in-colombia.html>

—Fuentes de Archivo Externas, EXT20-71528. Policía Nacional de Colombia. “14.09.2020 1997 acuerdos de cooperación usa - Colombia 3 parte”. 1997;

—General Accounting Office. *The Drug War: Colombia is Undertaking Antidrug Programs, but Impact is Uncertain*. GAO. 1993.

—Goff, Stan. “Inside U.S. Counterinsurgency: A Soldier Speaks”. *Consortium News*. Diciembre 22 de 1999. <https://www.consortiumnews.com/1999/122299a.html>

—Listados de Graduados en la Escuela de las Américas. Datos Oficiales de SOA/WHINSEC. 2018. <https://soaw.org/graduados-de-soa>

—Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios del Consejo de Derechos Humanos. *Informe sobre los avances logrados en la elaboración de un proyecto de instrumento*



*jurídico, para su debido examen y actuación por el Consejo de Derechos Humanos.*  
Referencia Naciones Unidas A/HRC/15/25. 2010.

—House Hearing, 106 Congress. “The crisis in Colombia: what are we facing?”. Hearing before the Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, and Human Resources of the Committee on Government Reform House of Representatives, second session. Febrero 15 de 2000. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-106hrg66788/html/CHRG-106hrg66788.htm>

\_\_\_\_\_. “The Narcotics Threat from Colombia”. Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy, And Human Resources Of The Committee On Government Reform House Of Representatives One Hundred Sixth Congress, First Session. Agosto 6 de 1999. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-106hrg65738/html/CHRG-106hrg65738.htm>

—Huffington, Arianna. “Chopper wars”. *Salon*. Junio 30 de 2000. [https://www.salon.com/2000/06/30/chopper\\_wars/](https://www.salon.com/2000/06/30/chopper_wars/)

—Human Rights Watch. *Colombia’s Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States*. HRW-Project. 1996.

\_\_\_\_\_. *La “Sexta División”: relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia*. HRW. 2001

—Karon, Tony. “Gore's Big Oil Connection: An 'Occident' of Birth?” *Time*. 25 de septiembre de 2000. <http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,55826,00.html>

—Mann, Jim. “A Government by the People, for the Military-Industrial Complex.” *Los Angeles Times*. 27 de septiembre de 2000. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2000-sep-27-mn-27528-story.html>;

—Miroff, Nick. “‘Plan Colombia’: How Washington learned to love Latin American intervention again”. *Washington Post*. Septiembre 18 de 2016.

—National Security Action Memorandum 162, “Development of U.S. and Indigenous Police, Paramilitary and Military Resources,” 19 June 1962.



- Oil Watch. La manera occidental de extraer petróleo. Oilwatch.org. 2001.
- OpenSecrets.org. “DynCorp PAC Contributions to Federal Candidates”. *OpenSecrets.org, Center for Responsive Politics*. <https://www.opensecrets.org/political-action-committees-pacs/dyncorp/C00131383/candidate-recipients/2000>
- Organización de las Naciones Unidas. “Principios Rectores Sobre Las Empresas y Los Derechos Humanos”. ONU. 2011. Pp. 18.
- Patiño Simón, Ben Miller, y Dost Bardouille. Oleoducto Central S.A. y el Plan de Mantenimiento Civil. CDA Collaborative Learning Projects y FIP. 2017.
- Penhaul, Karl. Americans Blamed in Colombia Attack. *San Francisco Chronicle*. Junio 15 de 2001. <https://www.mail-archive.com/kominform@lists.eunet.fi/msg07822.html>
- Priest, Dana. “Covert action in Colombia. U.S. intelligence, GPS bomb kits help Latin American nation cripple rebel forces”. *The Washington Post*. Diciembre 21 de 2013. <https://www.washingtonpost.com/sf/investigative/2013/12/21/covert-action-in-colombia/>
- Revista Semana. “Mercenarios”. *Semana.com*. Agosto 13 de 2001. <https://www.semana.com/nacion/articulo/mercenarios/46935-3/>
- Serafino, Nina. *Colombia: Conditions and U.S. Policy Options*. Washington: Congressional Research Service/ The Library of Congress. 2001.
- \_\_\_\_\_. “Requests for Further EUM [End-Use Monitoring] Information Regarding COLAR [Colombian Army] 12th Brigade.” 1998. National Security Archive, Washington;
- \_\_\_\_\_. Bureau of Intelligence and Research, Intelligence Assessment “Colombia: A Violent Backdrop”. 1998. National Security Archive, Washington. <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB166/19980106.pdf>
- Taylor, Francis. Overview on global terrorism. *State.gov*. 2002. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/10291.pdf>
- The Center for International Policy’s Latin American Security Program. “Colombia -- The Way Ahead”. Remarks by James Hill, Commander of the U.S. Southern Command, Center



for Strategic and International Studies. 2003.

[https://adamisacson.com/files/old\\_cip\\_colombia/030910hill.htm](https://adamisacson.com/files/old_cip_colombia/030910hill.htm)

—The Guardian. BP hands 'tarred in pipeline dirty war'. The Guardian. Octubre 17 de 1998.

<https://www.theguardian.com/world/1998/oct/17/1>

—The Mail Archive. “Fw: [STOPNATO.ORG.UK] Colombia: U.S. 'Outsourcing A War' With Military, CIA Mercenaries”. *The Mail Archive*. Septiembre 21 de 2000.

<https://www.mail-archive.com/koinform@lists.eunet.fi/msg03545.html>

—The Mail Archive. “Latin America News 12/10”. *The Mail Archive*. Diciembre 14 de 2000.

<https://www.mail-archive.com/koinform@lists.eunet.fi/msg04897.html>

\_\_\_\_\_. “US crews involved in Colombian battle”. *The Mail Archive*. Febrero 26 de 2001. <https://www.mail-archive.com/koinform@lists.eunet.fi/msg06032.html>

\_\_\_\_\_. Colombia: Outsourcing the war. The Mail Archive. Mayo 12 de 2001.

<https://www.mail-archive.com/koinform@lists.eunet.fi/msg07183.html>

U.S. Department of State, cable, “NAS/GOC Aerial Drug Eradication Program,” 199660926, 1996, Washington, NAS.

\_\_\_\_\_. “Foreign Military Training: Joint Report to Congress, Fiscal Years 2003 and 2004”. Bureau of Political-Military Affairs, junio de 2004. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/34338.pdf>

\_\_\_\_\_. “Foreign Military Training: Joint Report to Congress, Fiscal Years 2005 and 2006”. Bureau of Political-Military Affairs, septiembre de 2006. <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/74800.pdf>

\_\_\_\_\_. “The Colombia Strategic Development Initiative (CSDI)”, marzo, 2011. <https://2009-2017.state.gov/p/wha/rls/fs/2011/158620.htm>

\_\_\_\_\_. Backgrounder, “Blackhawk Helicopter Sale Request-Colombian Army”. 1996. National Security Archive, Washington.

\_\_\_\_\_. Cable, “Military Assistance to the Colombian Army’s 7th Brigade and 2nd Mobile Brigades.” 1998. National Security Archive, Washington;



\_\_\_\_\_. “El Salado Massacre revisited in light of New York Times article”. 2000. National Security Archive, Washington  
<https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB287/20000720.pdf>;

—U.S. Embassy Colombia. Cable, “Aerial Eradication Division Resumes Spray Operations: Tactics, Training, and What to Expect,” February 7, 1997, Confidential.

\_\_\_\_\_. Cable. “Military gives their views on El Salado Massacre”. 2000. National Security Archive, Washington.  
<https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB287/20000825a.pdf>

\_\_\_\_\_. Cable “Colombian military: Our judiciary requires no reform” 1999. National Security Archive, Washington.  
<https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB287/19990115.pdf>;

\_\_\_\_\_. Cable “Three paramilitary massacres on Colombia’s North Coast” 2000. National Security Archive, Washington.  
<https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB287/20000224.pdf>

\_\_\_\_\_. Cable, “Aerial Eradication in Guaviare, Caquetá and Putumayo: Things Heat Up as DANTI [Colombian National Police Anti-Narcotics Division] and COLAR [Colombian Army] Increase the Pressure on Miraflores and Environs; COLAR Launches “Operation Conquest II” into Caquetá and Putumayo.” 1996. National Security Archive, Washington;

\_\_\_\_\_. Cable, “Colombia EUM [End-Use Monitoring] Update: Final Data Received.” 1998. National Security Archive, Washington.

\_\_\_\_\_. “Hold on Sec. 506 Shipment for Colombian Military.” 1997. National Security Archive, Washington.

\_\_\_\_\_. Cable, “Human Rights Review of Unit Proposed Under End-Use Monitoring Agreement: Colombia’s JTF-S (“Joint Task Force South”) Command Element.” 2000. National Security Archive, Washington.

\_\_\_\_\_. Cable, “Military Assistance to Colombian Army’s 7th and 12th Brigades, and 2nd ‘Brim.’” 1998. National Security Archive, Washington.



- \_\_\_\_\_. Cable, “Part of the 1st CN Battalion Deployed to Southern Putumayo; Logistical Support from 24th Brigade.” 2000. National Security Archive, Washington.
- \_\_\_\_\_. Cable, “The Proposed Sale of UH-60L Helicopters to Colombia,” 1996. National Security Archive, Washington.
- \_\_\_\_\_. Cable. “El Salado Massacre revisited”. 2000. National Security Archive, Washington. <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB287/20000719.pdf>;
- \_\_\_\_\_. Cable. “Telling Colombia's Story: From Failing State to Stable Ally”, octubre 2009. Wikileaks. [https://wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA3362\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/09BOGOTA3362_a.html)
- \_\_\_\_\_. Cable. “Colmil: Jtf-O onto a More Aggressive Footing”, diciembre 2006, Wikileaks. [https://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA11488\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA11488_a.html)
- \_\_\_\_\_. Cable. “Colombia Scen setter for Codel Lemieux”, febrero, 2010. [https://wikileaks.org/plusd/cables/10BOGOTA239\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/10BOGOTA239_a.html)
- \_\_\_\_\_. Cable. “Goc Efforts to Win Popular Support in Conflict Zones”. Novimebre, 2006. Wikileaks. [http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA10526\\_a.html](http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA10526_a.html)
- \_\_\_\_\_. Cable. “Goc Initiates Interagency Social Assistance Projects”. Mayo, 2004. Wikileaks. [http://wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA5077\\_a.html](http://wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA5077_a.html)
- \_\_\_\_\_. Cable. “The Soft Side Of Plan Colombia - Special Social Programs of the Uribe Administration”. Marzo, 2006. Wikileaks. [http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA2804\\_a.html](http://wikileaks.org/plusd/cables/06BOGOTA2804_a.html)
- \_\_\_\_\_. Cable. “Colombian Military Civil Affairs Unit Plans Changes”. Febrero, 2007. Wikileaks. [https://wikileaks.org/plusd/cables/07BOGOTA1401\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/07BOGOTA1401_a.html)
- \_\_\_\_\_. Cable. “Peace Labs: The Bottom-Up Approach to Governance, Peace and Development”. Octubre, 2008. Wikileaks. [http://wikileaks.org/plusd/cables/08BOGOTA3982\\_a.html](http://wikileaks.org/plusd/cables/08BOGOTA3982_a.html)



\_\_\_\_\_. Cable. “Plan Patriota Phase 2b: Status Report”. Diciembre, 2005. Wikileaks.  
[https://wikileaks.org/plusd/cables/05BOGOTA11357\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/05BOGOTA11357_a.html)

\_\_\_\_\_. cable. “Us Hostage Status: 18 Months in FARC Captivity”. Septiembre, 2004.  
Wikileaks. [https://wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA8900\\_a.html](https://wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA8900_a.html)

—United States Government Accountability Office. “PLAN COLOMBIA: Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; U.S. Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistance”. Report to the Honorable Joseph R. Biden, Jr., Chairman, Committee on Foreign Relations, U.S. Senate. 2008;

—US DoS. “1997BOGOTA06705”. EUM TALKS WITH DEFMIN AT DEAD END, RECOMMENDATION, The National Security Archive, Washington.  
<http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB69/col55.pdf>

—Van Dongen, Rachel. Colombia: US 'Private Army' Grows. Corpwatch. Septiembre 3 de 2003. <https://corpwatch.org/article/colombia-us-private-army-grows>

—Vest, Jason. DynCorp’s Drug Problem. *The Nation*. Julio 16 de 2001.  
<https://www.thenation.com/article/archive/dyncorps-drug-problem/>

—WikiLeaks. “The Future of the Infrastructure Security Strategy (ISS) Program”. UNCLAS SECTION 01 OF 03 BOGOTA 003103. Marzo 2 de 2004  
[https://search.wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA3103\\_a.html](https://search.wikileaks.org/plusd/cables/04BOGOTA3103_a.html)

### **Fuentes secundarias**

—Aguilar G., Orlando, Galeano, Carmen y Pérez B., Leonel. *Petróleo y Desarrollo*. Fondo FEN. 1998.

—Aguilera, Mario. *Las Farc: la guerrilla campesina, 1949-2010: ¿Ideas circulares en un mundo cambiante?* Corporación Nuevo Arcoíris, 2010.

—Avilés, William. US Intervention in Colombia: The Role of Transnational Relations. En *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 27, No. 3, pp. 410–429. 2008

—Behar, Olga y Carolina Ardila Behar. El caso Klein: el origen del paramilitarismo en Colombia. Codice. 2012. Pp. 39.



- Berder, Sharon. Environmentalists Help Manage Corporate Reputation: Changing Perceptions not Behaviour. *Ecopolitics: Thought and Action*, 1(4), 60-72. 2002.
- Borda, Sandra. *La internacionalización de la paz y de la guerra en Colombia durante los Gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe*. Bogotá. 2012.
- Borda, Sandra. La internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre: ¿la ejecución de una estrategia diplomática hábil o una simple ocurrencia de lo inevitable? *Colombia Internacional*, 65, 66-89. 2007.
- Borrero Mansilla, Armando. “Los militares: los dolores del crecimiento”. En F. Leal Buitrago, *En la encrucijada: Colombia en el siglo XXI* (págs. 113-146). Grupo Editorial Norma 2002.
- Branović, Željko y Sven Chojnacki. “The logic of security markets: Security governance in failed states”. *Security Dialogue*, 42 (6), 553-569. 2011.
- Bruneau, Thomas. *Restructuring Colombia’s Defense Establishment to Improve Civilian Control and Military Effectiveness*. Naval Postgraduate School. 2004.
- Cope, John. *Colombia's War: Toward a new Strategy*. Institute for National Strategic Studies. 2002.
- Crandall, Russell. *Driven by Drugs: U.S. Policy Toward Colombia*. Lynne Rienner Publishers. 2002.
- Dale, Peter. *Drugs, Oil and War. The United States in Afghanistan, Colombia and Indochina*. Rowman and Littlefield Publishers. 2003
- Deas, Malcom y María Victoria Llorente, *Reconocer la guerra para construir la paz*. Norma. 1999.
- Evans, Michael. *War in Colombia: Guerrillas, Drugs and Human Rights in U.S. Colombia Policy, 1988-2002*. The National Security Archive. 2002.
- Fellowship of Reconciliation. *Military Assistance and Human Rights: Colombia, U.S Accountability, and Global Implications*. FOR. 2010.



- Forsythe, David. Congress and Human Rights in U.S. Foreign Policy: The Fate of General Legislation. *Human Rights Quarterly*, 9, 382-404. 1987.
- Forsythe, David. U.S. Foreign Policy and Human Rights. *Journal of Human Rights*, 1 (4), 501-521. 2002.
- Fundación Seguridad y Democracia. *Fuerzas Militares para la guerra: la agenda pendiente de la reforma militar*. FSD. 2003;
- Holsti, Kalevi. *The State, War, and the State of War*. Cambridge University Press. 1996;
- Duppy, Kendra y Siri Aas Rustad. Trends in Armed Conflict, 1946–2017. *PRIO*. 2018.
- Isacson, Adam. “Colombia’s human security crisis”. *Disarmament Forum*, 2, 25-40. 2002.
- Isacson, Adam. The U.S Military in the War on Drugs. En *Drugs and Democracy in Latin America* (pp. 15-60). Lynne Rienner Publishers. 2005.
- Jefferies, Ian. Private Military Companies – A Positive Role to Play in Today’s International System. *Connections*, 1 (4), 103-125. 2002.
- Jenzen-Jones, Nic. *Run Through the Jungle: Colombia’s JUNGLA Commandos*. Small Wars Journal. 2011.
- Kaldor, Mary. “In Defence of New Wars”. *Stability: International Journal of Security and Development*, 2(1). <http://doi.org/10.5334/sta.at>
- Leal Buitrago, Francisco. De improvisación en improvisación. En *la encrucijada: Colombia en el siglo XXI*. Norma. 2006.
- Leal Buitrago, Francisco. *La Seguridad Nacional a la Deriva: del Frente Nacional a la Posguerra Fría*. Alfaomega. 2001.
- Lindsay-Polland, John. “Plan Colombia: U.S. ally atrocities and community activism”. Duke University Press. 2018.
- Lotta, Harbom y Peter Wallensteen. “Armed Conflicts, 1946—2009”. *Journal of Peace Research*, 4 (47), 501-509. 2010. <https://doi.org/10.1177/0022343310376887>
- Luján, Fernando. *Light Footprint: The Future of American Military Intervention*. Center for a New American Security. 2013.



- Marcella, Gabriel, y Donald Schulz. *Colombia's three wars: U.S. Strategy at the Crossroads*. U.S Army War College. 1999.
- Marcella, Gabriel, y Donald Schulz. *Colombia's three wars: U.S. Strategy at the Crossroads*. U.S Army War College. 1999.
- Marcella, Gabriel. *From Ambiguity to Strategic Clarity*. Carlisle: U.S Army War College. 2003.
- Marks, Tom. “Colombian army counterinsurgency”. *Crime, Law and Social Change*, 40 (1), 77-105. 2003.
- Marks, Tom. *Colombian Army Adaptation to Farc Insurgency*. Strategic Studies Institute. 2002.
- Marks, Tom. *Colombian Army Adaptation to Farc Insurgency*. Strategic Studies Institute. 2002.
- Marks, Tom. *Sustainability of Colombian Military/Strategic Support for “Democratic Security”*. Strategic Studies Institute. 2005.
- Mathieu, Fabien y Nick Dearden. “Corporate Mercenaries. The threat of private military and security companies”. *War on Want*. 2006.
- Mertus, Julie. *Bait and Switch: Human Rights and U.S. Foreign Policy*. Routledge. 2008.
- Ministerio de Defensa Nacional. *Política de Consolidación de la Seguridad Democrática*. Imprenta Nacional de Colombia, 2007.
- Moyar, Mark, Hector Pagan y Wil Griego. *Persistent Engagement in Colombia*. JSOU. 2014.
- Ospina Ovalle, Carlos. *La estrategia en Colombia: variaciones del centro de gravedad*. Perry Center Occasional Papers. 2014.
- Passage, David. “Colombia in Turmoil: How the U.S. Could Help”. *Special Warfare*, 13 (1), 8-16. 2000a.
- Passage, David. *The United States and Colombia: Untying the Gordian Knot*. U.S. Army War College. 2000b.



- Pérez Ricart, Carlos. El papel de la DEA en la emergencia del campo policial antidrogas en América Latina. *Foro Internacional* (FI) 231, LVIII, 2018 (1), 5-48, 2018.
- Perret, Antoine. “The Role of the Inter-American System of Human Rights in the Regulation of Private Military and Security Companies (PMSCs) in Latin America” (Tesis doctoral inédita, European University Institute) 2014.
- Perret, Antoine. *Las compañías militares y de seguridad privadas en Colombia: ¿una nueva forma de mercenarismo?* Universidad Externado de Colombia. 2009.
- Pizarro, Eduardo. *Las Farc (1949-2011) De guerrilla campesina a máquina de guerra.* Norma. 2011.
- Puentes, Mauricio. “La militarización en Colombia y el papel de Estados Unidos. Evocando la Doctrina de Seguridad Nacional”. *Revista Cambios y Permanencias*, 8 (2), 256-277. 2017.
- Rabasa, Angel, y Peter Chalk. *Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and Its Implications for Regional Stability.* RAND. 2001.
- Ramírez Lemus, María Clemencia, Kimberly Stanton y John Walsh. Colombia: A Vicious Circle of Drugs and War. En C. Youngers, y E. Rosin, *Drugs and Democracy in Latin America.* Lynne Rienner Publishers. 2005.
- Ramsey, Robert. *From El Billar to Operation Fenix and Jaque: The Colombian Security Forces Experience, 1998-2008.* Combat Studies Institute Press. 2008.
- Rangel, Alfredo y Pedro Medellín. *Política de Seguridad Democrática.* Grupo Editorial Norma, 2010.
- Rempe, Dennis. *The Past as Prologue? A History of U.S. Counterinsurgency Policy in Colombia, 1958-66.* U.S. Army War College. 2002.
- Rendón, José William. La Participación de Compañías Militares y de Seguridad Privadas (CMPS) en el Conflicto Armado Colombiano (1988-2012). (Tesis, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario). 2015.



- Robinson, Linda. *The Future of U.S. Special Operations Forces*. Council on Foreign Relations. 2013.
- Ronderos, María Teresa. *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Aguilar. 2014.
- Rosen, Jonathan. *The Losing War: Plan Colombia and Beyond*. State University of New York Press. 2014.
- Singer, P.W. “Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramifications for International Security”. *International Security*, 26 (3), 186-220. 2001.
- Spencer, David. *Lessons from Colombia’s Road to Recovery, 1982–2010*. CHDS Occasional Paper. 2012.
- Stokes, Doug. *America’s Other War*. Zed Books. 2005.
- Tate, Winifred. *Drugs, Thugs, and Diplomats. U.S. Policymaking in Colombia*. Anthropology of Policy. 2015.
- Tate, Winifred. *Human Rights Law and Military Aid Delivery: A Case Study of the Leahy Law*. *PoLar*, 34 (2), 337-354. 2011.
- Tickner, Arlene. La “guerra contra las drogas”: las relaciones Colombia-Estados Unidos durante la administración Pastrana. En J. Estrada Álvarez, *Plan Colombia: ensayos críticos* (págs. 215-234). Universidad Nacional de Colombia. 2001.
- Tickner, Arlene. B. Tensiones y consecuencias indeseables de la política exterior estadounidense en Colombia. *Colombia Internacional*, 49 (50), 39-61. 2000;
- Tickner, Arlene. Intervención por invitación. *Colombia Internacional*, 65, 90-111. 2007.
- Tickner, Arlene. *Colombia, the United States and Cooperation by Proxy*. Washington Office on Latin America (WOLA), 2014. <http://www.wola.org/es/node/4402>
- Tickner, Arlene y Mateo Morales, “Cooperación dependiente asociada. Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados Unidos”. *Colombia Internacional* 85, 171-205, 2015.



- Tokatlian, Juan Gabriel. National Security and Drugs: Their Impact on Colombian-US Relations. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* , 30 (1), 133-160. 1988.
- Toro, Maria Paula y Andrés Macías. “Las compañías militares y de seguridad privada en Estados fallidos: ¿una solución a la incapacidad estatal?”. *OPERA*, 12 (12), 205-219. 2012.
- Trujillo Ana. La internacionalización del conflicto colombiano hacia Ecuador en la primera década del siglo XXI. *Pap. Polít.* Vol. 17, No. 2, 577-620. 2012.
- Vargas, Alejo. *Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano: antecedentes y perspectivas*. Intermedio editores. 2002.
- Voß, Klaas “Plausibly Deniable: Mercenaries in US Covert Interventions during the Cold War, 1964 – 1987”. *Cold war history* 16 (1), 37-60. 2016.
- Youngers, Coletta y Eileen Rosin. *Drugs and Democracy in Latin America*. Lynne Rienner Publishers. 2005.